

17ª REUNION - Continuación de la 10ª SESION ORDINARIA (ESPECIAL) - MAYO 30 DE 1964

Presidencia de los señores diputados Arturo Mor Roig y Miguel P. Del Pero

Secretarios: doctores Eduardo T. Oliver y Guillermo González

Prosecretarios: doctor Enrique A. Pardo y señor Sebastián Oreste Cánepa

DIPUTADOS PRESENTES:

ABALO, Raúl
ACHIARY, Juan C.
ALFONSIN, Raúl R.
ALMADA, Jorge Mariano
AMURA, Luis
ARANA, Tomás P.
ARIAS, Luis Osvaldo
ARROYO, Ramón F.
AVETA, Francisco O.
AVILA, Eduardo Miguel
BACCAY, Rodolfo D.
BACHINI, José A.
BAFFICO, Alejandro O.
BALBI, Isidro G.
BALBOA, Hernán A.
BALESTRA (h.) Juan
BELNICOFF, Manuel
BERHONGARAY, Pedro J.
HERINI, Carlos J.
BERRINI, Emilio
BO, Angel
BOBILLO, Luis Ignacio
BRAVO, Héctor F.
CACERES, Roberto M.
CAGGIANO, Angel R.
CALABRESE, Pablo
CALVO, Carlos Alberto
CANTONI, Angel Serafin
CARDENAS, Juan Carlos
CARO, José Armando
CARREIRA, Emilio
CENTEJO, José Isaac
CAGGIOLA, Luis S.
CONDOLUCCI, Domingo A.
CONTINI, Juan Carlos
CORAL, Juan Carlos
CORTELEZZI, Osvaldo
CHEBLE, Francisco R.
DAMIANI, Salvador
DE CARA, Iese Eduardo
DEL PERO, Miguel P.
DIAZ O'KELLY, Felipe F.
DI LEO, Amadeo
DOMINGORENA, Horacio O.
DOMINGUEZ, Luis C.
ELENA, Reinaldo
FABRIZIO, Luis N.
FERNANDEZ, José M.
FERNANDEZ, Raúl
FERNANDEZ MENDY, Julio O.
FERNANDEZ NUNEZ, Isidro
FERRARI, Luis
FERREIRA, Jorge W.

FIOL, Juan Antonio
FISCHER, Mauricio
FRAGA, Jorge Horacio
FREYA, José
GALEANO, Roberto A.
GARCIA, Horacio
GARCIA LEYENDA, F. Rodolfo
GARIBALDI, Alberto
GAROFALO, Roberto A.
GHIOLDI, Américo
GOMEZ MACHADO, Héctor
GONZALEZ BERGEZ, Pablo
GRAU, Mario A.
GUALCO, Jorge Nelson
GUTIERREZ, Eduardo O.
HARRINGTON, Luis J. D.
HERRERA, Oscar A.
IGLESIAS, Israel
JOFFE, Emilio
LEJARRAGA, Pablo
LEON, Luis Agustín
LILJESTROM, Eduardo R.
LOZANO, Martín
LUCO, Juan A.
MAGLIETTI, Alberto R.
MALDONADO, Carlos A.
MANSILLA, José R.
MARICO, Adalberto O.
MARTINEZ RAMONDA, Rafael J.
MASSOLO, Eduardo A.
MENDEZ DOYLE, Abel Victor
MERCADO, José Ignacio
MINSK, Hugo E.
MOLINAS, Ricardo F.
MONTE, Ricardo Alvaro
MOR ROIG, Arturo
MOSSET ITURRASPE, Mario
MUJICA, Manuel Martín
MUNIZ GURRIA, Camilo
MUNIZ, Ramon A.
MURATORI, Eduardo D.
MURMIS, Oscar
MUSACCHIO, Vicente M.
OCAMPO, Carlos E.
OREJA, Pablo Fermín
PALACIOS, Alfredo L.
PATLIS, León
PEDRINI, Ferdinando
PENA, Roberto M.
PENA Y LILLO, Silvestre
PEREZ, Raúl
PEREZ GALLART, Alcides B.
PERNASSETTI, Horacio
PESSINO, Felipe
PICADO, Estanislao

PIZARRO, Teodosio F.
PUGLIESE, Juan C.
RASINES, Osvaldo Gregorio
RENE, José María
RIAL, Oscar
RITACCO, Araldo A.
RODRIGUEZ, Rogelio Ramón
RODRIGUEZ DEL REBOLLAR, José
RODRIGUEZ VAGARIA, Eduardo
ROSITO, M. Oscar
ROUZAUT, Adolfo R.
ROZAS, José E.
SAGO, Fayiz
SALADO, Francisco A.
SANDLER, Héctor R.
SCARPELLO, Cayetano
SCHAPIRA, David (1)
SCHAPOSNIK, Eduardo C.
SERU GARCIA, Alberto
SOLARI, Juan Antonio
TARULLI, Pascual
TORREIRO, Raúl
TORRIGLIA, Enrique F.
TORTONESE, Dante Oscar
TROCCOLI, Antonio A.
VACA LOBO, Juan Manuel
VALENTE de PEREZ TORT, Lidia
VAZQUEZ POL, José
VEDIA, Enrique de
VENTEMIGLIA, Rogelio A.
ZANONI, Juan Claudio
ZARRIELLO, Raúl Jorge

AUSENTES, EN COMISION:

BOGLIANO, Palmiro B.
BUSACCA, Salvador F.
CHRISTE, Jorge J.
OBREGON, Pedro A.
PIRAGINE NIVEYRO, Fernando
REQUENA, Raúl María
ROBERTO, Mario
RUIZ, José Oscar

AUSENTES, CON LICENCIA

AGUIRRE CAMARA, José
ARAUCAETA, Félix de
BOFFI, Luis L.
CATALAN, Guillermo
CORNEJO LINARES, Juan Carlos
CUERDO, Ramón
GODOY, Ruperto Honorio
LONGHI, Julio P.
MAGGI, José M.

NOUGUÉS, Isaiás J.
SOLANA, Jorge D.
SOLARI, Eduardo A.
TACHELLA, Eliberto S. J.
VACCAREZZA, Eduardo H.
VINALS, Fernando J.

AUSENTES, CON AVISO:

ANTÓN, Luis
BELGRANO RAWSON, Guillermo A.
BILBAO, Saturnino
COSTANTINO, Adolfo I.

DÍAZ, Diógenes C.
FIGUEROA, Jaime Hernán
GARAY, Fermín J.
LLORENS, Héctor
MUSITANI, Héctor Francisco
PEREIRA, Antonio (1)
ROIS, Roberto
ROMEU VERDIER, Gabriel
SCALITER, Juan

AUSENTES, SIN AVISO:

BRAVO, Carlos A.

CASAS, David Jerge
CASTELLAR, Miguel A.
COLELLO, Clemente Juan
LESCANO, Edmundo A.
LLAVER, Santiago Felipe
MARTÍNEZ, Ramón S.
MIGANNE, Carlos J.
ORTIZ HERNÁNDEZ, Ángel H.
POSSE, Melchor S.
SANTA MARÍA, Oscar Hipólito
SARRULLE, Oscar E.
VILLANUEVA, Julio A.

SUMARIO

1.—Manifestaciones sobre reanudación de la sesión. (Pág. 772.)

2.—Salario vital, mínimo y móvil. Continúa la consideración de los dictámenes de las comisiones de Legislación del Trabajo (especializada) y de Presupuesto y Hacienda en los proyectos de ley del Poder Ejecutivo y de varios señores diputados sobre el asunto del rubro. (Pág. 772.)

3.—Apéndice:

Inserción. (Pág. 846.)

—En Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo de 1964, a la hora 9 y 58:

1

MANIFESTACIONES

Sr. Rodríguez del Rebollar. — Señor presidente: ya son las diez de la mañana. Si estuviera presente el orador...

Sr. Presidente (Mor Roig). — Faltan dos minutos para las diez.

Sr. Rodríguez del Rebollar. — Me anticipo entonces. Si estuviera presente el orador...

Sr. Elena. — El señor diputado se ha adelantado indebidamente. (Risas.)

Sr. Rodríguez del Rebollar. — No lo he escuchado. Digo que me anticipo, y si estuviera presente el orador anotado en primer término, podríamos iniciar la sesión, ya que anoche se ha pasado a cuarto intermedio. Con cualquier número que haya en el recinto, se puede continuar la labor.

Sr. Presidente (Mor Roig). — A las diez en punto se reanudará la sesión. En este instante no se encuentra presente el orador a quien correspondería usar de la palabra en primer término.

Sr. Rodríguez del Rebollar. — Que hable entonces el diputado que le corresponde en el orden de lista.

—Se continúa llamando.

—A la hora 10:

2

SALARIO VITAL, MINIMO Y MOVIL

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa la sesión.

Prosigue la consideración de los dictámenes de las comisiones de Legislación del Trabajo (especializada) y de Presupuesto y Hacienda sobre establecimiento del salario vital, mínimo y móvil.

Tiene la palabra el señor diputado Cheble.

Sr. Cheble. — Señor presidente: en la reunión que la Honorable Cámara realizó en el día de ayer ha tenido oportunidad de expresar su pensamiento la mayoría de los bloques parlamentarios que la integran. Desde el miembro informante, señor diputado Pena, hasta el digno marco en el cierre con el uso de la palabra por el señor diputado Palacios, todos los sectores políticos han expresado su pensamiento con respecto al tema en debate.

Advierto que como hombre joven me ha satisfecho observar la evolución experimentada en especial por el sector conservador, y aun por el propio radicalismo, que quiebran en esta materia el viejo liberalismo económico.

Se ha escuchado por la voz joven del señor diputado Martínez Raymonda la palabra de la democracia progresista, realmente progresista. El señor diputado Salado trajo el pensamiento de la democracia cristiana, defendiendo la doctrina social de la Iglesia. El señor diputado Serú García expuso el pensamiento de su sector, defendiendo el principio de la justicia social, que hace a la esencia de su partido. Por último, el señor diputado Palacios, con citas históricas, anecdóticas, doctrinarias y legislativas, trajo el pensamiento del sector socialista a este recinto.

Debo apresurarme a reconocer la paternidad en esta materia al sector del socialismo. Pero también debo reconocer que el viejo planteo socialista ha sido actualizado y aun superado.

Los hombres que integramos la Confederación de Partidos Provinciales entramos en este debate con la tranquilidad y la seguridad que da el saber que ninguno de sus miembros se encuentra ligado o vinculado a oligarquías capitalistas que explotan en forma despiadada a la clase tra-

bajadora o asalariada, ni tampoco nos encontramos vinculados a demagogos que la estimulan para ponerla al servicio de fines inconfesables. Estamos al servicio del país en la integración de todos los elementos y sujetos que hacen al ser nacional, al desarrollo de los pueblos, basados en un principio de equidad y de justicia.

Anhelamos que el capital se humanice y aspiramos a que el obrero actúe con mentalidad y con responsabilidad argentinas.

El tema del salario mínimo vital y móvil no es nuevo, pero siempre se actualiza cuando el aumento del costo de la vida hace necesaria la adecuación de sueldos, en especial de los sueldos inferiores, porque por rara coincidencia en los presupuestos de la Nación, desde hace muchos años, se nota una especie de privilegio de los cargos altos, que se crean la mayoría de las veces en forma innecesaria para satisfacer las pretensiones de amigos de quienes ejercen el poder, lo que gravita en contra de la justa remuneración de los empleos inferiores.

Me preocupa, como al que más, la situación del personal inferior de la administración pública y demás empleados, cuyos sueldos y salarios deben servir para la satisfacción de las elementales necesidades de esos agentes y de sus familias. Por ello, el enfoque de este problema necesariamente debe hacerse desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Así lo han interpretado, por otra parte, las entidades obreras, las entidades empresarias y los entes estatales, analizando no solamente el salario mínimo vital y móvil, sino también las causas que generan este debate y la gravitación que puede traer la implantación de dicho salario en la economía toda de la Nación.

Por eso hubiésemos deseado que una ley de tanta importancia como la que sancionará este Parlamento se estudiara con mayor profundidad, a fin de que la misma sea un paso constructivo dado sobre bases ciertas, ya que toda construcción teórica, dictada sin sustanciación, necesariamente es falsa.

Tememos, pues, que esta ley sea una nueva aspirina que mitigue el dolor obrero en un lapso fugaz y transitorio. No obstante ello, con los elementos de juicio que obran en nuestro poder, trataremos de fijar la opinión de nuestro bloque, haciendo brevemente un análisis de los antecedentes que sobre esta materia hemos recogido.

La primera vez que se habló en la Cámara de Diputados del salario mínimo para los empleados del Estado fue en el año 1913. En aquella oportunidad el diputado Juan B. Justo pronunció un discurso en la sesión del 7 de marzo de dicho año; el mismo se caracterizó por una crítica severa de las corruptelas y vicios de que adolecía el presupuesto nacional, demostrando que el mismo estaba más al servicio de la oligarquía y en contra de los cargos útiles donde se encontraban los empleados inferiores. Afirmaba que era una obligación aumentar los sueldos de

estos últimos, ya que desde todo punto de vista gozaban de un salario impropio, y decía que al pagárseles mejor, necesariamente tenían que ser buenos servidores; por otra parte el Estado argentino se deshonraría explotándolos inicuaamente. «Un salario bajo es un despilfarro —decía el diputado socialista— en el sentido de que el que no recibe no devuelve en servicio la suma que se le entrega; es un empleado descontento. Debemos aumentarlo para que el Estado argentino no aparezca explotando a sus empleados más inicuaamente que los vulgares empresarios.» Este es el punto de partida de la legislación del salario mínimo para los empleados y obreros del Estado.

En la sesión del 17 de septiembre de 1913, el diputado Nicolás Repetto presenta un proyecto sobre jornada y salario para los obreros jornaleros del Estado y municipio federal. Es interesante la mención del artículo 29, que decía: «El sueldo o salario para los obreros y jornaleros comprendidos en el artículo precedente, no podrá ser inferior a cuatro pesos por cada jornada legal de trabajo en día hábil. El monto del salario será duplicado cuando el trabajo se ejecute durante la noche o el día domingo.»

Decía Repetto en aquel entonces: «No me es posible precisar con toda exactitud —éste es el caso actual de la Cámara— la erogación que demandará al Estado el cumplimiento de la ley que propongo, porque aún no me han sido remitidos todos los datos que he solicitado a las oficinas públicas respectivas, datos que son indispensables para hacer un cálculo preciso.» Y añadía: «La jornada de ocho horas y el salario mínimo consagrado por la ley argentina, significarán exteriorizar ante el mundo el alto concepto que nos inspira el trabajo manual corroborado prácticamente por las condiciones ejemplares creadas a los humildes servidores del país.»

Este proyecto fue reproducido por el diputado Repetto el 14 de junio de 1915 y el 13 de agosto de 1917, sin que haya obtenido sanción.

Hasta 1920 el salario mínimo era fijado en la ley anual de gastos. Para sustraer la sanción del salario mínimo de dicha ley, la representación socialista resolvió proyectar este aumento en forma de una ley permanente que fue presentada en la sesión del 19 de julio de dicho año. Este proyecto no solamente no se trató como ley permanente, sino que ni siquiera fue tenido en cuenta por el Poder Ejecutivo, ni por la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara.

Por ese motivo el diputado Justo, en la sesión del 18 de febrero de 1921, impugna el presupuesto en general haciendo su crítica con los siguientes conceptos: «Este presupuesto mantiene la chocante desigualdad de clases en la remuneración de los servicios que hemos denunciado aquí con cifras en repetidas ocasiones. Hemos demostrado que por lo que aquí se paga 100 en materia de remuneraciones de trabajadores efectivos para el Estado, en países donde se tiene

más respeto por el trabajo humano se paga 150, y que en países mejor administrados, a altos funcionarios que tienen la responsabilidad de administraciones incomparablemente más grandes, más activas, más eficientes se paga 100 mientras que aquí se paga 135 ó 140 a los del mismo título.»

Y agregaba: «Me refiero, en primer término, al salario mínimo, que es incluido por primera vez en la ley de presupuesto para el año 1918. La ley se ha aplicado más o menos completamente desde que se la dictó, motivando una ligera elevación en los gastos públicos, pero lo que se votó para 1918 resulta ya viejo e insuficiente, y es de deplorar que la Comisión de Presupuesto no haya tenido en cuenta el proyecto presentado por la diputación socialista a mediados del año próximo pasado en el sentido de elevar en lo que consideramos necesario el salario mínimo.»

Ante la importancia y la extensión del debate, la mayoría en aquel entonces lo cierra y rechaza en votación nominal por 57 votos contra 37 la indicación socialista de tratar inmediatamente el artículo 6º de la ley general de presupuesto hasta que finalmente es rechazado en su totalidad.

Se llega así hasta el año 1921, cuando la mayoría se ve precisada a sancionar por unanimidad, el 30 de septiembre, y convertir en una viviente realidad, después de nueve años de ruda y tenaz lucha parlamentaria, la iniciativa de Justo del año 1913.

En el año 1957 se incorpora al texto constitucional el artículo 14 bis como parte integrante de los derechos sociales, que aseguran la protección del trabajo en sus diversas formas y al trabajador, condiciones dignas y equitativas de labor, jornadas limitadas, descansos y vacaciones pagos, retribución justa, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en los registros sociales, garantías a los gremios para concertar convenios colectivos de trabajo y recurrir a la conciliación y arbitraje, el derecho de huelga, etcétera, y junto con estos derechos sociales, la institución del salario mínimo vital y móvil.

A partir de ese momento todos los partidos políticos incorporan a su programática la institución que tiene a consideración la Honorable Cámara. La conferencia de Ginebra de 1928, al aprobarlo, fue la que prácticamente dio por tierra con los partidarios de las escuelas liberales en materia económica que condenaban la intervención del Estado en esta materia.

Otros antecedentes que pueden citarse son el programa socialista fijado en el congreso de París y el congreso socialista de Berna, como así también el Tratado de Versalles.

Este tema ha sido ampliamente debatido por la Organización de los Estados Americanos en la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo realizada en Bogotá en marzo de 1963; también por la Organización Internacional del Trabajo en su conferencia anual de 1928, y en otros congresos y organizaciones internacionales, habiéndolo hecho suyo, además, la Iglesia Católica por medio de las encíclicas *Rerum novarum*, *Quadragesimo anno* y *Mater et magistra*, culminando así este derecho del trabajador a un salario mínimo y vital.

Hay también otros antecedentes o iniciativas concretadas en proyectos de ley en este Parlamento, como las de 1939, 1942, 1943, 1960, etcétera.

Frente a estos antecedentes se movilizan las instituciones del país y se hace eco este Parlamento, que ha demostrado gran sensibilidad para la solución de los problemas sociales.

La CGT, teniendo en cuenta cifras oficiales publicadas por el Servicio Estadístico Nacional a septiembre de 1963, llega a determinar el salario mínimo en la suma de 13.500 pesos, teniendo presente que el trabajador no puede prescindir a esta altura del proceso evolutivo social de los elementos para el hogar y aspira a que de una vez por todas se consagre el derecho del que contribuye con su esfuerzo a crear la riqueza nacional, para que logre, como en justicia corresponde, un salario decoroso, que impida el régimen pauperizante que a diario se presenta.

En su publicación titulada «Las bases y estudios del salario mínimo vital y móvil» de marzo del corriente año, expresa que el cálculo de 13.500 pesos se hace en base al inusitado aumento del costo de la vida, computando en el valor estimado los elementos que no han sido incluidos en el presupuesto familiar. Y da a conocer un cuadro comparativo del aumento del costo de la vida y del salario mínimo sobre dichos costos, desde 1956 hasta 1963, que es necesario conocer la Honorable Cámara.

Ese cuadro comparativo parte de febrero de 1956, con un costo de la vida al que se le asigna base 100, fijándose un salario mínimo de 1.120 pesos. En 1957, sobre un costo de vida de 134,1 se fija un salario mínimo de 1.501,9. Para los años siguientes, las cifras son las que doy a continuación: 1958, costo de vida 176,5, salario mínimo 1.976,8; 1959, costo de vida 377,2, salario mínimo 4.224,6; 1960, 480,2 y 5.378,2, respectivamente; 1961, 545 y 6.104; 1962, 698 y 7.817,6; 1963, 865,7 y 9.695,8, y en diciembre de 1963, sobre un costo de vida de 1.010,9, se fija un salario mínimo de 11.322,1.

La citada central obrera afirma, por otra parte, «que el obrero sacrificó primeramente lo prescindible, o sea los artículos del hogar, y que en la medida en que se iba reduciendo el poder adquisitivo de su salario continuó sacrificando el calzado y luego el vestido, y pronto

se advirtió cómo las industrias dedicadas a su producción también soportaban problemas. Prueba de ello es que los primeros créditos de reactivación considerados por el nuevo gobierno dan prioridad precisamente a este tipo de industrias.»

Afirma, por último, «que se está resintiendo la alimentación. El estado de desnutrición con que llegan los niños a las escuelas de los barrios periféricos, los pequeños pidiendo limosna hasta altas horas de la noche y la reaparición de enfermedades infecciosas y endémicas, que con el avance de la ciencia y la campaña anteriormente cumplida ya parecían erradicadas, están marcando una situación de extrema gravedad que es preciso combatir con criterio imaginativo y con absoluta decisión.»

Lamento que los dirigentes cegetistas hayan contemplado solamente la periferia de la Capital Federal, que no hayan extendido un poco más allá sus miradas deteniéndose, por ejemplo, en el campo santiagueño, para así comprobar no solamente la situación de los niños que asisten a la escuela sino la existencia de muchos lugares de la provincia donde ya no se pide limosna porque tampoco se encuentra quien esté en condiciones de darla. Hay lugares de mi provincia con respecto a los cuales no resulta exagerado decir que allí no se come una sola vez al día, sino que a veces se come día por medio; en ocasiones se llega a engañar al estómago tomando mate exclusivamente, e incluso hay zonas donde durante meses no se conoce la presencia de los artículos de primera necesidad más elementales. Consecuencia de todo ello es que nuestros ranchos no se convierten nunca en viviendas dignas, higiénicas y confortables, sino que —ya lo dije en otra oportunidad— son taperas, testigos mudos de las miserias materiales de un pueblo que, tal vez por esa circunstancia, desarrolla los valores espirituales y muere apegado a su tierra, esperando la justicia de quienes tienen en sus manos la responsabilidad de la conducción de la República y la provincia.

Sabemos que la central obrera es consciente del papel que cumple la masa trabajadora dentro de la sociedad, y, como bien lo dice, en su carácter de representante no puede menos que pedir lo que en justicia y en derecho le corresponde al trabajador por su contribución en la riqueza nacional. Pero reitero que como santiagueño y hombre del interior del país hubiera deseado que los dirigentes cegetistas hubiesen fijado su mirada también en el resto de la República.

Así como la central obrera, obrando con verdadero sentido patriótico, acepta la posibilidad de otras soluciones a fin de estabilizar la situación política, económica y social del país —y la sabemos capaz de prestar su colaboración para alcanzar resultados positivos—, existen otras entidades o instituciones que desde distin-

tos ángulos enfocan el problema y convergen hacia el mismo fin.

Tengo en mis manos la nota que la Cámara Industrial Textil Lanera enviara al señor presidente de la Honorable Cámara, en la que se hace un análisis objetivo y real del problema y se proponen soluciones concretas a fin de conseguir un mejor nivel de vida, que debe ser la aspiración general de todos, ya que si bien es cierto que existen beneficiarios directos de las mejoras, porque ellas implican un inmediato acrecentamiento del standard de vida y la posibilidad de promover para sus hijos la apertura hacia mayores oportunidades por el estudio de una profesión liberal o técnica, estas mejoras influirán necesariamente sobre los beneficios de los empresarios, porque los ingresos de una colectividad tienen un destino que es el consumo, y el mayor consumo es equivalente a mayores ventas.

Agrega CITLA: «Somos, pues, socios en el negocio y deseamos con la misma intensidad que puedan cumplirse esas coincidentes aspiraciones. Pero en una nación no pueden promoverse con carácter estable condiciones de vida altas si alto no es el producto bruto nacional, porque no se puede repartir lo que no existe.»

Sabemos que hay numerosas causas que gravitan sobre la crisis económica que vive el país. Mientras ellas subsistan, todas las medidas que pueda tomar la Honorable Cámara serán meros paliativos y tendrán carácter transitorio. Por ello nuestro bloque considera que para dar solución definitiva al problema que se debate es necesario arrancar de raíz las causas que producen la inestabilidad económica, que desgraciadamente repercuten en toda la vida de la Nación.

No escapa a nuestra preocupación que el salario mínimo, vital y móvil que sancione la Honorable Cámara, en las circunstancias reales que vive el país, puede convertirse en un arma de doble filo que se vuelva contra la clase asalariada y que incida aumentando la desocupación en el país, ya que con esta inestabilidad económica no podemos precisar con exactitud hacia dónde nos conducirá la implantación de esta medida. Sería interesante conocer los informes de los organismos técnicos así como las investigaciones de los institutos universitarios, porque ello disiparía muchas dudas de quienes entramos en este debate imbuidos de un principio de equidad y de justicia.

Con estas reservas nuestro bloque, señor presidente, va a apoyar en general el dictamen de la mayoría, considerando, como aquí se ha dicho, que el aumento del salario no incide sobre la inflación sino que es la inflación la que lleva necesariamente a la fijación de este salario, y que este salario de emergencia que se fija se confirme en definitiva cuando se tengan en la mano los elementos suficientes para poder establecerlo.

Aspiramos y tenemos la esperanza de que la ley que sancionamos asegure la estabilidad y el adecuado nivel de vida a todos los habitantes del país, a fin de que no solamente puedan conseguir una alimentación adecuada, vivienda digna, asistencia médica, vestido decoroso, etcétera, sino también que puedan desarrollar los valores intelectuales y espirituales que hacen a la esencia misma del hombre, para que cada persona humana, por el solo hecho de serlo, tenga igualdad de posibilidades para desarrollar, forjar y temprar su propia personalidad, ya sea individual o colectivamente. (*¡Muy bien!*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Massolo.

Sr. Massolo. — Señor presidente: después de las opiniones emitidas en el seno de la Honorable Cámara, casi todas coincidentes en cuanto a la necesidad de sancionar el salario mínimo, vital y móvil, confieso que poca es la novedad que puede introducirse en el debate. En consecuencia, mi exposición será breve.

Por otra parte, soy un convencido de que en este cuerpo, con más de once bloques, en razón de la proporcionalidad, la tarea no podrá ser cumplida en forma fecunda si no nos limitamos y disciplinamos en el uso de la palabra, procurando la síntesis, y abandonando, por lo tanto, los debates académicos y las pretensiones —muy lógicas— de la elocuencia, y los discursos extensos, sobre todo en problemas como éste, respecto de los cuales hay acuerdo general en las grandes líneas. Hago esta reflexión por cuanto es la forma que se ha venido trabajando hasta ahora en esta Cámara no podremos sancionar nada más que cuatro o cinco leyes importantes, y ello si no se generalizan —como parece que está ocurriendo— las cuestiones de privilegio por cualquier cosa y las interpelaciones a los ministros, que pueden ser reemplazadas por un simple pedido de informes por escrito.

Esto es muy importante porque el pueblo nos observa y quiere ver un Parlamento práctico y dinámico, en consonancia con los nuevos tiempos y las horas difíciles por que atraviesa la República. Lo que no debemos descuidar —y esto es también muy importante— es el estudio y el trabajo en el seno de las comisiones.

Señor presidente: yo votaré el salario mínimo, vital y móvil tal como lo han despachado las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda. Confieso que no soy un técnico para saber con precisión matemática en qué medida esta sanción puede traer aparejado un impacto inflacionario en la economía de la Nación. Pero lo que sí sé es que cada vez que se ha proyectado, en éste o en cualquier otro país, una iniciativa de esta naturaleza, en procura de aliviar la situación de la clase trabajadora, siempre, toda la vida, se han levantado las voces agoreras anunciando dramáticamente el derrumbe y la catástrofe y, sin embargo, el mundo ha seguido andando y marchando cada

vez más progresivamente hacia un mayor equilibrio social y una más justa y equitativa distribución de la riqueza.

Es cierto, como bien lo afirmaron los diputados Monte y Martínez Raymonda en sus constructivas exposiciones, que esta Cámara ha escuchado con particular atención, apoyando el salario mínimo, que todo sería ilusorio si no hay simultáneamente un proceso cierto de acrecentamiento de la riqueza a través del incremento de la producción, y que una política inteligente de reactivación económica es indispensable a los fines de apuntalar y afianzar las conquistas sociales alcanzadas. Pero también es cierto que este problema no lo podrán resolver nunca, señor presidente, los que quieren subordinarlo todo a una simple cuestión matemático-económica, olvidando que la mayor riqueza de los pueblos es la integridad y la defensa de la familia. Esto, que es un lugar común, lo dicen los más grandes sociólogos, los estadistas, los pensadores, los filósofos y la Iglesia Católica a través de sus célebres encíclicas papales. Y cuando yo era un adolescente, recuerdo emocionado que leía con avidez ese hermoso libro de Alfredo Palacios, escrito hace muchos años, titulado *En defensa del valor humano*, libro que deberían leer todos los que aspiran a ocupar una banca en este Congreso de la Nación Argentina, así como otras obras del mismo autor, no menos importantes, como *El dolor argentino* y *La justicia social*.

Yo sé bien, aunque no sea un técnico, y no lo soy, que no se puede repartir miseria ni ilusiones; pero también sé, porque lo he aprendido hace mucho tiempo, que las fuerzas del privilegio no se resignan al avance de los pueblos, hasta que un día, a veces el menos pensado, tienen que perderlo todo, como ya ha sucedido y puede volver a suceder. Entonces tendrán que llorar como mujeres lo que no supieron afrontar como hombres.

Reconozco, y no podría ser de otra manera, que en todo lo que hace al derecho del trabajo es importante no descuidar la disciplina económica; pero por encima de ella hay un problema de ética consustanciado con el valor intrínseco del hombre, de la criatura humana y de su familia. Y este problema, que es social, no deben dejarlo de lado los economistas, que prefieren manejar las estadísticas y los números pero que no tienen la más mínima sensibilidad humana frente al drama, la miseria y la desesperación de los hogares desamparados. Por eso hemos pensado más en la necesidad de una familia, para establecer el salario, que en otras consideraciones que pueden ser importantes, y lo son. Pero la seguridad social es el complemento obligatorio de la democracia política, y en eso estamos.

Deseo, señor presidente, hacer otras consideraciones. Reconozco que es cierto que hay que incrementar la producción; que es cierto

que no se puede distribuir lo que no existe; que es verdad que hay evasión de impuestos, como se ha dicho en esta Cámara; que hace falta una política fiscal con sentido social; que hay muchos ricos y muchísimos pobres; que hay un milagro alemán, aunque no sea tanto el milagro; que debemos superar viejas estructuras, ya caducas; que hay que realizar la reforma agraria; que hay que electrificar el campo; que hay que rescatar la riqueza argentina y distribuirla; que hay que defender la soberanía. Todo esto es cierto; pero nada de eso podrá hacerse si no empezamos de una vez por todas a practicar en serio y en verdad el régimen de la democracia, porque sin estabilidad política y sin paz social no puede haber justicia. Nadie debe tener ni pretender tener más derechos que los acordados por la ley y por la Constitución, empezando por el propio gobierno y siguiendo por los partidos políticos, las universidades, los obreros, los patronos, los profesores, los alumnos y los sindicatos.

En este constructivo debate que está realizando la Honorable Cámara yo afirmo que no debemos tener miedo a las conquistas sociales, ni al progreso, ni a la implantación del salario mínimo, vital y móvil que estamos discutiendo, pero sí debemos temer al desborde de la fuerza y a los planteos reñidos con la ley y con la Constitución.

Hemos logrado recuperar las instituciones democráticas, y nadie podría decir con seriedad que no se gobierna con la ley y con la Constitución. En cuanto al argumento de la pretendida inoperancia y a esa irónica referencia a la meditación filosófica de que tanto se habla —favoreciendo inconscientemente un clima que no responde a la realidad—, yo contesto que no se trata de inoperancia, sino más bien de una resistencia a la «operancia» del gobierno que preside Arturo Illia. Esta resistencia puede concretarse en pocas palabras: en cuanto hace a la política petrolera, a la política ferroviaria, a la política energética, a la política siderúrgica, a SEGBA, en particular al Banco Mundial y a la defensa de la soberanía. Esta es la respuesta a esa pretendida inoperancia y a la referencia a la meditación filosófica que se hizo en esta Cámara.

A este respecto, quiero relatar un cuento que conozco desde niño. Un hombre del común encontró un día, en la ventana de una finca, a un hombre que dejaba reposar sobre su brazo su propia cabeza; al preguntarle qué estaba haciendo, el hombre le contestó: estoy trabajando. Pero al día siguiente encontró al mismo hombre plantando un árbol y al volverle a preguntar qué estaba haciendo, éste le contestó: estoy descansando.

Traigo este cuento al caso porque la referencia se hizo con relación a nuestro gobierno; y puedo afirmar, con toda seriedad, con toda honestidad y con la mayor imparcialidad posible

de que es capaz un hombre que forma parte del partido en función de gobierno, que nuestro presidente trabaja cuanto medita, y por suerte para el país, medita lo suficiente.

Estamos acostumbrados a hacer las cosas sin reflexión y sin meditación, y el estado en que se encuentra el país es posible que sea el resultado de la falta de reflexión, de pensamiento y de meditación.

Es cierto que es necesario adecuar la labor al ritmo de los nuevos tiempos y que hace falta estar a tono con el progreso de la técnica. Ayer en la Cámara se habló de los vuelos espaciales; estoy de acuerdo. Pero no olvidemos que el resultado de esa técnica es el fruto de la labor silenciosa en los laboratorios y en los gabinetes, de los hombres de ciencia, de los filósofos y de los pensadores.

Yo no deseo para mi país un presidente que se mueva físicamente, sino un gobernante estadista que piense y medite los problemas del país y que los resuelva con sentido argentino, tratando de conciliar, de la mejor manera posible, el régimen de la democracia con el imperio de la justicia social.

Para concluir, deseo decir dos palabras más. En este momento difícil de la Argentina, es necesario que los hombres de todos los partidos y de todas las procedencias que integran la Cámara nos miremos siempre, no como enemigos, sino como argentinos, animado cada uno con la individualidad que Dios nos ha dado, como seres humanos que anhelan en definitiva el triunfo de las instituciones libres y el progreso de la República. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Solari.

Sr. Solari (J. A.). — Sin ánimo de extender desmesuradamente este debate, y aun cuando coincido con el señor diputado por Buenos Aires sobre la necesidad de adoptar algunas nuevas normas que aseguren una mayor agilidad y eficiencia al trabajo legislativo de la Cámara, debo cumplir con el deber irrenunciable de fundar, con la mayor brevedad, la posición de los diputados socialistas democráticos frente al dictamen que consideramos.

Podría decirse que en esta materia como en otras el país registra un atraso de varias décadas. No significa en modo alguno que se haya carecido a lo largo de las Legislaturas nacionales de iniciativas inteligentes, bien fundadas y demostrativas del celo empeñoso de legisladores de distintos sectores, cuyo recuerdo perdura en los anales del Parlamento.

Pero es indudable que una ley de carácter social, destinada a beneficiar a grandes sectores de trabajadores, ha demandado entre nosotros, término medio, un cuarto de siglo para su sanción. Alguna vez uno de nuestros hombres más representativos se tomó el trabajo de realizar

un estudio a ese respecto, y si mal no recuerdo se refirió precisamente a la ley que obliga al pago de salarios en moneda nacional, cuya vigencia no es siempre todo lo amplia y correcta que las circunstancias exigen y que deberemos tratar, por otra parte, de que se cumpla con la mayor extensión.

El problema del salario mínimo, que ahora se extiende al concepto de móvil y vital, tiene larga data. Desgraciadamente no he podido seguir este debate desde su iniciación, como es mi costumbre, por tener que cumplir otras tareas encomendadas por la Cámara, juntamente con distinguidos colegas del Senado y de este cuerpo, en relación con la visita que realizan al país legisladores chilenos. Tarea que me permite anunciar a la Cámara hemos realizado en un ambiente de franca cordialidad, llegando a la firma de una declaración que seguramente contribuirá a ahondar y a acentuar los viejos, históricos y tradicionales lazos de amistad que nos unen a la república hermana de Chile.

Es seguro que en el curso de esta deliberación los oradores, muchos de ellos de reconocido prestigio, deben haber aportado los antecedentes que están por lo general al alcance de todo mediano estudioso de estos asuntos.

El señor diputado Massolo decía que él no es un técnico. Yo me permitiría, con cierto optimismo, decirle que no pierda la esperanza de serlo. En alguna manera, el tecnicismo, siempre que no se abuse de él para caer en la tecnocracia, ayuda en la labor de gobierno, y sin duda, siempre refiriéndome a la labor legislativa que preocupa a nuestro colega, la Cámara está necesitando la colaboración, no muy onerosa pero sí inteligente, de un grupo de técnicos que ayuden y contribuyan a la tarea que nos es específica y propia.

La idea del salario mínimo, reitero, viene de lejos. En mis apuntes, hechos un poco apresuradamente por la razón que acabo de señalar, he anotado que fue implantado desde 1894 en países de habla inglesa, como Australia, Nueva Zelandia y Nueva Gales del Sur, dictándose entonces una legislación adecuada que establecía, en principio, la remuneración mínima del trabajo humano, fijada periódicamente en las distintas industrias y ocupaciones por comisiones paritarias locales.

Es claro que el hecho trascendente que fija una norma, yo diría decisiva en esta materia, se produce después de la primera guerra con el Tratado de Versalles, que establece —y ello ha de haberse recordado en la Cámara más de una vez en este debate— que «ni de derecho ni de hecho el trabajo de un ser humano debe ser asimilado a una mercancía o a otro artículo del comercio». Era el reconocimiento de la vieja lucha, a veces cruenta, en los países europeos principalmente, de las fuerzas obreras y socialistas en demanda de mayor justicia social y de un más alto nivel de vida y de labor. Y era, desde luego, la réplica a las teorías burguesas

y capitalistas que consideraban el trabajo humano como una mercancía.

Estas teorías reaparecen de vez en cuando hasta en ciertos debates parlamentarios, adornadas con otra fraseología, pero que en el fondo sirven a esos intereses, no diría desconociendo los de la clase trabajadora, pero sí atendiendo más a las preocupaciones o ventajas de ciertos sectores minoritarios parasitarios y casi siempre voraces.

El señor diputado Cheble nos ha hecho una muy acertada síntesis de la labor socialista, que hemos escuchado con agrado, porque lo revela como un hombre deseoso de conocer nuestra tradición, y con un espíritu animado de preocupaciones sociales recomendables. En esa síntesis me parece que el señor diputado Cheble ha recordado al doctor Justo en el informe que presentó a la Conferencia Internacional Socialista de Berna. Al comentar la cláusula de Versalles nuestro maestro Juan B. Justo, que cada vez se nos aparece más profundo en el pensamiento, más ejemplar en la conducta y más maestro en la integridad de su recia personalidad, decía: «No es el nuevo principio expresión de misericordia, sino saludo alentador a los que trabajan y combaten.»

La Oficina Internacional del Trabajo ha documentado en un opúsculo de 1958, cuya reseña omitiré, pero que acaso sería conveniente que se publicara en el Diario de Sesiones, los esfuerzos realizados por la institución sobre esta materia. Nuestro gobierno está adherido a la OIT, y supongo que estará al día con el pago de las cuotas —lo que no ocurre con las Naciones Unidas—, porque si no, correríamos el riesgo de no poder votar en algunas deliberaciones importantes.

La OIT ha prestado realmente una gran colaboración en este aspecto, porque evidentemente está sobre las pasiones políticas y sobre los intereses, que chocan a veces violentamente, de los diversos países, y traza normas generales de estudio, de elaboración de proyectos e iniciativas como las que debate la Cámara.

La OIT, donde como saben los señores diputados están representados el Estado, los obreros y los empresarios, procede con un gran criterio de objetividad, no improvisando ni dejándose llevar por reclamos, a veces un poco bullangueros, aunque en el fondo sean justos, que pueden perturbar la labor de los hombres de gobierno y los legisladores.

En otra parte de ese opúsculo, la OIT sintetiza bien, a mi juicio, cuáles son las corrientes o los criterios con que se ha venido encarando este problema del salario mínimo. Los Estados —dice— que actualmente no poseen legislación en esta materia parecen clasificarse en dos categorías. Por una parte un grupo de países en que, dada la amplitud del movimiento sindical, la extensión del recurso a las negociaciones colectivas, los procedimientos de conciliación y

arbitraje y las estables condiciones de empleo, el Estado considera innecesaria la creación de métodos especiales de fijación de salarios mínimos. Por otra parte, en algunos países la ausencia de sistemas para la fijación de salarios mínimos se atribuye a la falta de organización de la industria y entre los trabajadores, así como a las condiciones económicas generales. Sin embargo, procede observar que las circunstancias mencionadas en el último caso son precisamente las que se enumeran en el Convenio de 1928, como que requieren la aplicación de métodos para la fijación de salarios mínimos.

Se desprende de las memorias elevadas por los gobiernos que, desde la adopción del Convenio número 26, en 1928, el concepto del salario mínimo ha sufrido considerable evolución. Hace treinta años, los métodos para la fijación de salarios mínimos parecían haberse considerado primordialmente como un mecanismo marginal encaminado a aplicarse en casos en que, debido a la falta de un régimen eficaz para la fijación de salarios, existía un peligro de explotación del trabajador. Esto implicaba, por una parte, que los métodos para la fijación de salarios mínimos no interfirieran con las negociaciones colectivas existentes y con las disposiciones de conciliación y de arbitraje y que, por otra parte, operasen sólo en determinados casos aislados. En los años sucesivos se ha desarrollado el concepto del salario mínimo nacional o, como se lo denomina en la legislación francesa, del salario mínimo interprofesional garantizado. Tal salario mínimo parece haberse adoptado en determinados países en lugar o, incluso, además de la legislación anterior que permitía la fijación de tasas mínimas para determinadas industrias. La tendencia a generalizar la protección por medio del salario mínimo puede observarse también en la inclinación de ciertas autoridades de salarios mínimos a dictar órdenes generales sobre salarios mínimos, en lugar de órdenes para determinadas ocupaciones, en el establecimiento de un salario básico o vital como norma de referencia para determinadas órdenes sobre salarios y en la extensión a los trabajadores del sexo masculino de la legislación anteriormente aplicable a mujeres y a menores únicamente. Sin embargo, procede observar, según las memorias gubernativas, que es principalmente entre los trabajadores que no están organizados donde las tasas de salarios mínimos tienden a convertirse en tasas efectivas de salarios, de manera que un salario mínimo general puede en la práctica proporcionar precisamente la protección marginal contemplada por el Convenio número 26.

La Oficina Internacional del Trabajo, poco después de su creación, resuelve llevar a la conferencia de mayo de 1927 el siguiente punto para el orden del día: Métodos de fijación de salarios mínimos en aquellas industrias en que la organización de los patrones y de los obreros

es insuficiente y en las que los salarios son excepcionalmente bajos, teniendo en cuenta particularmente el trabajo a domicilio.

Desde entonces se ha avanzado en el mundo, no sólo en este aspecto, sino en lo que se refiere a la legislación protectora del trabajo de hombres, mujeres y niños. Y repito que esto se ha logrado aparte, desde luego, de la influencia, que yo llamaría espiritual, de otros núcleos de opinión —incluso de la Iglesia, que en sus últimas encíclicas aborda estos asuntos con un criterio amplio de justicia y de fundamento humano—, en gran medida gracias a la acción de la organización obrera y del pensamiento e ideario socialistas.

Con respecto a nuestro país, me veo desde luego muy aligerado en mis tareas, porque el señor diputado Cheble ha resultado un estimable colaborador en este asunto. Claro que no me ofrezco a presentarle la ficha de afiliación porque temo que se resista a firmarla. (*Risas.*) Pero, de todas maneras, le agradezco su colaboración porque es importante el reconocimiento que ha hecho...

Sr. Cheble. — Los hombres del interior tratamos siempre de trabajar con un sentido de justicia.

Sr. Solari (J. A.). — Exactamente, y secundaré al señor diputado agregando algunos antecedentes concretos que he recogido en una gira reciente. La observación del señor diputado es atinada a propósito de la preocupación de ciertas entidades obreras a no alzar la mirada más allá de la avenida General Paz.

En nuestro país, el Partido Socialista ya tenía establecido en su programa de 1925, como una reclamación, la fijación de un salario mínimo y de un horario máximo para todos los trabajadores industriales y agrícolas empleados por el Estado, las provincias o las comunas, o por los empresarios de trabajos públicos. La reforma de ese programa se concretó en un congreso extraordinario celebrado en Córdoba algunos años después, para darle mayor amplitud y establecer las bases que me parece son todavía razonables y pueden guiarnos para la sanción de leyes como la que discutimos. En esta reforma se hablaba de la fijación de un salario mínimo para los trabajadores empleados por el Estado, las provincias y las comunas, así como por empresas que exploten servicios públicos; fijación de un salario mínimo para los menores y las mujeres, según las industrias y localidades, por comisiones establecidas por la ley; y fijación de un salario mínimo para los trabajadores adultos sobre la base del costo de la vida, según la rama de producción y la localidad, por comisiones mixtas de patronos y obreros con la intervención del Estado.

Reitero que, a mi juicio, éstas siguen siendo normas eficientes e inteligentes que por desgracia no hemos sabido recoger ni tener en cuenta a lo largo de los años transcurridos.

El salario mínimo ha sido una constante preocupación socialista, y pueden creer los señores diputados que no ha sido con un propósito electoralista, sino respondiendo a lo esencial de nuestro pensamiento y de nuestra doctrina. Así como desde la incorporación del señor diputado Palacios al Parlamento, en el año 1904, hemos venido forjando una nueva legislación protectora de los obreros, esa tarea ha sido continuada en las distintas representaciones obtenidas por nuestro partido, sin desconocer, porque no podría hacerlo honradamente, que hemos contado con la colaboración de legisladores de otras tendencias que también han tenido preocupaciones de tipo social. Bastaría el simple hecho de que nunca hemos constituido por nuestra parte una mayoría suficiente como para que esas leyes fueran aprobadas exclusivamente con nuestro voto, de modo que hemos contado con la aprobación de diputados y senadores de otros sectores y, desde luego, como me sugiere por lo bajo el señor diputado Grau, con la colaboración de las representaciones radicales. Recuerdo en este orden a algunos de sus representantes, que fueron mis colegas en la Comisión de Legislación del Trabajo hace muchos años, como el doctor Anastasi y el doctor Pinto, que, «estudiosos de la materia, estaban interesados en estos temas, testimoniando su inquietud en la presentación de proyectos y en la colaboración eficaz en la sanción de leyes que todavía rigen en el país. Cabe también recordar como un antecedente importante el Código del Trabajo del ministro Joaquín V. González, de 1904, en el que colaboraron, entre otros, José Ingenieros y Enrique del Valle Iberlucea.

Pero uno de los hombres a quien yo quiero hacer justicia, y a quien ya recordó hace años mi estimado colega y amigo el señor diputado Ghioldi, es el diputado Adolfo Dickmann, quien, en mi opinión, fue el autor del proyecto más orgánico que se haya presentado sobre salario mínimo en el país, por lo menos desde aquella fecha.

Naturalmente que luego se han incorporado nuevos conocimientos y ha habido otras experiencias. Incluso, la influencia de los sectores laborales ha sido más efectiva, pero lo esencial y básico en esta materia, entre nosotros, arranca de este proyecto del diputado Dickmann, que, diez años después de su presentación, fue reproducido por el diputado Ghioldi, fundándolo en forma realmente didáctica, completa y con antecedentes que vale la pena leer porque ofrecen un material siempre aprovechable.

El diputado Dickmann recogió sus trabajos y su proyecto en un folleto del año 1931 que se llama *Salarios mínimos: su teoría y aplicación*.

Traza la trayectoria de la preocupación socialista. Como ha sido recordado hace un instante, la primera proposición concreta que se formuló en el Congreso Argentino fue la del doctor Justo al discutirse el presupuesto na-

cional de 1913, proposición que abarcaba a los empleados y obreros del Estado.

Esa proposición, que el doctor Justo abonó con su versación característica, recién pudo ser aprobada cinco años después a través de una cláusula que se incorporó al presupuesto, que establecía que «todo empleado o jornalero varón, mayor de dieciocho años, que trabaje ocho horas diarias, por lo menos, al servicio del Estado, no tenga otra ocupación, no reciba otra remuneración, alojamiento o comida, percibirá un sueldo de cien pesos mensuales o cuatro pesos diarios». Esta disposición rigió hasta el año 1922, en que se fijó el salario mínimo en ciento sesenta pesos o seis pesos con cuarenta por día.

El doctor Justo hacía mérito, para defender la situación de los más modestos empleados del Estado, de sus condiciones realmente precarias desde el punto de vista económico y establecía comparaciones con los sueldos vigentes en presupuestos de países que tienen cierta similitud con el nuestro, especialmente Australia, Nueva Zelandia y, en cierto modo, los Estados Unidos. Lo que el doctor Justo dijo entonces a propósito de la burocracia sobreabundante yo podría ahora repetirlo sin recargar las tintas, trazando un cuadro aterrador y no alejándome demasiado de esta casa.

Esa preocupación subsiste, como es natural, y gracias a las iniciativas del ex senador del Valle Iberlucea y del diputado Giménez se sanciona la ley 10.515, en 1918, sobre reglamentación del trabajo a domicilio, que fue sustituida en 1941 por la ley 12.713. Contenía normas para establecer los salarios. Luego se sancionó la ley, que he recordado, de pago de salarios en moneda nacional.

El doctor Dickmann resume sus preocupaciones en algunos pocos párrafos que a mí me parece puedo tomarme el atrevimiento de recordar a la Cámara, porque en verdad fijó una posición y señaló un camino. Resume las conclusiones generales del sistema que ofrece en los siguientes párrafos: «1º — Que el problema de la fijación de los métodos para establecer el monto legal de los salarios mínimos ha salido de su aspecto doctrinario para convertirse en una grande y urgente reclamación proletaria (esto se decía en 1928). 2º — Que las bases para estos métodos tienen que ser necesariamente concordantes por los principios económicos que rigen la producción y el intercambio y con el costo de la vida en cada país y en cada época. 3º — Que la legislación sobre el monto de los salarios debe, necesariamente, disociar los diferentes grupos de trabajadores: los que se ocupan directa o indirectamente por el Estado; los que trabajan en los grandes servicios públicos regidos por leyes de concesión o cuyas tarifas pueden sufrir alzas concordantes con el costo de producción, sin experimentar la competencia; para estos grandes grupos de trabajadores las leyes deben establecer, por tiempos más o menos

largos, sujetos a revisiones periódicas, un monto determinado de salarios. 4º — Que los trabajadores ocupados por industrias a domicilio o por aquellas donde los salarios son notoriamente bajos o las que ocupan mujeres y menores, el Estado debe intervenir mediante la ley obligatoria para las partes, para establecer los métodos de fijación de la remuneración mínima como defensa de la vida de dichos trabajadores. 5º — Que para los trabajadores ocupados por la grande industria, por el comercio y por la agricultura en sus diversas ramas y aspectos, deben regir las comisiones paritarias locales y regionales a fin de que puedan establecer, ya sea en forma obligatoria o facultativa el monto de los salarios para cada industria, para cada ocupación, teniendo en cuenta el costo de la vida y las condiciones económicas y financieras de dichas industrias en el mercado interno y en el internacional. 6º — Que a igualdad de tarea y de rendimiento, la remuneración deberá ser la misma, sin distinción de sexo.»

Ya el ex diputado Adolfo Dickmann, al preconizar la creación de comisiones paritarias locales para salarios, con igual número de obreros y patronos, establecía que esas comisiones debían tener en cuenta los siguientes hechos o circunstancias: el precio de la vivienda, de los artículos de primera necesidad y de los demás elementos que integran el costo de la vida, el costo de producción de los artículos elaborados por las industrias, los gastos de comercio a que se refieren los fallos de las comisiones paritarias, los salarios y sueldos de ocupaciones análogas en otras regiones del país, etcétera.

El diputado Ghioldi, cuando reproduce este proyecto, ampliándolo, incorpora, para precisar bien qué necesidades debe alcanzar el salario mínimo, seis puntos que yo también he incorporado en la iniciativa presentada en el mes de marzo de este año a la Honorable Cámara, que fueron elaborados por el ex diputado Nicolás Repetto, con su criterio científico, medurado y con su visión de estadista. Estos puntos establecen criterios para la determinación del salario. Se entenderá así por salario mínimo aquel que permita en cada zona de la República asegurar al trabajador y a su familia un mínimo de alimentación, vivienda, vestuario, condiciones sanitarias, asistencia médica, protección a la infancia y educación para los hijos del hogar. El proyecto entra al detalle minucioso, y así, por ejemplo, en materia de alimentación dice que han de tenerse en cuenta las cantidades diarias suficientes de carnes, pan o galleta, arroz o fideos, verduras y legumbres, leche, yerba, azúcar y fruta fresca. Lo mismo hace respecto a los otros rubros que he mencionado.

Nosotros hemos recogido estos puntos en nuestro proyecto, más con criterio de orientación que con la esperanza de que sean incorporados

a la ley que se ha de sancionar, aunque su espíritu no puede desecharse en forma total.

Dejaré de lado algunos antecedentes, como ser los informes del ex director de la Oficina Internacional del Trabajo del año 1937, mister Harold Butler, que cita el diputado Ghioldi en la interesante fundamentación del proyecto a que me he referido. Pero no puedo dejar de recordar que Butler destaca un aspecto fundamental del problema, pues dice que la fijación del salario mínimo no resuelve totalmente la cuestión de asegurar un nivel de vida favorable a los sectores de la población menos favorecidos. El nivel de vida —dice— esta determinado por la ganancia total del obrero y no por la tarifa de salarios. No basta un salario mínimo de base para que aumenten los ingresos del obrero; es preciso que se asegure la continuidad del trabajo. Cita luego la extensión del método de concesión de subsidios familiares como un complemento del salario de base, pero no como la base misma del salario.

Son muchas las iniciativas socialistas presentadas a la Cámara sobre este aspecto, cuya enumeración no puedo hacer en este momento. Sin embargo, no he de dejar de recordar la del ex diputado de nuestro partido Rómulo Bogliolo, que en 1942 proyectó la creación de la Comisión Nacional de Salario, con la misión de poner al día las variaciones del costo de la vida y publicar cada seis meses las conclusiones si fueran un 15 por ciento más alto el costo de la vida que los salarios.

Todos estos conceptos se reprodujeron varias veces, sin mucho resultado desde el punto de vista de su sanción legislativa, a pesar a veces de haberse producido despacho de la Comisión de Legislación del Trabajo, como en los años 1939 y 1942, en los que me parece haber intervenido.

Es claro que esta idea que parece tan justa, equitativa y humana, diría yo, encontró resistencias y sigue encontrándolas. Con uno u otro motivo, defendiendo las posiciones respectivas con argumentos más o menos valederos o más o menos capciosos, no se ha querido afrontar la responsabilidad de una sanción a la espera de grandes planes, de estudios profundísimos que resuelvan como una receta milagrosa todas las cuestiones al respecto. La expresión de esa mentalidad reaccionaria, regresiva, la encuentro reflejada en un discurso que seguramente muchos diputados no han olvidado del todo, y es el que después del golpe militar del 6 de septiembre de 1930 pronunció el 13 de diciembre de ese año, en la Escuela Superior de Guerra, el entonces presidente provisional de la República, general Uriburu. Fue un discurso malhadado; no recuerdo ni podría decir quién se lo inspiró, pero lo cierto es que no reflejaba el sentir, la inquietud legítima de la inmensa mayoría de la opinión pública argentina, y menos, desde luego, las exigencias no menos legítimas de la clase trabajadora de este país. El

general Uriburu se atrevió a afirmar que había que atribuir al salario mínimo los males que aquejaban a la política argentina. Eso produjo, naturalmente, la resistencia inmediata no sólo de la clase trabajadora sino de los hombres preocupados por el progreso social de la República. Una consecuencia de eso fueron las distintas iniciativas presentadas a esta Cámara por la representación socialista de entonces, entre ellas la que se concretó en el ya recordado proyecto de 1938. Puedo decir entonces, sin vanidad y sin la pretensión de que esto determine un cambio en la opinión política de los señores diputados, que la preocupación socialista es constante y firme.

Abreviaré mi exposición, porque veo que el reloj corre. Esa acción política no ha sido solamente por el salario, sino una defensa de las condiciones de trabajo y del nivel humano de los obreros. Hemos hecho denuncias, interpelaciones, giras por distintas regiones del país, y denunciado el incumplimiento de la legislación vigente. Todos nosotros tenemos algo acreditado en esas cuestiones: hemos publicado libros no muy importantes, pero que traducen esa preocupación, especialmente sobre el Norte argentino, y también respecto de la inoperancia o negligencia a veces culpable de las autoridades, que no obstante existir las leyes no las cumplían ni las hacían cumplir.

Hubo una época en este país, sobre todo después de 1930, en que se prestó una atención preferente a la protección de industrias privilegiadas con el pretexto de fomentarlas y de asegurar su progreso y su estabilidad. Recordamos el caso del azúcar —que es tradicional—, de la yerba mate, de los viñateros de Mendoza, etcétera. Es sobre todo entonces cuando el Partido Socialista y sus representantes insisten en esta acción legislativa. Hay una expresión en los fundamentos del proyecto del señor diputado Ghioldi que sintetiza bien cuál era entonces y sigue siendo hoy el leitmotiv de esa acción nuestra. Frente a esa desmedida protección a industrias, parasitarias algunas veces, lo urgente, lo necesario, es fomentar lo que para nosotros constituye la principal industria nacional que es el hombre argentino, resguardándolo, defendiéndolo en su nivel de vida y de trabajo, y amparándolo en el desarrollo regular, normal y fecundo de su familia.

Yo no puedo ahora tampoco, porque he tenido que organizar esta exposición un poco apresuradamente, y me ha sido muy difícil seleccionar el material que debía utilizar en este debate, entrar en muchos detalles sobre algunos hechos y antecedentes que tengo aquí sobre lo que se ha realizado en el país, por ejemplo, respecto del Instituto Nacional de las Remuneraciones, creado por un decreto del año 1945 y convertido luego en ley 12.921, de 1946, que establece algunas bases claras, aunque desgraciadamente no lograron materializarse en los hechos y cuyos beneficios podría decir que se alcanzaron en

escasísima medida, si alguna llegó a concretarse. Puede decirse que a pesar de esa legislación, el salario básico sólo quedó establecido aproximadamente a través de los convenios laborales y los aumentos periódicos obtenidos por los trabajadores.

Por otra parte, figuran los decretos 33.412/45, que fija normas para el salario de los menores; el 28.169/44, de Estatuto del Peón; la ley 13.020, de 1947, sobre salario mínimo para los agricultores; además, el Estatuto del Docente, ley 14.473, en cuyo artículo 6º establece que el goce de una remuneración y jubilación justas actualizadas anualmente de acuerdo con las prescripciones y decretos que establezcan los medios para su actualización, disposición que se cumple en forma muy deficiente. Yo comprendo que hay situaciones económico-financieras del Estado muy afligentes y serias; pero la verdad es que esto ha determinado el movimiento a que se han entregado, a mi juicio, con toda justicia los docentes argentinos porque hay un estatuto que no se aplica.

Nosotros hemos ratificado las Actas de Chapultepec por ley 12.837, en cuyo capítulo denominado «Declaración de principios sociales de América latina» se habla de la fijación de un salario mínimo vital calculado sobre la existencia pecuniaria y de acuerdo con la geografía de los países de América, del trabajo nocturno de mujeres y menores, retribución de los períodos de descanso. Hay además un antecedente que no sé si se ha citado, pero que a mayor abundamiento puede traerse, de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, del 27 de julio de 1954, que establece que la circunstancia de que no funcione el Instituto Nacional de las Remuneraciones no obsta el pleno derecho del trabajador al cobro del salario mínimo vital móvil, a fijarse judicialmente sobre la base de elementos de juicio aportados, incluso las estipulaciones de un convenio colectivo referente a la misma actividad.

Esto quiere decir que la idea de justicia, de equidad, de amparo social ha ganado también los ámbitos de los tribunales y que no se puede negar que esto constituye una exigencia a la que el Congreso Argentino, aunque en forma un poco apresurada, está tratando ahora de dar cumplimiento.

Finalmente, todas esas preocupaciones quedaron fijadas en la reforma constitucional realizada por la Convención reunida en Santa Fe en 1957, con la incorporación del artículo 14 bis, que ha sido recordado muchas veces y que con la ley a votarse se reglamentará.

Dejo de lado otros antecedentes; pero tenía las conclusiones de una conferencia interamericana de ministros de Trabajo, vinculada con la Alianza para el Progreso, realizada en Bogotá en 1963, que ha sido importante porque reafirma la posición que vengo subrayando y, naturalmente, orienta en esta materia con criterio inteligente y racional, sin especulación

política ni especulación electoralista o demagógica.

Lo cierto es que estamos en mora, como en tantos otros aspectos de la legislación social, en relación con las conquistas ya alcanzadas por los países más progresistas del mundo. No hemos tenido en cuenta una advertencia que hizo hace ya algunos años la Oficina Internacional del Trabajo, entidad a la que hay que recurrir para ilustrarse y guiarse en el estudio de estas cuestiones, cuando afirmaba que uno de los problemas más urgentes que condicionan el desarrollo económico-social de los países de América latina es la mejora inmediata de los ingresos reales de los sectores más necesitados, y de la población asalariada. En una época en que la mayor parte de los países están empeñados en amplios planes de fomento económico, la reglamentación del salario mínimo viene a ser de especial importancia. En efecto, agrega, los salarios demasiado bajos implican tres formas de obstáculo al desarrollo nacional. Primeramente, es improbable que el obrero mal pagado sea un eficiente productor económico. En segundo lugar, los bajos ingresos reales de los trabajadores restringen la demanda de muchas clases de productos, y los mercados no pueden así impulsar la actividad económica nacional; por último, es inconveniente desde el punto de vista social, injusto desde el punto de vista humano y peligroso desde el punto de vista político que densos grupos de población sufran las consecuencias de un nivel de vida ínfimo.

Ahora nos encontramos abocados a una situación que debe ser afrontada y resuelta. Yo deploro que tengamos que hacerlo en esta situación que va siendo casi inveterada en la Cámara, crónica, de apresuramiento, de sesiones prolongadas, y por ello hablamos de la necesidad de organizar un poco el trabajo legislativo. Pero hemos de hacer un esfuerzo para dar al país una ley orgánica de salario mínimo, vital y móvil. Hay situaciones que no pueden ser desconocidas. Yo no entraré a exponer la teoría del salario ni a hablar sobre la carestía de la vida, sobre la desocupación ni sobre las urgentes y justas reclamaciones obreras que, desde luego y a mi juicio, no han de resolverse ocupando fábricas y lugares de trabajo, sino mediante una legislación socialmente avanzada, con su leal aplicación y el más alto grado de conciencia de los mismos trabajadores.

Tampoco cometeré el error de suministrar a la Cámara abundantes estadísticas ni datos reveladores de la situación angustiosa por que atraviesa la mayoría de los hogares argentinos. La verdad es que los aumentos de salario se tornan ilusorios ante la constante y con frecuencia maliciosa suba de precios. Artículos indispensables para la subsistencia realmente mínima de un hogar, aumentan en sus precios de una manera sorprendente y sospechosa. La

especulación sigue actuando, y es de esperar que la ley nacional de abastecimiento que este Congreso ha sancionado permita por fin al gobierno entrar en acción con la energía y el espíritu orgánico y resuelto que los hechos reclaman.

Una reciente declaración del Consejo Nacional del Partido Socialista Democrático sintetiza en una de sus partes todo cuanto yo podría decir al respecto. Dice así: «Todo parece indicar que el gobierno no ha sabido hacer frente a la ofensiva desatada por los grupos de presión capitalista, quienes pretenden legitimar sus demandas mediante el ardid de identificar sus propios intereses con los intereses generales del país. La política de precios altos sería así condición para exportar más con el consiguiente aumento en la producción de divisas. Los resultados están a la vista: el consumidor extranjero paga el azúcar argentino a un precio menor que el que nosotros pagamos, al tiempo que por primera vez en la historia del país vendemos al exterior o ponemos sólo al alcance de los ricos los mejores cortes de carne. Esta elevación programada en los precios de la carne hace que la compra de un kilo de bifés demande a un obrero medio día de trabajo. De una manera más general puede decirse que hoy día un trabajador casado y con dos hijos debe dedicar las dos terceras partes de su jornal para adquirir un kilo de carne, un kilo de pan, dos litros de leche, un poco de verdura y algo de fruta. Y todavía hay que pagar alquiler, vestido, calzado, atender a la salud y mandar los hijos a la escuela...»

La repercusión de una situación como ésta sobre el nivel de vida de los trabajadores y sus familias alcanza a la salud y a la educación de sus hijos. Repetimos que no vamos a insistir en cifras que tenemos a nuestro alcance, pero la realidad es que se nos presenta a la observación un cuadro de infraconsumo y de privaciones, y que no es necesario realizar estudios profundos, sino simplemente hablar con las amas de casa y visitar ferias y mercados, para experimentar cómo esta verdad que nosotros destacamos puede corroborarse sin dificultad.

Es claro que sufrimos —lo reconozco lealmente— las consecuencias de una política desaprensiva y dispendiosa en materia de gastos públicos y de olvido de elementales normas sobre inversión de recursos del Estado y de las provincias, que viene de lejos. El anunciado déficit presupuestario de casi 100 mil millones de pesos, que tal vez sea mayor, da la idea de la necesidad de una acción de gobierno racional, ordenada y urgente, que contenga gastos fácilmente suprimibles, haga efectiva una política de verdadera austeridad y moralización administrativa, frene los planes de los inflacionistas, de los grupos plutocráticos financieros, defienda el valor de nuestra moneda y resguarde el salario real de los trabajadores.

Esto es lo que se puede ver —y aquí recojo las expresiones del señor diputado Cheble— en las grandes ciudades y centros importantes del país. Pero si llevamos nuestra mirada un poco más lejos y contemplamos el interior, puedo asegurar a los señores diputados que el espectáculo es realmente angustioso y que obliga al Congreso a ocuparse alguna vez seriamente de esos problemas.

Es mi deber decir algunas palabras para señalar cómo ha descendido el nivel de vida en el interior de nuestro país, especialmente en el Norte argentino, con grandes riesgos para las nuevas generaciones argentinas, que son las que hemos de intentar salvar con urgencia y con un bien entendido y sano patriotismo.

En septiembre del año pasado, siendo ya diputado, realicé a mis expensas una gira por Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. Después de veinte años quería comprobar en qué medida se había avanzado en esas regiones. La impresión recogida es dolorosa y casi alarmante.

En medio de una belleza natural imponente, la pobreza, el desamparo y la miseria de millares de obreros y de sus familias alcanza a límites dramáticos que claman por una labor responsable y honesta que tienda a salvaguardar lo que representa nuestra riqueza fundamental, que radica en el porvenir inmediato de esos compatriotas y de sus hijos.

En general, subsiste un régimen de explotación y abandono agudizado por la negligencia culpable de los funcionarios y de las autoridades que se han preocupado más por sus situaciones personales que por resolver los problemas sociales y humanos. No quiero traer a este debate una derivación política ni aludir a cosas que he recogido en la visita a esas provincias sobre la actuación de algunas administraciones y condiciones en que han quedado las finanzas provinciales por el olvido absoluto de algunos deberes que considero sagrados, como son la salud pública y la educación. Alguna vez tendremos que cambiar opiniones sobre estos asuntos que son realmente fundamentales para el país.

La Nación, y en eso coincido con los señores diputados del interior, no radica sólo en sus grandes ciudades, en la belleza de sus metrópolis, y en el lujo a veces ostentoso de ciertos sectores de población. El país tiene que formar un conjunto político y social animado por un ideal común. La patria no se puede fragmentar; la República no puede subsistir a pedazos, con vigencia en unas regiones y eliminada su plenitud en otras. Para que la estabilidad democrática institucional sea un hecho que no dependa de circunstancias adventicias o de caprichos pasajeros, cualquiera sea la fuerza que tengan esos caprichos, debe descansar en el progreso social, en la elevación de las condiciones humanas y de trabajo de las poblaciones, que son las que crean la riqueza. Y esas minorías parasitarias y contumaces deben ser perseguidas con toda decisión.

Sr. Cheble. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Solari (J. A.). — Con mucho gusto, señor diputado.

Sr. Cheble. — Hay que tener en cuenta que, no obstante la pobreza que a veces se nota en las provincias del Noroeste argentino, casi todas ellas tienen riquezas potenciales que es menester desarrollar, para colocarlas justamente al servicio de esa elevación cultural y espiritual a que yo hice referencia.

Es por este motivo, lo repito, que las citadas provincias están esperando en estos momentos —en que quizá se apegan demasiado a la tierra, desarrollando así su espiritualidad— la ayuda de los gobiernos nacional o provinciales para que pongan en marcha esos recursos, a fin de que ellos sirvan a la felicidad del pueblo argentino.

Sr. Solari (J. A.). — Es evidente que para que el progreso de esas provincias sea integral hay que movilizar también factores humanos de inmigración, para lo cual hay que colocar a dichos Estados en condiciones de recibir esos contingentes humanos. Se trata, desde luego, de un problema complejo, que no podremos resolver de la noche a la mañana pero que debe concitar sin tardanza nuestra preocupación y nuestro celo.

Comprendo que, estando bien informados los señores diputados, quizá incurra en alguna redundancia en las consideraciones que formulo en este instante. Pero deseo citar algunos casos concretos y comprobados personalmente para abonar con hechos fehacientes cuán perentorio es dictar leyes como la que ahora discutimos, y otras que deben complementarla.

Tengo sobre mi banca la libreta de un hachero de Monte Quemado, Santiago del Estero, a quien visité en septiembre del año pasado. Fui al seno del bosque en que trabajaba y conversé con él. Todos sabemos en qué condiciones desarrolla su labor esa gente, sin familia, sin la posibilidad de constituir un hogar, prácticamente sin ninguna compañía en la selva, salvo, quizá a larga distancia, la de algún otro obrero perdido en el monte. Es una vida sacrificada y dolorosa.

Este hachero era un criollo auténtico, joven todavía pero ya envejecido por el rigor de su tarea, por la insuficiencia de su alimentación, acaso por su mala salud. La libreta a que he hecho referencia revela que el obrero —cuyo nombre no voy a dar— trabajó desde el 13 de julio hasta el 30 de noviembre de 1962. Desarrolló durante cinco meses su pesado trabajo, para el que esta gente tiene una maestría insuperable y una energía física que uno no sabe de dónde arranca. Este hombre rindió trabajo, con las quitas, rechazos y rebajas que son comunes, por valor de 12.242 pesos durante cinco meses. Pero él, que es soltero, debe pagar por provisiones al almacenero, cantinero o proveedor. Hay una ley de proveeduría, cuyos iniciadores hemos sido nosotros, que se cumple tarde, mal o nunca. El hachero, como digo, debió pagar 9.946 pesos

por estos conceptos, y el saldo a favor de este criollo —que es ciudadano argentino, que seguramente ha prestado servicio militar, que habrá pasado rápidamente por la escuela, que vota— quedó reducido a 2.296 pesos.

Quiere decir que en cinco meses este hombre cobró un promedio de 450 pesos mensuales, y ello en retribución a largas jornadas, efectuadas en un clima pesado, que seguramente ni yo ni ninguno de los señores diputados resistiría sin una previa y larga aclimatación. Del 13 de abril al 13 de julio de 1963, las rentas de tres meses alcanzan a 3.522 pesos, y registra por todo tipo de provisiones 4.765 pesos, con un saldo deudor de 1.243 pesos.

Esta es la técnica, como me apunta el señor diputado Caro, que nosotros hemos denunciado tantas veces, del *truck system*, de la proveeduría, que es la forma como tienen atrapado al obrero los explotadores o los capitalistas, que no son solamente los obreros de Santiago del Estero, porque esta situación se refleja también en la zafra azucarera, en la cosecha de algodón o en la industria yerbatera, como hemos tenido ocasión de verificar y denunciarlo reiteradamente.

Los precios que aparecen cobrándose en esta libreta de 1961/62 por los artículos de primera necesidad son realmente exorbitantes: por tres kilogramos de maíz y dos kilogramos de fideos, 86 pesos; por un par de alpargatas y medio kilogramo de cebolla, que lo anotan en forma global para confundir y desorientar, 95 pesos; por un zapallo y una camiseta —observen los señores diputados la analogía que hace el almacenero intencionalmente, para que no se pueda establecer cuánto cuesta la camiseta y cuánto cuesta el zapallo— 186 pesos.

Sr. Mansilla. — ¿Me permite el señor diputado?

Estoy escuchando al señor diputado con extraordinario interés y con el mayor respeto. Deseo preguntarle si ésa es una situación creada en la actualidad o es de larga data.

Sr. Solari (J. A.). — Después de veinte años hice una gira para establecer en qué medida había mejorado o no la situación de los trabajadores. Mi impresión, que ojalá pueda ser desmentida por los hechos, es que no hemos mejorado nada y en algunos casos hemos retrocedido.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia recuerda al señor diputado Solari que sólo le resta un minuto del término del que reglamentariamente dispone para hacer uso de la palabra.

Sr. Caro. — Solicito que se prorrogue el término al orador.

Sr. Arana. — Apoyo la indicación del señor diputado.

Sr. Solari (J. A.). — Seré lo más breve posible, y agradezco la deferencia de los señores diputados.

Cualquiera que no conozca la situación y revise estas cuentas pensará que este hombre se ofrece unas comidas abundantes, pero la verdad

es que hablando con él y viéndolo como lo he visto —coincido con el señor diputado Cheble—, lo cierto es que muchas veces ni comen, y que por lo general su alimentación es de mate y galleta, cuando la tienen. La base fundamental de la alimentación es lo que ellos llaman tortilla, que es un poco de harina con grasa puesta al rescoldo. Yo he visto a estos hombres amasar ese «suculento» almuerzo, lo cual no da otra impresión que la de ser un caso de explotación inicua que hay que cortar de raíz.

No abundaré en detalles, pero puedo sí recordar que en la finca Cisneros, de Tucumán, que pertenece a un cañero independiente, se registran también casos no tan graves pero reveladores del mismo sistema: siempre es la vieja táctica que se pone en práctica para mantener bajo la red del contratista a los obreros que van allí periódicamente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia informa al señor diputado Solari que ha expirado el plazo de que reglamentariamente disponía, por lo que, muy respetuosa y amablemente, le ruego al señor diputado quiera ceñirse al tema en debate.

Sr. Arana. — Se ha votado la ampliación del término...

Sr. Presidente (Mor Roig). — No, señor diputado, no se ha votado.

Sr. Solari (J. A.). — De cualquier manera no abusaré de la tolerancia de la Honorable Cámara y el señor presidente sabe que soy muy obediente... a veces. (*Risas.*)

Decía que en el caso de la finca Cisneros, de Tucumán, se registra el mismo caso a pesar de la forma en que trata de disimularse. Tengo también informaciones de zonas del Chaco, que son muy ilustrativas, y la tabla de salarios en esa localidad para los comprendidos en el Estatuto del Peón.

Aquí tengo que hacer una referencia que quisiera tomara en cuenta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque realmente refleja una situación insostenible. Yo he conversado, por ejemplo, en Tucumán, con el secretario del Sindicato de los Obreros del Tabaco. Puedo confesar a los señores diputados que la imagen de este hombre no se puede desdibujar de mi memoria. Ese sí que no es el dirigente que lleva grandes alhajas, que gasta lujosos autos, que tiene tres o cuatro departamentos y que atiende otras expansiones más o menos confesables. Era un hombre modestísimo. La impresión era la de un pobre hombre harapiento. Yo pensé al verlo qué arte debía utilizar este hombre para ponerse un saco tan roto como el que tenía. Una cosa realmente penosa; y era el secretario del sindicato.

Este hombre me denunció en forma concreta y vehemente que después de muchas luchas y de no pocos sacrificios ellos conseguían firmar convenios laborales, pero que la homologación de esos convenios sufre aquí, en las dependencias del Ministerio de Trabajo y Seguridad So-

cial, una demora que ellos no pueden justificar de ninguna manera; que a veces pasan seis y ocho meses y los salarios establecidos en esos convenios, lógicamente, a lo largo de tanto tiempo pierden toda eficacia. Otro tanto ocurre —y aquí aprovecho para decirlo y denunciarlo— con los accidentes del trabajo. Hay una negligencia que tiene que ser removida en forma absoluta. Se trata de casos en que los derechohabientes tienen que entrar en toda clase de combinaciones para poder cobrar unos pesos, perdiendo lo que legítimamente les corresponde.

He querido configurar con estas consideraciones un panorama económico-social que, insisto, a mi juicio debe movilizar el celo del Congreso y de las autoridades nacionales y provinciales. Nosotros, en el deseo de aportar una contribución que podría significar una medida permanente en la lucha de los trabajadores para elevar su nivel de vida y de labor, entregamos en marzo de este año un proyecto de salario mínimo a la Cámara. No era muy novedoso —en esta materia no se puede inventar gran cosa— pero establecíamos un camino basado en los convenios laborales adoptando un criterio sustentado por las oficinas internacionales del trabajo, reajustando el salario a medida que aumenta el costo de la vida.

Pero hay un dictamen, y nosotros, en general, hemos puesto en él nuestra firma, si bien tenemos algunas disidencias que voy a especificar para después, acaso, no intervenir sino muy esporádicamente en la discusión en particular. Proponemos suprimir del artículo 39 las palabras «asignaciones familiares». Por los conceptos que he expresado y los antecedentes de nuestra acción, para nosotros el salario mínimo no debe ser sino mínimo salario, sin alcanzar a asignaciones familiares que deben fijarse por separado.

También propiciamos suprimir del artículo 99 las palabras «para la familia tipo del trabajador».

Sr. Pizarro. — ¿Estamos en la discusión en particular?

Sr. Solari (J. A.). — Soy autor de un proyecto.

Sr. Ghioldi. — El señor diputado enuncia las disidencias.

Sr. Solari (J. A.). — Estoy completando mi exposición, porque de otra manera podría resultar un poco retórico, y como no acostumbro a hacer sermones simplemente para adoctrinar a los fieles, prefiero actuar con espíritu constructivo. Pero si el señor diputado se fastidia yo podría dejar esto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Solari.

Sr. Solari (J. A.). — Propiciamos además suprimir los artículos 11, 12 y 13, a las asignaciones familiares, por considerar que debe limitarse el proyecto a la fijación del salario mínimo de los trabajadores.

También proponemos la supresión de la segunda parte del artículo 22 y, en su reemplazo, porque no aceptamos que se excluya al personal del Estado y dado que entendemos se trata de un problema que debe ser estudiado y no puede ser resuelto en forma improvisada, proponemos el siguiente texto: «El Poder Ejecutivo enviará al Congreso a la mayor brevedad un proyecto de financiación de los mayores gastos que importe la aplicación del salario mínimo a la administración pública.» Agregamos también al artículo 24, donde se habla de la congelación de precios, después de las palabras «30 de abril de 1964», la siguiente frase: «y la carne cuyo precio máximo será el vigente al 19 de enero de 1964». No entendemos por qué se excluye a la carne, que está entre los artículos de primera necesidad.

Proponemos, así mismo, reemplazar el artículo 20 del dictamen por el siguiente texto: «Hasta tanto el consejo se constituya y determine para el primer período anual el monto del salario vital mínimo a que se refiere el artículo 99, el Poder Ejecutivo determinará el monto del salario mínimo que regirá a partir del plazo establecido en el artículo 22.»

Soy autor, como he dicho, de una iniciativa en esta materia que he presentado en nombre de mi bloque. En ella fijaba un salario mínimo de 12.500 pesos, pero ahora no estaría en condiciones de decir si esa suma es suficiente o no. Creo que tampoco se puede improvisar en esta materia, y por eso señalamos en el artículo 20 que proponemos que el Poder Ejecutivo determinará el monto del salario mínimo que regirá a partir del plazo establecido en el artículo 22.

Señor presidente: lamento haber distraído la atención de los señores diputados. Generalmente cuando alguien interpreta mi pensamiento opto por no hablar, no porque crea que en el Parlamento hay que estar silencioso, sino porque me parece que cuando se ha emitido una opinión suficiente no hay necesidad de reforzarla, sobre todo cuando los compañeros de bloque, como en mi caso, lo hacen con verdad y elocuencia. Pero esta vez me ha tocado la tarea de decir algo con mayor extensión que otras veces. Lo he hecho creyendo prestar una colaboración para resolver el problema que se discute y en la esperanza de que nos decidamos a sancionar una ley lo más orgánica y seria posible, sin entrar a colocarnos en una posición de competencia y sin hacer ofrecimientos que no siempre se tiene la conciencia de que se han de cumplir.

Algunas veces hablamos nosotros, al proponer un fondo médico social para la infancia argentina y para atender las necesidades de las escuelas, de defensa nacional urgente. Yo afirmo, sin grandilocuencia pero con sincera convicción, que si hay una ley de defensa nacional urgente, es ésta que atiende a las necesidades y a los anhelos legítimos y auténticos de los trabajadores argentinos. Se trata de algo que no puede ser atribuido exclusivamente a una

tendencia política ni a preocupaciones banderizas.

He releído hace poco el discurso sobre la Alianza para el Progreso pronunciado en la Casa Blanca por el ex gran presidente Kennedy el 13 de marzo de 1961. Kennedy dice: «Porque a menos que se emprenda libremente las necesarias reformas sociales, inclusive la reforma tributaria y la reforma agraria; a menos que amplíemos las oportunidades para nuestros pueblos; a menos que las grandes masas del hemisferio participen en una creciente prosperidad, nuestra alianza, nuestra revolución, nuestro ensueño y nuestra libertad habrán fracasado. Pero pedimos un cambio social mediante hombres libres —cambio en el espíritu de Washington y Jefferson, de Bolívar y San Martín y Martí—, no un cambio que pretenda imponer las tiranías que hace siglo y medio derribamos. Nuestro lema es el que siempre ha sido: progreso, sí; tiranía, no.

»Pero nuestro mayor reto nos surge de adentro: del esfuerzo por crear una civilización hemisférica en la cual se robustezcan los valores espirituales y culturales mediante una base de progreso material de amplitud creciente, en la cual cada nación, dentro de la rica diversidad de sus propias tradiciones, se sienta libre de escoger su propio camino hacia el progreso.

»La consumación de esta labor requerirá, desde luego, el esfuerzo de todos los gobiernos del hemisferio. Pero nunca bastarán los esfuerzos de los gobiernos. En definitiva, es el pueblo el que debe ayudarse a sí mismo.»

Formulo votos para que nuestro pueblo, guiado por una tradicional línea histórica de libertad, de democracia y de justicia, se oriente y forje su porvenir en este gran taller y hospitalario hogar que debe ser la República fundada por los hombres que nos dieron la patria, patria en la que han de hallar asilo acogedor todos los hombres de buena voluntad, como dice el Preámbulo, que quieran trabajar con nosotros para resolver los problemas que hoy demandan nuestra atención mirando con confianza hacia un mejor futuro de paz, bienestar y justicia. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Amura.

Sr. Amura. — En mi carácter de diputado independiente, anticipo y fundo mi voto favorable al dictamen de la mayoría, y aclaro que sólo votaré en disidencia y en concordancia con el dictamen minoritario el artículo 79, donde se establece que los representantes gremiales deben ser designados por la entidad central, la CGT, y no a criterio del Poder Ejecutivo.

Yendo al proyecto en sí, debo manifestar que pocas veces como ahora se ha abocado el Parlamento a considerar un proyecto de ley tan ceñido al espíritu y al texto de la Constitución como el actual. Como se ha recordado aquí por

medio de varios oradores, y muy especialmente en la magnífica exposición de anoche, tan meritosa y enjundiosa, del señor diputado Palacios, el artículo 14 bis de la Constitución es suficientemente explícito. Por esta circunstancia de orden constitucional, me apena profundamente que algún sector de la Cámara, tan severo y tan rígido otras veces en invocar la Constitución cuando se debatía algún proyecto que supone la margina, intente poner trabas al cumplimiento de este precepto constitucional que incumbe a todos los poderes. El Ejecutivo cumple con el precepto y nos remite el proyecto; el Congreso tiene, más que la autoridad, el deber de facilitar su sanción. Es un imperativo constitucional. Y hay también fundamentadas y urgentes razones de orden social para debatirlo y para buscar la coincidencia que permita aprobarlo, para «afianzar la justicia», para «consolidar la paz interior», para «promover el bienestar general» que determinan nuestra Carta Magna y que reclaman el mundo y el momento en que vivimos.

Este Congreso ha dado pruebas reiteradas de su sensibilidad social, que se traduce en su inquietud para promover por encima de intereses y egoísmos individuales o sectarios —como muy bien lo dijera el señor diputado Solari— el progreso colectivo, para beneficio, en primer lugar, de quienes lo forjan. Ese sentido de justicia social, que no es patrimonio de nadie en particular, surge como consecuencia de nuestra concepción cristiana de la vida. Es el derecho enriquecido con la caridad; es la justicia distributiva impartida con espíritu de solidaridad, que debe imperar, y felizmente impera, por encima de cálculos menudos que empuenecen la economía y la reducen a espejismos de alambique. Porque si la economía no se desarrolla en función social, deja de tener sentido para sumergirse en la ley de la selva. No hay otra ruta para el progreso de los pueblos: colocar la economía al servicio del hombre, que es su objeto, su origen y también su destino.

Por eso coincido con la gráfica expresión vertida ayer en este recinto por el señor diputado demócrata progresista Martínez Raymond, al manifestar que en este proceso de la riqueza nacional es menester, por razones humanas y sociales, repartir la torta a medida que la vamos construyendo; en cambio, discrepo con el concepto de aquellos que quieren repartirse la torta a expensas de quienes la elaboran.

No creo, por otra parte, que este proyecto, aunque fundamentalmente social, sea antieconómico. Los salarios que se mencionan están muy lejos de provocar una catástrofe en las finanzas de los empleadores. ¿Es que hay muchos empresarios que paguen menos de 9 800 pesos por ocho horas de trabajo? Desgraciadamente, parece que sí, pues de lo contrario no se hubiera levantado esa ola de oposición que registra la prensa, y esta misma Cámara a través de las notas recibidas de asociaciones empresarias. Yo

preguntaría a los firmantes de esas notas si creen que con salarios inferiores a 9.800 pesos puede un trabajador atender a necesidades elementales de la vida, alimento, techo, vestido, etcétera. Ya sé cómo resuelven los trabajadores la situación, cómo se ha resuelto en la práctica: con dos empleos, saltando de una obligación a la otra, ingiriendo precipitadamente un alimento frugal entre una y otra tarea, corriendo sofocados tras un colectivo a la madrugada para caer agotados, ya entrada la noche —y muchas veces muy entrada la noche—, en el lugar de descanso, sin ánimo ni fuerzas; a veces sin voluntad para el desarrollo de la vida integral que exige una vida familiar auténtica: el progreso intelectual, la distracción, la pausa, etcétera.

No sé si los adversarios del salario mínimo conocen esta consecuencia negativa; no sé si los empresarios lo sienten; pero lo curioso es que a todos perjudica el doble empleo. Médicos y sociólogos, para no mencionar a moralistas y psicólogos, nos hablan de la trascendencia de la fatiga. Es imposible un rendimiento adecuado cuando se han cumplido doce, catorce o dieciséis horas de trabajo. Algunos empresarios suelen confrontar solamente estadísticas de rendimiento en sus establecimientos, para verificar que los índices decaen; pero no las cotejan con el total absoluto de las horas cubiertas en el doble empleo. Otros, unas veces con indignación —fingida o sentida— y otras con ironía y apresurada aspiración de describir la psicología popular, afirman indecorosamente que el argentino no trabaja. Es un indigno bofetón a este hombre argentino, a este trabajador humilde, que para atender su hogar se destroza en jornadas agotadoras, mientras las leyes, con ironía sangrienta, le dicen que no puede trabajar más que ocho horas.

No es sin embargo este problema social —que a mí me preocupa tanto como a los señores diputados— el que yo quería señalar para aquietar las dudas de quienes temen una incidencia perjudicial del salario mínimo en el desenvolvimiento financiero, y más hondamente en la economía. Creo que para el perfeccionamiento de nuestra producción y para el desarrollo de la industria y del comercio, esta ley arrojará felizmente proyecciones positivas. La crisis económica y la crisis financiera tienen sus más palpables expresiones en la dificultad de las cobranzas, en la disminución de las ventas, en la falta de medios de pago, en la llamada iliquidez. Los mejores salarios facilitarán esos medios; y la mayor capacidad adquisitiva de los trabajadores les permitirá justamente adquirir los bienes de consumo de que hoy se ven privados por la insuficiencia del jornal. Será una inyección real en el comercio, sin las negativas consecuencias de la emisión, que promoverá las ventas y regularizará los pagos, y que en muchos casos permitirá a los empresarios concretar la aspiración del *full time*, para que en una sola jornada, física y psíquicamente nutrido, el

trabajador aumente su rendimiento, y para que, por la disminución de los eventos de la fatiga, las contribuciones empresarias a sanatorios y policlínicos sean menores. He aquí cómo, por razones hasta económicas, el salario mínimo que estudiamos contribuirá a la producción y al desarrollo.

En este momento de mi exposición cabe formular una pregunta vinculada con una inquietud perfectamente lógica expuesta por el señor diputado Peña y Lillo en su exposición de ayer. ¿Es real y cierto lo que nos dicen las estadísticas, de que hay un millón de desocupados en el país? Simplemente dejo expuesta esta inquietud a la Honorable Cámara. Entiendo que no hay un millón de desocupados; creo que hay un millón de medio desocupados; creo que quienes tenían dos empleos han perdido uno y hoy deben arreglarse con el otro. Lo que ganan en ese empleo, naturalmente, no les alcanza para satisfacer las necesidades elementales de su familia. No creo que rindan más, preocupados como están en cubrir el déficit y buscar otra ocupación. Para que rindan hay que proveer a su seguridad: no a aumentar sus actuales horas de trabajo con dos jornadas.

El rendimiento del trabajador de los dos empleos no puede ser eficaz; pero si se le paga adecuadamente en uno de ellos, va a resultar mucho más eficiente en la real jornada de ocho horas que en la actual, degradante y esclavista, de dieciséis horas.

Hay, pues, razones económicas que avalan este proyecto y que alejan toda agorería sobre los resultados del mismo. Por otra parte, se ha proyectado suficientemente sobre el país la experiencia económica a base de la pauperización popular. Alsogaray y Pinedo, en gestiones anteriores, fueron los cerebros de una política que orgullosamente se anunciaba por televisión, una política que, sobre esa base de empobrecimiento popular, afirmaba haber logrado la eliminación del déficit del presupuesto; y saben la Honorable Cámara y la opinión pública cuál es el déficit actual y cuál era en aquellos momentos.

No estaría mal que recordáramos que estamos en retardo, como muy bien dijera el señor diputado Solari; los países que han alcanzado potencialidad económica, y aun aquellos que están en vías de desarrollo, hace tiempo registran un salario mínimo.

En este recinto se sientan legisladores provenientes de agrupaciones políticas que ya postulaban el salario mínimo a principios de siglo y que han venido desplegando intensas campañas para lograrlo. Hace más de setenta años que el Pontífice León XIII, en su encíclica *Rerum novarum*, señalaba no solamente la justicia sino la necesidad de un jornal mínimo que cubriera las necesidades elementales del trabajador y de su familia.

Aun antes de que en 1957 los diputados constituyentes en Santa Fe incluyeran el artículo 14 bis, las comisiones y el archivo de esta Cá-

mara contaban con innumerables proyectos al respecto. Recientemente, cuando el Congreso aprobó la ley de abastecimiento, estaba dando bases, a través del consejo nacional que se creó —cuya constitución lamentablemente se dilató— con participación de delegados de la CGT, para que, conocidas las necesidades y estudiados los precios, se fijara el salario mínimo indispensable para satisfacer las necesidades.

No van a abundar algunas consideraciones sobre el monto fijado. El proyecto mayoritario fija en 14.000 pesos el salario familiar; el proyecto minoritario lo eleva en un par de miles de pesos; pero, este salario mínimo ¿alcanza para cubrir las necesidades mínimas?

El señor diputado Serú García, en la sesión de ayer, leía una opinión, bien documentada por cierto, de un gremio que creo era el de Luz y Fuerza.

Sr. Serú García. — Así es, señor diputado, cuya inserción pedí en el Diario de Sesiones.

Sr. Amura. — En esa opinión manifestaban los integrantes del mencionado gremio que el salario mínimo decoroso para subvenir a las necesidades elementales debía fijarse en alrededor de los 26.500 pesos. Entiendo que, inclusive, esa cifra es insuficiente, porque si entre las necesidades elementales incluimos la vinculada con la vivienda, con esa suma ningún obrero puede tener posibilidad de lograr una vivienda digna.

Pero aquí hablamos del salario mínimo dentro de un régimen capitalista, que estamos tratando, legalmente, de superar derribando estructuras. Las soluciones definitivas para la clase trabajadora vendrán cuando logremos esa superación por medios democráticos. Dentro del régimen salarial actual, saben todos que no es posible lograr estas ventajas mínimas a que aspira hoy.

No podría decirse que no hay inquietud social en este recinto o que «se está improvisando». Este proyecto es el producto de una larga elaboración en la que todos, explícita o tácitamente, hemos intervenido.

Caja de resonancia de la inquietud nacional en todos sus aspectos y manifestaciones, esta Cámara ha oído a quienes de alguna manera participan de su inquietud. Hemos escuchado la palabra de la empresa y el reclamo laboral; conocemos sus necesidades y sus posibilidades. Ya lo hicimos cuando se debatió la ley de abastecimiento, esa ley que está siendo injustamente criticada por quienes se despreocuparon de su elaboración y nada hacen para facilitar su cumplimiento, ignorando que con su desidia no hacían ni hacen sino agrandar las fricciones y distorsionar el panorama, creando de esa manera un falso clima para que el Parlamento tanto como el gobierno aparezcan ante la opinión pública manejados por presiones. Aquí no hay ninguna presión; nada nos presiona para que votemos esta ley. Que se entienda bien: estamos debatiendo esta ley de salario mínimo por expresa disposición constitucional, por el imperativo cumplimiento de nuestros principios, por

el claro mandato ciudadano de dar fuerza de ley a justas aspiraciones populares.

Desde luego que esta libertad en que nos desenvolvemos ni implica una abstracción ni nos aísla de las fuentes en que esas percusiones se producen. Yo, por ejemplo, estuve personalmente en la CGT; no tengo pudor ni temor de decirlo, y estoy orgulloso de haber dialogado con los dirigentes gremiales. Por otra parte, para sentirme identificado con los dirigentes gremiales y con los hombres de trabajo no tengo necesidad de adoptar posturas demagógicas ni de quitarme el saco; me siento consustanciado con la clase trabajadora porque de ella provengo y a esos intereses soy siempre leal.

Estuve en la CGT, como lo recordara el señor diputado Serú García, cuando la central obrera invitó a los legisladores a una reunión para explicar las motivaciones de un proyectado plan de lucha. En aquella oportunidad, señor diputado, ratifiqué el concepto de madurez que me merecía el movimiento obrero y reiteraré, como lo hago hoy, la justicia de sus reivindicaciones. Inclusive dije que las reivindicaciones a que aspiraba la CGT no llenaban las necesidades, por cierto imperiosas, de la clase trabajadora; pero añadí, y esto es lo que omitió el señor diputado Serú García en su cita...

Sr. Serú García. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿Consiente la interrupción el señor diputado Amura?

Sr. Amura. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Serú García.

Sr. Serú García. — Le rogaría al señor diputado que aceptara mi aclaración, de que no se trata de que yo haya omitido ese aspecto en mi cita, porque ello puede dar lugar a un mal entendido.

En realidad, yo leí textualmente lo que había publicado el diario «La Nación», si mal no recuerdo, acerca de la supuesta declaración del señor diputado Amura, conforme a la cual informaba que la Confederación General del Trabajo se desenvolvía dentro de un plano de corrección democrática. Algo así creo que era la expresión transcrita en el diario «La Nación». Yo no omití, desde luego, ningún párrafo de lo que leí; sencillamente me remití a la información periodística.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Amura.

Sr. Amura. — Evidentemente, señor diputado, que el diario «La Prensa», no «La Nación»...

Sr. Serú García. — Exacto, señor diputado.

Sr. Amura. — ...reflejaba textualmente lo que usted leyera en la Cámara. No hago una alusión de carácter personal; sé que usted no omitió absolutamente ningún párrafo, pero sí lo omitió el periódico. Y es interesante —por que se tomó versión taquigráfica en la central

obrero de todos los discursos pronunciados por los legisladores— conocer la integridad de la exposición para entenderla y tomar nota de la sustancia de la misma.

Quiero aclarar a la Cámara que hablé de mi inquietud en esos momentos por las proyecciones que podía arrojar ese plan. Dije a los miembros del consejo confederal que se encontraban presentes que había que buscar por vías normales y pacíficas la obtención de las justas reclamaciones obreras. Expresé que en la ley, en el cumplimiento de la ley y en la exigencia para hacerla cumplir, estaba el mejor logro de esas reivindicaciones. Señalé que en la ley nacional de abastecimiento, que en esos momentos estaba sancionándose, había un capítulo de honda trascendencia social: el que entrañaba la constitución de un consejo nacional de abastecimiento. Justamente un capítulo del que fui autor, juntamente con el diputado Díaz O'Kelly, y que tanto la comprensión como la gentileza de los señores diputados que integraban la comisión me permitieron incluir en el proyecto aunque yo no era miembro natural de la misma.

Dije entonces, como lo repito ahora en que parece vacilar el espíritu que inspiraba esa ley, que la disposición legal constituía un magnífico instrumento para el cogobierno entendido en un sentido de democracia moderna, según el cual, y conforme lo dice nuestra Constitución, el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes, pero está asociado en esa representación por su voluntad y por su cooperación. En una especie de proceso de simbiosis el legislador piensa y siente con sus representados, y éstos llegan, en la coherencia de su acción, a legislar con él.

No es éste el momento de recordar, señor presidente, si la ley nacional de abastecimiento—producto de un meditado y profundo estudio de los legisladores de esta Cámara y que se gestó en amplitud, llamándose al seno de la comisión a todos los factores de la producción (empresarios y obreros) y que mereció en general la aprobación de la casi totalidad de los sectores— no ha sido digna de la esperanza que en ella se depositó. No es culpa del legislador, aunque como tal me siento orgulloso de haber contribuido a su sanción. Es a otros poderes a quienes corresponde hacerla cumplir, y especialmente a los sectores que tienen en ella un arma de valor para reivindicar sus derechos, para mostrar en la tribuna resonante de este cuerpo la trayectoria real del proceso económico.

En esa ley, y esto lo manifesté en el recinto de la Confederación General del Trabajo, tenía la organización gremial una posibilidad jamás otorgada a entidad alguna, porque en su artículo 5º se hace referencia al Consejo Nacional de Abastecimiento, del cual es integrante natural la CGT, con los representantes designados por ella misma. A través de este consejo la central obrera tiene la posibilidad de analizar e investigar todo lo relacionado con el proceso

económico, en las etapas que van desde la producción hasta el consumo, y proponer soluciones concretas para que el Congreso las transforme en ley.

Esta es la posibilidad que este Congreso, con honda sensibilidad social, le dio a la clase trabajadora, sin necesidad de que ésta presionara.

Yo, como legislador nacional, fui a la sede de la CGT y fui adonde estaban los empresarios, para informar que el Congreso era sensible a los reclamos que la sociedad exigía, y que formu'aban particularmente sus sectores más necesitados.

Debo confesar con pena que la ley nacional de abastecimiento está aún por cumplirse; y por eso deseo dotar a esta ley del salario mínimo, que estamos elaborando, de la fortaleza y los recaudos necesarios para que no llegue a frustrarse el Consejo Nacional de Salarios que ella instituye. Creo que podremos fortalecerla si sabemos librar al país de este clima de intimidación que parece sobrecogerlo.

Es inexplicable que en momentos en que el país se está desenvolviendo dentro de la ley, haya quienes desembozadamente insten a violarla. Es inexplicable que en momentos en que funcionan normalmente todos los poderes del país, nacionales y provinciales, bajo cualquier signo político, se incite públicamente al desconocimiento de esos poderes.

La autoridad es la expresión institucional de la ley y obra en representación del pueblo. Pero dicta una disposición sobre carnes, y las carnicerías cierran o amenazan cerrar pretendiendo intimidar con la fuerza del cerrojazo; se dicta una disposición sobre un artículo de primera necesidad como el pan, y las panaderías también pretenden anteponer la fuerza a la ley.

Y ya en el tobogán de transgresiones legales, hasta ciertos dirigentes laborales y políticos parecen hacer el juego a esa presión empresarial. Por la fuerza ocupan fábricas; por la fuerza detienen la producción, y por la fuerza secuestran personas. ¿Dónde está el respeto por la ley?

Hemos escuchado al comienzo de este debate la opinión del bloque de la UCRI frentista por vía del señor diputado Mársico. Personalmente, descarto esa opinión, y creo que debe descartarla la opinión pública, por poco sería. Pertenece el señor diputado a un partido político que en el gobierno hizo todo lo contrario de lo que postuló en el llano. Esa experiencia lo descalifica ante la opinión pública para creer en la honestidad de lo que ahora, en la oposición, manifiesta. Todo hace suponer que las actuales postulaciones no serán sostenidas si llegara nuevamente al gobierno.

Por eso no me interesa esa posición, ni creo que interese seriamente a la opinión pública. Esta incoherencia que se demuestra entre oposición y gobierno sigue demostrándose entre gobierno y oposición. Porque el hoy jefe y con-

ductor visible de ese movimiento, el doctor Arturo Frondizi, al llegar al gobierno en 1958 resolvió, como primera medida, aumentar desaprensivamente, sin elaborar planes previos de desarrollo económico y de planificación financiera, el sesenta por ciento de los sueldos, aumento que desembocó en una gran inflación de la que el país guarda triste memoria.

Y así como sin planes previos elaborara aquel decreto, ayer acaba de manifestar el doctor Frondizi lo que voy a leer aquí y que publica un rotativo de la mañana, el diario «El Mundo» en su página seis. Dice así: «No conozco el pensamiento de ellos —el conductor del sector frentista se refiere al pensamiento de los señores diputados que lo representan en este recinto—, pero indudablemente la implantación del salario mínimo en la situación económica actual, sólo traerá desocupación e inflación».

Quiero demostrar a la Cámara la incoherencia, no ya del que fue opositor y luego en el gobierno hizo todo lo contrario de lo sostenido en el llano, sino del que fue gobierno y hoy en la oposición predica todo lo contrario de cuando era gobierno.

Por una razón de honestidad, creo que estas opiniones no pueden tenerse en cuenta ni por la Cámara ni por la opinión pública. Pero sí es importante destacar la coincidencia ante esta oposición —y señalar este velatorio prematuro de la ley que estamos sancionando— que estuvo en labios del señor diputado informante de ese bloque; la coincidencia con el plan de lucha de la entidad obrera, cuyos dirigentes (no puedo decirlo con total seguridad) no sé si, en estos momentos, están representando reales intereses obreros o si están mezclados, en coincidencia con lo expresado por determinado bloque, también con intereses empresarios.

A aquellos reales intereses respondimos, cuando, recogiendo las inquietudes de la Confederación General del Trabajo en ese sentido, se dictó por el Congreso la ley nacional de abastecimiento, que posibilita la cooperación de la central obrera para analizar el proceso de los precios y sugerir soluciones. Se pedía...

¿El señor presidente desea hacer alguna manifestación?

Sr. Presidente (Mor Roig). — Esperaba que el señor diputado concluyera su párrafo para interrumpirlo, pero como usted me lo permite, le señalo que ha concluido el término reglamentario de su exposición.

Sr. Mujica. — Que se le prorrogue, señor presidente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar si se amplía el plazo al señor diputado Amura.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Amura.

Sr. Amura. — Decía que se solicitaban medidas para contener el alza de los precios y que el

Congreso votó la ley nacional de abastecimiento, en la que colaboramos todos los diputados.

Se pidió la sanción de una ley de salario vital mínimo y móvil y que se lo fijara en 13.500 pesos —manifesté en esa oportunidad que era insuficiente, como lo reitero ahora—, y el Poder Ejecutivo, cumpliendo con su programa, remitió un proyecto al Congreso. La comisión, en cuyo seno están representados todos los sectores políticos de esta Cámara, se puso a estudiar el proyecto y a consultar a las distintas entidades para que el mismo fuera viable.

También se pidió libertad para todos los sectores, en momentos en que prácticamente no quedaba ningún preso político, o de carácter gremial, en las cárceles del país.

Por eso yo le pregunté al señor diputado Serú García si él creía que, de no mediar ese plan de lucha de la CGT, el Congreso igualmente hubiese sancionado esta ley de salario vital mínimo y móvil; y me contestó: «No soy adivino, señor diputado.» Creo que en ese momento el señor diputado Serú García estaba juzgando mal la moral de sus pares, porque todos estábamos comprometidos a trabajar para sancionar este proyecto sin necesidad de presión alguna.

Entiendo que para levantar el diálogo democrático entre gente honesta en el país es conveniente recordar las palabras del gobernador de San Juan, doctor Leopoldo Bravo, que me parecen oportunas. En una reunión, a la que también asistieron dirigentes justicialistas, dijo que en materia gremial, y en lo político y en lo social, para entendernos los argentinos, es necesario hablar claro. Y yo agregó que es necesario hablar claro también por vía de todas las organizaciones, tanto gremiales, como las empresarias y las políticas.

Es necesario hablar claro. Que la CGT nos diga a dónde quiere llegar con el plan de lucha que está conmocionando al pueblo, cuando hay evidencia de que el proyecto de ley de salario vital mínimo y móvil se va a sancionar hoy o mañana, o en los primeros días de la semana próxima. Queremos hablar claro, pues sólo así será posible reiniciar el diálogo entre gente honesta.

Sr. Lozano. — ¿El señor diputado manifiesta que el doctor Bravo es justicialista?

Sr. Amura. — Hablé de una reunión en la que había dirigentes justicialistas y donde el doctor Bravo dio la opinión que cité. En ningún momento he dicho que el doctor Bravo fuera justicialista.

Sr. Lozano. — Como no lo había entendido bien, pensé que había que anotar al doctor Bravo en nuestros registros.

Sr. Amura. — Concluyo manifestando y reiterando que, al respecto, coincido con muchas, si no con todas las reivindicaciones que postula la CGT. ¿Cómo no voy a querer una digna retribución para los trabajadores? ¡Si en eso estamos aquí, en este momento! ¿Cómo no voy a querer amplia libertad para el ejercicio de los

derechos sindicales y su proyección en el gobierno si para eso instituímos el Consejo Nacional de Abastecimiento y para eso vamos a crear el Consejo Nacional de Salarios, y para eso vamos a pedir y exigir al Poder Ejecutivo que no demore el proyecto para constituir el Consejo Económico Social, para la participación de todos los sectores en el gobierno, en la co-participación y en la colaboración con el gobierno!

Pero una cosa es la legítima reclamación de la central obrera y otra los medios, al margen de la Constitución y las leyes, que se pretende utilizar para alcanzarla. Digo que esa acción y esos medios, además de ilegales son contraproducentes. A los argentinos nos viene de Mayo el espíritu y el vigor de la libertad suficientemente poderosos como para resistir cualquier prepotencia. En el llano y en el gobierno, a la derecha y a la izquierda, siempre hemos tenido coraje para rechazar la prepotencia. Venga de la Casa Rosada o del cuartel, de los monopolios imperialistas o de los sindicatos, siempre hemos doblegado a la fuerza sin razón con la razón, y aun sin la fuerza.

Tenemos vocación de hombres libres. Estamos templados en la lucha contra las dictaduras. No se nos intimidará. Sólo nos inclinamos ante la Constitución y las leyes. Sólo somos sensibles a la razón conjugada con el derecho. Por eso estamos aquí reglamentando un derecho constitucional, el establecido por el artículo 14 bis.

No se nos oculta la trascendencia del proyecto en debate. Por eso queremos que sus proyecciones encaucen en auténticas aspiraciones populares. Queremos que las expresiones de la empresa y del trabajo participen de la legislación. Queremos que sus representantes en el Consejo Nacional de Salarios establezcan los montos justos, adecuados, satisfactorios de las remuneraciones. Las que provisionalmente fijamos hoy —y hasta tanto el consejo se constituya— tienen el significado de una asignación mínima, por debajo de la cual es incomprensible la existencia decorosa, vital, diría yo, del trabajador.

La ley tiene que ser lógica y prudente para que su cumplimiento no se escamotee en la quimera o se frustre en el absurdo. Y tiene que poseer la flexibilidad que le da, precisamente, la creación del Consejo Nacional de Salarios, para que armonice con la imprescindible planificación de un proceso de desarrollo.

He escuchado con atención las cifras que se han dado con respecto a la producción. Ellas me confirman en la necesidad de atender primero al hombre y luego a la economía, que es su consecuencia. No es con desfallecidos que podremos alcanzar mejores índices de producción. El factor humano, irremplazable, es el primordial. Brindemos salarios dignos al trabajador y habremos brindado al desarrollo la más sólida palanca para su desenvolvimiento. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Liljesthröm.

Sr. Liljesthröm. — Señor presidente: deseamos hacer una exposición serena, porque creemos que para hacer buen gobierno es imprescindible tratar de dejar todas las emociones de lado a fin de tener la posibilidad de intelectualizar exactamente todos los elementos que intervienen en un proceso que se está juzgando y al que se quiere modificar.

Queremos también referirnos un poco a la historia, y no por un mero placer dialéctico ni para recreo de los señores diputados, sino porque pensamos, como Winston Churchill, que mientras más atrás miremos en la historia más adelante seremos capaces de ver. Queremos ver cómo se modifican el trabajo y el capital, cómo va cambiando la relación entre ambos factores de la producción y cómo evoluciona la actitud del Estado frente a esa relación.

Es cierto el concepto que expresó el señor diputado Monte cuando dijo que, desde lejanas épocas, el trabajo era una maldición bíblica. Ese concepto de maldición bíblica del trabajo aún persiste, y la razón es lógica, porque quienes trabajan actualmente son los representantes de la gente que trabajó a lo largo de los siglos en situaciones inhumanas: para empezar, los esclavos de Egipto, de Asur y de Akkad; luego, los esclavos de los conquistadores griegos y los de los conquistadores romanos; más tarde, el sistema del salariado, que indiscutiblemente fue siempre deficiente; hasta llegar a la revolución industrial, en la que la capitalización de las empresas se hace a costa del exceso de labor mal paga del obrero.

De todas las revoluciones que registra la historia, sólo una no se hizo para detentar los elementos del poder exclusivamente. Es la revolución cristiana, que significó fundamentalmente la dignificación del ser humano, haciendo iguales a todos los hombres, como hijos de Dios, y promoviendo la dignificación del trabajo. Hay que recordar que Cristo era hijo de un humilde carpintero y que reclutó a sus discípulos entre los pescadores del mar de Galilea. Eso significó, entonces, una revolución copernicana frente a las ideas que regían en aquel tiempo. Se explica así que, desde la silla apostólica, los sucesores de Simón Pedro siguieran la misma tendencia a través de sus encíclicas, que ya fueran recordadas en la Honorable Cámara por varios señores diputados.

Durante la revolución del maquinismo es cuando se gesta el movimiento sindical, que comenzó exclusivamente con miras a obtener beneficios para los sindicalizados, pero que fue evolucionando con el tiempo y ya está desempeñando una verdadera acción social.

Vamos a hablar ahora de la evolución de la empresa. El instinto del acervo es innato en el hombre. Debemos suponer que en los primeros tiempos esa criatura desnuda, colocada en un medio hostil, ante la inseguridad de obtener el sostén cotidiano, debió pensar en acumular cada

vez más para tener la posibilidad de adquirir seguridad. Esa inseguridad es la que, en los tiempos modernos, aún persiste en la clase trabajadora. ¿Pero qué pasa con respecto a la otra clase? El instinto del acervo sufre en algunos individuos una suerte de trastorno, una especie de perversión, de tal manera que esos individuos no tienen nunca lo suficiente como para sentirse satisfechos. Diariamente constatamos este hecho entre la gente de dinero. Pareciera que muchos, cuanto más tienen, más desean. En el fondo, eso no es nada más que la manifestación de una suerte de complejo de inferioridad, porque cubriéndose con la máscara del oro imponen su personalidad. Desdichadamente, en las sociedades modernas todavía el oro es un factor de poder.

En cuanto a las relaciones entre el capital y el trabajo, también han evolucionado a lo largo de las épocas. En los comienzos, cuando gobernaban exclusivamente los autócratas, no había relaciones de capital y trabajo, porque todo el trabajo era para el príncipe. Llegando a la Edad Media, observamos que la clase trabajadora se halla dividida en dos sectores: el del trabajador del campo, que es realmente el siervo del señor, y el del trabajador de las ciudades, de las pequeñas villas. En éstas existen las corporaciones, verdaderas déspotas y explotadoras de los trabajadores, ya que el aprendiz, para llegar a ser maestro de obra, tenía que trabajar sin paga durante más de siete años.

Veremos ahora cómo interfiere el Estado, desde un comienzo, en estas relaciones entre el capital y el trabajo. Cuando el Estado era autócrata, sus bienes se confundían con los del príncipe. Luego viene una suerte de indiferencia del Estado con respecto a las relaciones entre el capital y el trabajo, y más tarde un intento de regimentar dichas relaciones.

Entonces, el Estado adopta dos actitudes distintas, pero ambas siempre paternalistas: o es paternalista hacia los empresarios —como lo fue hasta hace poco y aún en algunas partes lo sigue siendo— o es paternalista hacia los obreros. De cualquier manera, la intervención del Estado en las relaciones laborales es la tendencia que siguen todos los países, que tienen, sin embargo, dos sistemas. Uno es el socialismo —digamos—, en el cual el Estado desempeña su papel como actor fundamental de la producción, y el otro es el sistema liberal —llamémosle así— o neoliberal, en el que el Estado interviene exclusivamente para crear las condiciones necesarias a fin de que la producción se efectúe dentro de los términos más convenientes y sin perjuicio de ninguna de las clases en juego. Los dos sistemas son buenos, dependiendo su eficacia exclusivamente de la capacidad de los gobernantes que los aplican.

Llegamos así a los momentos actuales, en que nos encontramos con que hay una gran masa laboral que lucha por sus reivindicaciones y que

tiene enfrente al empresario. Desdichadamente, estas dos fuerzas de la producción no han entendido todavía que tienen un interés común. Tal interés común se va a poner de manifiesto poco a poco, a lo largo de la historia, y ello ocurre de la siguiente manera. La empresa va creciendo hasta llegar a escaparse de las manos del empresario. Tiene un futuro, que trataremos de esbozar. Indiscutiblemente, todavía no pueden entenderse las fuerzas empresarias y las laborales, debido a una especie de prevención que se explica así: el empresario cree que el obrero es incapaz de cooperar con él en la dirección de la empresa, y evidentemente cree eso porque no ha entendido todavía que la clase obrera ha evolucionado de tal manera que resultaría muy eficaz en la conducción de la empresa.

Es decir, en un primer período ocurrirá sin lugar a dudas lo que nosotros propugnamos, o sea la creación del consejo de empresa en el cual estarían los representantes de los obreros actuando en la dirección de la empresa. En un segundo período ocurrirá, sin lugar a dudas, la participación de los obreros en las ganancias, y en un tercer período se llegará, matemáticamente, a la asociación de los obreros a la empresa.

¿Por qué no puede ocurrir todo el proceso quemándose las etapas? El análisis es interesante. En el momento actual la actitud mental del empresario es la de negarle capacidad al obrero. Cuando éste demuestre su capacidad de conducción, que la demostrará mediante la creación del consejo de empresa, el empresario entenderá lo útil que le significará tener al obrero acompañándolo en la dirección de la empresa.

¿Por qué el segundo período es el de la participación de los obreros en las ganancias y por qué no puede ser directamente el de la asociación? Aquí es donde se tiene que modificar la mentalidad de la masa laboral, que todavía le teme al fracaso de la empresa y por lo tanto no quiere ser partícipe o correr el riesgo de las pérdidas y solamente desea la participación en las ganancias. Una vez que la masa laboral esté convencida de la seguridad de la empresa, entonces correrá los riesgos propios de ella tanto en las ganancias como en las pérdidas. Esa es la evolución que sin lugar a dudas ocurrirá.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Miguel P. Del Pero.

Sr. Liljesthröm. — ¿Por qué es, señor presidente, que nos oponemos a algunas de las leyes que el Poder Ejecutivo está gestionando en el Congreso? No es por mero capricho, ni por mera actitud reaccionaria. Es porque vemos en la gestión de estas leyes que lo único que hacen es obstruir el desarrollo y el desenvolvimiento futuro en el sentido que nosotros lo hemos dicho. Los señores diputados tendrán a bien suponer que nosotros somos tan sensibles como todos a

las necesidades que está pasando el pueblo argentino, pero si hemos de trabajar por una arquitectura sólida, bella y confortable de la vida para los argentinos, es menester conocer las circunstancias, otear el ambiente y conocer al hombre para el cual se legisla.

No ocurrirá entonces la posibilidad que el distinguido señor diputado Elena expresó, en una de sus habituales escaramuzas, cuando se le planteaba el fracaso de la ley nacional de abastecimiento: que había fracasado el factor humano. No es cierto; el fracaso es de la Cámara porque ella tiene la obligación de conocer el factor humano para el cual está legislando.

Es imprescindible, señor presidente, conocer el ambiente y conocer al hombre. Y ahora es cuando nosotros vamos a hablar de la ley que se propugna. La creemos perjudicial porque obstruye el desenvolvimiento que en el tiempo tiene que ocurrir entre las relaciones obreras y empresarias. La creemos perjudicial porque indiscutiblemente va a provocar una inflación que —no nos tenemos que engañar— no va a ser solamente del dos por ciento, como quiere el señor ministro de Economía, con los 13.000 millones de pesos que pesarán sobre el presupuesto, cuando el señor diputado Martínez Raymonda pide otros 3.000 millones para el sector público y solicita también se subvencione a las provincias hasta que puedan resolver sus problemas presupuestarios, con todo lo cual se llegará a otros 10.000 ó 15.000 millones de pesos. Las posibilidades de inflación serán mayores.

¿Qué ocurrirá si hay inflación? Indiscutiblemente los salarios tomarán una forma hiperbólica que se acercará en forma asintótica a la línea de los precios, sin alcanzar las ganancias. Ello significará que se alejará cada vez más la posibilidad de llegar a una justa distribución de la riqueza.

La solución es, sin duda, propender al cambio de la mentalidad empresaria y al cambio de la mentalidad obrera. La abstrusa mentalidad empresaria no entiende que el obrero ha llegado ya a un estado de evolución que es capaz de reconocer sus derechos y de defender incluso su fuente de trabajo. La mentalidad empresaria no entiende todavía que la empresa es un bien social, que no le pertenece exclusivamente a ella, puesto que la sociedad ha contribuido a su creación, y puesto que los obreros también han colaborado en ella con su esfuerzo, de modo que en cierta forma deben participar de la misma.

La mentalidad obrera no entiende que tiene que defender los bienes de producción, y como está en lucha permanente con el empresario —y está en lucha permanente porque tiene una asignación inferior a la que le corresponde— todavía siente, por eso, la maldición bíblica del trabajo.

Sr. Pizarro. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Liljesthröm. — ¡Cómo no, señor diputado!

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Pizarro.

Sr. Pizarro. — Solicito al señor diputado me permita una rectificación sobre la supuesta maldición bíblica del trabajo. Cuando Dios entregó el Edén al primer hombre fue para que lo trabajara. Vino luego la caída, pero el trabajo no fue maldecido; lo que Dios dijo es que toda esa tarea que el hombre tendría que hacer para vivir en la tierra sería dura y dolorosa. Es por eso que dijo «y ganarás el pan con el sudor de tu frente»; pero repito que el trabajo no está maldecido.

El trabajo es algo digno, cualquiera sea el oficio. San Pablo enseña que «quien no quiera trabajar que no coma». El trabajo jamás fue maldecido.

Agradezco la interrupción al señor diputado.

Sr. Liljesthröm. — Señor diputado: yo hablé de la maldición bíblica con el sentido que se le da habitualmente a la expresión. Además dije que la revolución cristiana había dignificado el trabajo, que por estar a cargo de las clases más bajas, de las clases esclavas, tenía un sentido peyorativo para el resto de la sociedad.

La consecuencia actual de la famosa maldición bíblica es que realmente el obrero trabaja por obligación; y todo aquel que hace una cosa por obligación tiene que sentir disgusto.

La explicación es simple. El trabajo significa creación. Debiera estar entonces acompañado de un aura placentera. ¿Y qué es lo que pasa? Ocurre que el obrero está creando con sus manos cosas que no van a ser para él y de las que va a usufructuar un tercero. Entonces el trabajador no puede sentir el placer de la creación. Cuando las circunstancias cambien de tal manera que todo lo que haga el obrero le pertenezca por lo menos en magnitud considerable, sentirá el placer de la creación y el trabajo habrá dejado de ser una maldición bíblica.

Sr. Reñé. — Entonces la verdadera maldición son las estructuras sociales.

Sr. Liljesthröm. — Sí, señor diputado; sin lugar a dudas.

Nosotros proyectamos el cambio de la estructura social, y por eso me estaba refiriendo a la forma en que evolucionará en el futuro la empresa nacional. La empresa nacional va evolucionando poco a poco e indiscutiblemente se llegará a la asociación de los obreros a la empresa. Desde ese momento la evolución no se detendrá.

Y ya que estamos en este tema apasionante, ocuparé algunos minutos más para exponer una teoría nuestra.

¿Qué va a ocurrir después? Como dije, la evolución no se detendrá cuando los obreros se transformen en socios empresarios. La evolución seguirá su curso porque también habrá que intentar que, poco a poco, mediante la distribución de la riqueza se nivele a todos. La nivelación significará que se llegue al momento en el cual se haga una verdadera revolución del concepto

de capital. ¿Cómo va a ser la revolución del concepto de capital? Simplemente, entendiendo que no existe diferencia entre mano de obra y capital, porque si existe el montón de oro que implica el capital y que está condicionado por las circunstancias de la sociedad, también existe el montón de oro que significa el llevar a un hombre hasta su logro integral y que también está condicionado por la sociedad.

¿Cuánto cuesta un hombre desde su gestación hasta que está en su aptitud laborativa de sus veinte años? Ese es, indiscutiblemente, un capital que la sociedad ha invertido en el hombre. Ese capital le pertenece al hombre porque es el depositario del mismo, pero siempre en función social. Pero ocurre que todos los hombres tendrán exactamente el mismo valor de capital básico para una empresa y el individuo representará tanto más capital cuanto mayor sea su capacidad. Entonces, niveladas las circunstancias de todas las fuerzas de la producción ocurrirá lo siguiente. Habrá un mínimo de necesidades que será igual para todos. No habrá distinción de empresarios y obreros, porque los obreros serán también empresarios. Las diferencias en las retribuciones no tendrán lógica y los obreros estarán representando en ese momento una participación empresaria y tendrán los mismos ingresos que los empresarios.

Sr. Arana. — ¿Eso supone socializar las utilidades?

Sr. Liljesthrom. — Las utilidades se van a socializar por sí, en la siguiente forma. Se repartirán de acuerdo al capital que cada uno presente en la empresa. Por ejemplo, el peón de patio representará un capital cualquiera, y un técnico representará un capital diez veces mayor.

Pero volvamos al proyecto que estamos considerando. Nuestra preocupación frente a la ley que se está estudiando es, en cierta forma, el modo como se ha tratado, que está un poco en contradicción con lo que dijo el señor diputado por la Capital Federal, de que el Poder Ejecutivo piensa y reflexiona, y que él desea que el presidente piense y reflexione mucho. Pero resulta que a esta ley la estamos tratando, evidentemente, a alta presión, en un trabajo forzado, sin que haya una razón lógica para que no hubiéramos dispuesto de un poco más de tiempo a fin de estudiarla y recibir los antecedentes.

¿Qué es lo que va a pasar? Para responder he de referirme aquí a la fábula que cita el Arcipreste de Hita cuando el mundo esperaba maravillado el parto que preparaban los montes. Había mucho ruido y muchos movimientos subterráneos, pero el monte solo parió un ratón. Eso es lo que va a ocurrir con la ley. Desdichadamente no va a ser un ratón inofensivo, sino que nosotros creemos que la ley va a significar un deterioro de la economía familiar a poco andar. Después ocurrirán otras circunstancias.

Pareciera que el Poder Ejecutivo no tiene la sensación de la conmoción que está ocurriendo. ¿Es que no tiene sensibilidad o está esperando realmente la agresión que produzca alguna víctima para recién tener noticia de lo que está pasando en el país? Tememos que las consecuencias de la ley sean similares a lo que le ocurrió a Baltasar. A poco apareció la mano bíblica que escribió en las paredes de la sala del festín: *Mene, mene, tekel upharsin*, los días de tu reino están contados. O, lo que es peor, el obrero, el pueblo argentino desesperanzado, porque está perdiendo la confianza en sus instituciones, en los hombres que lo conducen, llegará a sentir la angustia existencial de Unamuno y de Kierkegaard. Y llegará a una concepción solipsista de la sociedad, que solamente puede terminar en una anarquía o en una dictadura.

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Alfonsín.

Sr. Alfonsín. — Señor presidente: dispongo de muy pocos minutos, de manera que voy a dejar de lado toda posibilidad de construir un discurso para entrar de lleno a contestar algunas afirmaciones que se efectuaron en el recinto y que no pueden quedar sin respuesta por parte de nuestra bancada.

Ayer ha oído la Cámara la lectura del dictamen sobre este problema de la UCRI frentista y también escuchamos las afirmaciones del señor diputado Mársico en el sentido de que el mismo significaba un aporte serio y responsable a la labor legislativa. Para no quebrar lo que debe ser una norma de cordialidad en la Cámara, corresponde que nosotros señalemos simplemente al respecto que de ninguna manera coincidimos con la calificación efectuada por el señor diputado Mársico.

Bastaría quizá señalar muy brevemente algunas de las postulaciones del proyecto para darnos cuenta cabal de la enormidad y de la insensatez que ellas significan. Propone, por ejemplo, que se suspenda la aplicación del artículo 49 de la carta orgánica del Banco Central. Ello significaría que el Poder Ejecutivo no pudiera realizar las entregas de fondos necesarias a las cajas de jubilaciones, como lo ha hecho a través de esta modificación de la carta orgánica del banco y en cantidad aproximada a los 12.000 millones de pesos. Supone también cesar con el auxilio y la ayuda a las provincias, comprometidas por una cantidad de 13.000 millones de pesos. Supone, por ejemplo, la paralización de las obras de Agua y Energía Eléctrica de la Nación, comprometidas por 7.000 millones de pesos. Supone evitar seguir entregando fondos a EFEA, lo que se ha hecho hasta la fecha por 18.000 millones de pesos.

Vale decir, que esa suspensión de la aplicación del artículo 49 de la carta orgánica del Banco Central lisa y llanamente significaría no sólo

la paralización del país, sino quizá su postración definitiva.

Propone también el dictamen de la UCRI frentista una moratoria general del sector industrial. Esto equivaldría a dejar, indudablemente, sin recursos al erario público. Todos sabemos —y conviene que se recuerde en este momento— que en los 25.000 millones de pesos que aproximadamente se recaudan al año en concepto de impuesto a los réditos, la actividad agropecuaria, en una estimación que puede no ser perfectamente ajustada pero que tiene todos los visos de cierta, llega escasamente a los mil millones de pesos, de modo que son de importancia fundamental los recursos de la industria. Por otra parte sabemos que de los 26 000 millones de pesos que se recaudan por los impuestos a las ventas, el sector agropecuario no aporta cifra alguna fundamental. Quedaría entonces el Poder Ejecutivo sin posibilidades de afrontar no sólo las obras necesarias para el desarrollo del país, no sólo aquellos servicios sociales como las jubilaciones y pensiones, sino también, si se aplicara estrictamente el programa que nos presenta la UCRI frentista, los fines esenciales del Estado.

Llama la atención que se pretenda sostener en este recinto por el sector mencionado que el Poder Ejecutivo —como ha dicho el señor diputado Mársico— no ha sido fiel intérprete de los reclamos de los trabajadores y que por eso se justifica el plan de lucha. Llama la atención, porque si éste fuera el sincero y real pensamiento de esa bancada, nosotros tendríamos que sostener que en la época en que los sueldos se pagaban con bonos, en que el aguinaldo se pagaba en diez cuotas, en que se producían despidos en masa, en que los sueldos se abonaban con un extraordinario atraso, todo plan de lucha tendría que haber terminado, para ser consecuente con el criterio de esa bancada, con un incendio general del país. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Hay también en las palabras del señor diputado Mársico una acusación al gobierno de inoperancia o de incapacidad. Cabe señalar, señor presidente, que ésta es una vieja argucia que venimos sufriendo los pueblos latinoamericanos. Cada vez que en uno de nuestros países asume el poder un gobierno con un sentido auténticamente popular, los intereses de la reacción se levantan para acusarlo de inoperancia o de incapacidad. (*Aplausos.*) Pero allí está la obra realizada por el gobierno en muy corto plazo. Por supuesto que aceptamos que se hayan podido cometer errores; por supuesto que no nos creemos los depositarios de la verdad absoluta; por supuesto que sabemos perfectamente que los problemas con los que nos encontramos son muy grandes. Pero estamos convencidos, y debe estarlo también la Honorable Cámara, de que éste es un gobierno sin claudicaciones, que por todos los medios ha de cumplir sus compromisos con el pueblo.

Ofrecimos al país un plan de siete puntos, y toda la tarea fundamental está destinada a su cumplimiento. Allí está el problema del petróleo, el de SEGBA, el del Fondo Monetario Internacional, el de los derechos obreros, el de la legislación represiva, el de la no intromisión en la vida gremial del país. Cada uno de estos tópicos ha sido estudiado, manejado y resuelto en la forma en que el gobierno lo había prometido al pueblo antes de las elecciones del 7 de julio. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*) No queremos que jamás se pueda levantar en el país una voz que pueda acusar al gobierno de una claudicación. Admitimos todo lo que se quiera decir respecto a la imperfección en las soluciones, respecto a los errores que se puedan cometer, pero la fuerza moral que tiene este gobierno es necesaria no sólo para él, sino para el pueblo argentino que debe apuntalar la democracia.

Sr. Rodríguez del Rebollar. — En eso estamos, señor diputado; no niegue la realidad.

Sr. Pugliese. — Nos alegramos que estén ahora en eso.

Sr. Rodríguez del Rebollar. — Lo estuvimos siempre.

Sr. Alfonsín. — Desde esa bancada se está sosteniendo la justificación del plan de lucha, al que se han referido diversos oradores en este recinto. No es necesario que el radicalismo diga su palabra de respeto a la lucha de los trabajadores. Ello está consustanciado con sus ideales y con su programa.

Pero es necesario decir, a este respecto, algunas cosas. ¿Es que no se percibe que existe la intención de invertir una tendencia que llevaba a este país a abismos de incompreensión? ¿Es que no se percibe la voluntad puesta de manifiesto en la solución de todos los problemas por el Poder Ejecutivo de la Nación y por el Congreso Nacional? ¿Es que no se percibe la intención de pacificar, el deseo de terminar para siempre con absurdas divisiones del pueblo argentino? ¿Es que no nos damos cuenta que volvemos a un absurdo replanteo y que tratan de dividir al país entre peronismo y antiperonismo? ¿Es que no se advierte que en este momento el gobierno de la Nación está afrontando luchas duras contra sectores muy diversos que se ven afectados en sus privilegios, y que reclaman entonces el apoyo de las bases populares para que pongan de manifiesto la necesidad de que este país se maneje de manera distinta a como ha sido manejado hasta ahora? ¿Es que no nos damos cuenta de que todos debemos aportar nuestro grano de arena a la solución de los graves problemas que padece el país? ¿Acaso no pensamos que hay también oportunidades en que debemos recordar actitudes anteriores para formarnos una impresión cabal del problema?

Yo veo los numerosos afiches de la CGT reclamando adhesiones al plan de lucha, y recuerdo otros afiches de otras épocas, con las firmas de algunos de esos dirigentes, que re-

clamaban también que se sacara el petróleo aunque sea dando concesiones, a través de la llamada CGT auténtica.

Aquí existe una voluntad de salir, y el radicalismo está convencido de que vamos a salir. Somos optimistas, extraordinariamente optimistas, porque sabemos que contamos con un pueblo maravilloso, sin graves problemas, porque todos han de ser superados; y sabemos que contamos con una fuerza moral en la que estamos acompañados por la mayoría de los partidos políticos argentinos. Es claro que contra esto se puede tratar de luchar de muy diversas maneras, incluso a través de la táctica de la bancada de la UCRI frentista, que para no demostrar claramente su oposición al sistema del salario vital móvil...

Sr. Ferreira. — Está equivocado, señor diputado.

Sr. Alfonsín. — ...no hace otra cosa que buscar, por el atajo de un ataque despiadado, de encubrir la verdad de sus ciertas intenciones.

Sr. Ferreira. — Aclare cuáles son las intenciones a que alude.

Sr. Alfonsín. — Las intenciones y todo, señor diputado. Lo que se traduce de la actitud de los señores diputados, no solamente en el tratamiento del asunto que consideramos, sino a través de todos los debates de la Cámara, es la intención de obstruir y perturbar la obra de gobierno.

Sr. Ferreira. — Nunca hemos obstruido; hemos dado nuestra opinión.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Del Pero). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Alfonsín.

Sr. Alfonsín. — También en el día de ayer se hizo referencia, por el señor diputado Sandler, a la inconveniencia de producir, juntamente con el aumento de los salarios, resoluciones, como la que se incluye entre las cláusulas transitorias, que permitan la congelación del precio de determinados artículos.

Quiero señalar, muy ligeramente, porque observe que está por expirar el término que me corresponde para hacer uso de la palabra, que inclusive durante el gobierno del general Aramburu, en el año 1956 ó 1957, se produjo un aumento de sueldos y por una resolución número 191 de la Secretaría de Comercio se estableció para todos los artículos, la congelación de los precios, el margen de utilidades y los precios máximos.

Dijo también el señor diputado Sandler que el señor ministro de Economía había sostenido que los salarios integran más o menos un veinte por ciento del costo de los productos. No es exacto. Lo que el señor ministro de Economía sostuvo es que el precio de venta al público de los productos incluye un veinte por ciento, más o menos, del valor agregado en concepto

de salarios; y considerando que el plan propuesto significa más o menos un 10 por ciento, ese traslado al precio de venta al público reportará un aumento del dos por ciento.

Sostuvo también el señor diputado Sandler que se hizo una emisión, a raíz de la modificación de la carta orgánica del Banco Central, de 75 mil millones de pesos. No es exacto tampoco; son solamente 40 mil millones de pesos.

El señor diputado Sandler se pronunció ayer en la Cámara de manera que considero —con toda cordialidad— exagerada. Llegó a sostener que el señor ministro de Economía debía despertarse todos los días para hacer una economía de 500 millones en el presupuesto, lo que al cabo de un año equivaldrá a unos 180 mil millones.

Con respecto al aumento de los salarios quiero decir que ha existido una incrementación real de los mismos, porque si bien es cierto que el costo de vida aumentó desde octubre hasta ahora en un 25 por ciento, esos aumentos están contemplados en la mayor proporción, en los distintos convenios de manera que los trabajadores han aumentado ligeramente su capacidad adquisitiva.

Por otra parte, también es cierto que la desocupación ha disminuido en un 14,8 por ciento y que con respecto al pago de los servicios del capital, después de muchos años, se han conseguido pagar importantes cantidades, y se han logrado aumentar las reservas del Banco Central.

Para concluir con mi disertación, simplemente quiero decir, con relación a la Dirección de Abastecimiento, que si bien es cierto no se ha realizado una tarea para afuera que demuestre al público la actividad desarrollada —como los señores diputados habrán podido observar— también es evidente que nos encontrábamos con oficinas desmanteladas y, por otra parte, en el sector privado se había perdido la costumbre del control. Es decir, que la dificultad era doble: no solamente en el sector público sino también en el sector privado, que no comprendía la serie de medidas que se deben tomar. Pero, a pesar de ello, se realizaron estudios sobre los costos de muchos productos como, por ejemplo, el pescado, el azúcar y la harina; se han fijado precios para el pan y la leche; se están haciendo estudios de mercado y se están realizando también estudios definitivos con respecto a la prohibición de la intermediación económica.

Termino sosteniendo que la ley que estamos considerando de ninguna manera ha de traer un perjuicio económico, sino que al beneficio social que, sin duda, va a aportar, nosotros con esta sanción estamos incorporando, además, un real beneficio económico que se traducirá en un aumento de la capacidad adquisitiva del pueblo argentino. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Del Pero). -- Tiene la palabra el señor diputado Luco.

Sr. Luco. — Voy a ser muy breve, señor presidente, porque el señor diputado Serú García ha fijado en el día de ayer con toda claridad, extensión y profundidad, la posición del bloque justicialista, que ha decidido apoyar en general el dictamen de la mayoría con algunas disidencias parciales, y porque así mismo, en feliz coincidencia con diputados de otros bloques, hemos elaborado un dictamen conjunto de disidencias parciales. El señor diputado Martínez Raymonda ha fundamentado con absoluta claridad las razones que nos han llevado al apoyo en general y a la disensión en particular respecto de algunos artículos.

Es de celebrar que, salvo algunas escasas excepciones, el cuerpo haya coincidido en la necesidad de sancionar esta ley. Se tornaba ya prácticamente imprescindible dictar la ley para nuestros postergados hombres de trabajo, y su necesidad estaba evidenciada para todo aquel que poseyera una mínima sensibilidad social. En este sentido la Cámara ha reaccionado como correspondía, al margen de algunas diferencias doctrinarias y a veces de redacción, sancionando rápidamente una ley de salario vital mínimo y móvil, que aunque es de emergencia puede variar este proceso de destrucción de los organismos de los trabajadores y del pueblo trabajador en general.

Los justicialistas adherimos a este proyecto, como dijo el señor diputado Serú García, con absoluta comodidad espiritual. En primer lugar, porque esta preocupación, este tópico concreto, fue llevado a cabo por el gobierno en la época en que el justicialismo dirigió los destinos de la Nación, y ello a través de la ley y de diversos decretos. En segundo término, porque este pequeño bloque justicialista, en cuanto se incorporó, presentó un proyecto bastante similar al elevado originalmente por la CGT.

Adherimos no por presión de organismos de uno o de otro carácter, sino por convencimientos anteriores inclusive a esta titulada presión del plan de lucha. Estábamos y seguimos convencidos de que al margen de los planes de reactivación económica era y es imprescindible para el país una serie de medidas de emergencia, porque el pueblo en sus angustias no puede esperar los grandes planes de fondo.

Ni el materialismo económico, ni la aceptación de la teoría del llamado salario político, ni la teoría liberal que consideraba al salario como un precio, lo que rechazamos categóricamente, ni el materialismo jurídico, ni ninguna clase de presiones nos lleva a aceptar este dictamen, sino la evidente necesidad de sacar al pueblo del pozo en que vive a raíz de los magros sueldos que percibe la clase trabajadora.

No voy a dar cifras porque son harto conocidas por todos los miembros del cuerpo, y las tenemos permanentemente en la vida real como expresión contundente de la situación en que

viven los trabajadores asalariados de cualquier clase. De manera que la necesidad del salario de emergencia vital mínimo es evidente.

Es de felicitarse por la coincidencia general de este cuerpo en sancionar rápidamente un instrumento que el pueblo pide y necesita.

Es singular —diría que es tradicional y reafirma nuestra convicción de que estamos en el acierto— la reacción desmedida de algunas empresas y centrales empresarias que permanentemente obstruyen la labor legislativa que aquí queremos hacer serenamente. No vale la pena que las nombre porque la prensa, que se hace eco de sus declaraciones, ha difundido permanentemente sus ataques burdos a todo proyecto legislativo que beneficie al pueblo.

Pero en materia de olfato político eso indica que la reacción de esos sectores así como también de organizaciones ficticias, no ya de empresarios sino de especuladores, que se mueven contra la inquietud que ha originado una coincidencia total del pueblo, demuestra que estamos en el acierto. De modo que tenemos una absoluta tranquilidad de conciencia.

Se ha hablado bastante en el recinto, de la CGT. Reitero lo que dijo ayer el señor diputado Serú García; la CGT ha obrado en cuanto a este tópico de salario mínimo vital y móvil con extraordinaria moderación y seriedad; ha provocado reuniones de empresarios, políticos y legisladores, ha hecho estudios, ha manejado estadísticas oficiales —en detrimento a veces de su propia estadística, que la tiene muy bien organizada—, y ha sido moderada en sus peticiones, adecuándolas a la realidad del país, aun cuando sus propias estadísticas demostraban la necesidad de un sueldo vital bastante mayor.

El actual plan de lucha, que alarma a algunos sectores reaccionarios, especuladores y retardatarios, y cuya reacción no me interesa, no debe en cambio alarmar a algunos hombres que los veo militar en las filas del pueblo, aun cuando pertenecen a otros partidos. Ese plan, exagerado o no en su realización, no es más que la concreción de la angustia que el trabajador siente en estos momentos.

Ese plan de lucha no lo manejan determinados dirigentes gremiales, sino la masa del pueblo, que no puede ser movida por intereses mezquinos, y que actúa apremiada por la necesidad y la angustia. Más debe alarmarnos la reacción de los sectores empresarios interesados que han obstaculizado la labor constitucional y la que estamos cumpliendo en este recinto.

El señor diputado Pena dijo equivocadamente que el plan de lucha está empujado sólo por un sector de la CGT y con intención política, lo que no es exacto, porque el plan de lucha, aunque con distintas modalidades en su aplicación, es llevado a cabo por los dos sectores más ponderables de las organizaciones de los trabajadores: los independientes y las 62 organizaciones. Esos núcleos son los que han constituido la central de trabajadores con responsabilidad, dando

un ejemplo de lo que puede hacerse si se superan las diferencias y se coincide en los grandes planteos, dando un ejemplo al mundo político, financiero, empresario y militar, porque fue a la unidad para una central única antes de que este clima de cordialidad que se advierte hoy en el Parlamento pudiera concretarse.

Sr. Pugliese. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Luco. — Sí, señor diputado.

Sr. Pugliese. — Lo que el señor diputado Pena ha querido significar es que encontrándose en marcha la concreción de todos los pedidos de la CGT, por vía legislativa o por vía del Poder Ejecutivo, la realización y ejecución de este plan de lucha ya no podía ejercer presión de ninguna naturaleza, porque no podía hacerse ya más de lo que se estaba realizando en este sentido. Es decir, que la ejecución de este plan, con la oposición de otros sectores de la CGT, dejaba su ejecución sí a uno de los sectores que integran ese organismo laboral.

Sr. Luco. — Aunque ése fuera el concepto, no puede negarse que en los reclamos de la CGT y en los métodos de lucha que utiliza actualmente o los que puede utilizar en el futuro, hay una evidente muestra del deseo de los trabajadores argentinos, que nosotros compartimos, de pesar en la escena política argentina como clase, en igualdad de posibilidades a las de otros sectores que con menor decisión y valentía pesan en el proceso político, como lo hacen los sectores de la reacción.

Los justicialistas estamos convencidos de que en este país, en el que tanto se habla del cambio de las estructuras, la tarea tendrá que realizarse con realismo y valentía, y que la participación de la clase obrera en el poder es indispensable para efectuar este cambio.

Este es uno de los aspectos evidentes del deseo de la clase trabajadora de pesar sobre el gobierno, para marcar ante el resto del mundo que los sectores reaccionarios no van a librar solos esta batalla y que de ninguna manera la van a ganar con los medios acostumbrados. La CGT va a utilizar todos los recursos que sean necesarios para que el pueblo pese en los destinos de la República, y ese sentido de la lucha de la CGT es plenamente compartido por nosotros, que lo consideramos patriótico y responsable.

Muchos sectores, para disminuir la representatividad de la CGT y de los sectores de los 62 gremios y de los independientes, se refieren siempre a otro organismo que surge de vez en cuando, generalmente en contra de las peticiones de millones de trabajadores, y que parece ser el único órgano sindical respetable para tales sectores, y que se llama curiosa y graciosamente de las 32 organizaciones libres, mayoritarias y democráticas. Creo que ése es el título que se dan. Quiero aclarar, por si alguno de los señores diputados tiene la más pequeña duda al respecto, que las pomposamente denominadas 32 or-

ganizaciones son, en realidad, tres: los artistas de variedades, los despachantes de Aduana y los empleados de la industria forestal de Santiago del Estero.

Personalmente no tengo problemas con ninguno de ellos, pero no cabe duda que se trata de gremios pequeños, de muy corto número de afiliados. Una estimación provisional podría fijar dicho número en unos 4.500 trabajadores. Sin embargo, cierta prensa, los empresarios y los sectores reaccionarios se refieren con permanente respeto a ese minúsculo organismo perturbador de la vida gremial argentina.

Establecido entonces en general el sentido de nuestro apoyo al proyecto en discusión, así como el sentido histórico y profundo que tienen las luchas que desarrolla la clase trabajadora, y con la tranquilidad de la posición que ostenta nuestro bloque y la alegría de ver coincidencia en la rápida sanción y serena discusión de una ley de esta importancia, quiero simplemente referirme —muy de paso, por lo que desde ya pido que se inserten en el Diario de Sesiones— a las disidencias parciales que hemos elaborado. Deseo que pasen a integrar el cuerpo de lo que ha quedado dicho en esta sesión, así como explicar el porqué de algunas de nuestras disidencias.

Una de ellas se relaciona con el problema de las quitas zonales, que subsisten en el dictamen conjunto de la mayoría. Cinco sectores políticos de diversa orientación en esta Cámara hemos coincidido en la presente disidencia, porque creemos que deben desaparecer las quitas zonales.

La diferencia en los salarios según las zonas, en primer lugar, y desde un punto de vista estrictamente constitucional, en segundo lugar, viola el principio de igualdad ante la ley que establece el artículo 16 de la Constitución Nacional. Pero si así no fuera, y para no referirme a lo estrictamente jurídico, dicha diferencia crea una evidente desigualdad de hecho. Creemos, por otra parte, que no está basada en el análisis adecuado de la relación actual entre precios y salarios. Si bien es cierto que en algunos lugares del interior puede existir todavía un costo de vida ligeramente menor al que se soporta en la Capital Federal —aunque no sé si ello ocurre en estos momentos, porque en el desenfreno de los últimos tiempos nadie puede conocer los precios con que amanecerán los artículos principales al día siguiente—, hay otros lugares de la República, y casi me animaría a decir que son la generalidad, donde el costo de la vida es mayor que aquí. Es por eso que nosotros hemos eliminado las quitas zonales en el sentido de reducción del salario, pero en cambio dejamos subsistente la posibilidad, después de que se efectúen concienzudos estudios estadísticos a través del consejo que se crea por la ley, de que se establezcan aumentos sobre el salario mínimo.

Después de lo que he dicho antes sobre la representatividad de las organizaciones obreras,

no es de extrañar que una de nuestras disidencias se refiera a que deseamos la mención exacta y correcta de la CGT cuando se habla de los miembros que deben integrar el Consejo Nacional de Salarios en representación de las entidades de los trabajadores. ¿Qué necesidad hay de hablar de las presuntas entidades representativas de los trabajadores cuando el gobierno y todo el mundo conoce y reconoce la existencia, personería jurídica y volumen de la CGT? Por eso creemos que se debe hablar clara, concreta y rotundamente de la CGT con referencia a la integración del consejo por representantes de los trabajadores.

Algunas otras disidencias son de tipo aclaratorio, porque, como algunos tenemos una vieja experiencia en ayudar a los trabajadores desde el punto de vista jurídico en sus luchas, queremos que los conceptos queden aclarados al máximo en la ley para que algunos de esos patronos discolos, que siempre existen, o empresarios con abogados bien pagos, no tengan la menor posibilidad de eludir las disposiciones legales.

Sr. Peña y Lillo. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Luco. — ¡Cómo no!

Sr. Peña y Lillo. — Mi experiencia profesional me ha hecho conocer que los abogados bien pagados y con exceso son muchas veces los que defienden a los obreros, porque lo hacen sobre la base de un convenio por el cual les sacan el 50 por ciento de lo que obtienen.

Sr. Luco. — Puede ser; de ninguna manera lo niego ni quiero suponer que no haya comerciantes en todos los sectores. Pero no coincido con el señor diputado y me parece difícil que algún asesor de gremios haya podido conquistar en poco tiempo la sólida fortuna de avezados hombres del derecho patronal, como el doctor Busso o alguien como él.

Sr. Peña y Lillo. — No es especialista del derecho laboral.

Sr. Luco. — Eso es lo más grave. Por eso dije «derecho patronal».

Una de las aclaraciones que iría como artículo nuevo, que nosotros hemos proyectado como 17 bis, es la disposición según la cual la presente ley no afectará los mejores derechos que tuvieran los trabajadores por aplicación de otras normas legales o convencionales. Esta disposición tiene el objeto de dejar a salvo la situación de algunos gremios, como el de los viajantes, que podrían no estar comprendidos en el artículo 3º, que habla de no computarse los comprobantes con factura. Hay distintas modalidades en diversos gremios sobre forma de pago que no quedarían contempladas, y a eso tiende nuestra proposición.

Otra importante aclaración es la que determina que el salario mínimo de emergencia que estamos votando de ninguna manera debe servir para subvertir el orden que establece la ley 14.250, que reglamenta la tramitación de los con-

venios colectivos, a efectos de que no haya por parte de los patronos la posible argucia de que se confundan las categorías. De lo contrario, podría ocurrir de que elevado el sueldo del peón, por ejemplo, al mínimo de 14 mil o 16 mil pesos, según la decisión que se adopte en el momento de la votación, podría confundirse con la categoría de un medio oficial u otra superior.

La intención de la ley es que este mínimo sirva de motor, de abajo hacia arriba, para el reajuste automático de todas las categorías y remuneraciones en cada uno de los convenios que tienen los trabajadores según su categoría o especialidad. En la discusión en particular lo dejaremos perfectamente aclarado para que no haya lugar a maniobras de cualquier tipo.

En cuanto al monto, que es un poco el eje alrededor del cual se han producido las disidencias parciales, nosotros hemos llegado al establecimiento de 11.200 pesos para el obrero soltero y de 16.000 pesos para el núcleo familiar, sobre la base de un estudio que creemos realista. Asignamos aquel monto al obrero soltero, como salario básico directo, sin consideración de asignaciones familiares, porque es paralelo o ligeramente superior al del mejor convenio logrado, según nuestros informes al 30 de abril. Como estamos hablando de elevar salarios, nos parece atinado que el salario básico esté por lo menos por encima de aquel del mejor convenio, porque sabemos que ni aun el mejor convenio logrado en los últimos meses responde a las necesidades reales actuales de los trabajadores. Por aplicación del sistema novedoso del 30 y del 70 por ciento se llega al monto de 16.000 pesos para el grupo familiar, que si se quiere es exiguo puesto que, según los estudios de la CGT, debió alcanzar en diciembre de 1963 a un mínimo de 18.300 pesos.

Por último, para no insistir en cuestiones de tipo particular que serán planteadas en su momento, quiero dejar expresamente sentado que la serenidad que hemos podido observar en general en este debate y la coincidencia de la mayoría de los sectores indican que el país puede andar. Pero hago la reflexión nuevamente, que por otra parte incluimos en un breve articulado, que no sé qué suerte correrá, a los miembros del partido que colabora con el Poder Ejecutivo acerca de la urgente necesidad del plan de reactivación económica, con el aporte de todos los sectores, para que el país marche adelante.

Esto que sancionamos hoy, ineludible e imprescindible, es de nuevo un paliativo. Lo tremendamente necesario es el famoso cambio de la estructura actual, del que hablamos demasiado pero todavía no concretamos. Es con el trastrueque de una economía liberal, caduca, deshumanizada, que ha perdido vigencia histórica en el país y en el mundo, y con la búsqueda de una democracia social, de una economía, de una justicia social auténtica, el único camino por el cual el pueblo podrá reencontrar su destino. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Vedia.

Sr. Vedia. — Señor presidente: apenas diez minutos que le restan a nuestro bloque, conforme a lo convenido, me permiten disponer de un tiempo mínimo, que me es vital y me exige movilidad en la expresión de las ideas, para poder concretar en breves palabras las razones que fundamentan nuestro voto por el dictamen de la mayoría.

Nosotros tenemos conciencia plena de las dificultades que este problema plantea en cuanto a la necesidad de determinar con precisión el nivel de salarios que corresponde abonar al sector trabajador. Tenemos conciencia plena de que no están realizados ni siquiera los estudios sobre la estructura del salario en la Argentina y ni aun tampoco, por consiguiente, las incidencias reales que medidas de esta naturaleza pueden producir en la economía general. Pero también tenemos conciencia plena de la emergencia vital que existe en atender a la vez a razones de justicia que a nuestro juicio son de buena técnica económica.

Digo a razones de justicia, y me adelanto a expresar que me desvinculo de toda intención de especulación demagógica sobre este problema. Pero como expresión de la voluntad popular no podemos nosotros en modo alguno sustraernos a la perentoria necesidad de atender a la exigencia de levantar el nivel adquisitivo de nuestro pueblo.

Es público y notorio el deterioro producido en el nivel adquisitivo de los sectores populares del país. Bastaría recordar que en el año 1955 el sector del trabajo participaba en la renta nacional con el 55, casi el 57 por ciento; hoy esa participación se ha reducido al 45 por ciento, lo que importa lo mismo que señalar la transferencia de ingentes cantidades de dinero al sector del capital en desmedro del trabajo. Y, naturalmente, esto se ha traducido en una disminución del nivel de vida y del poder adquisitivo, con las naturales consecuencias en la evolución de la economía nacional.

Se nos hizo creer o se nos quiso hacer creer que la estabilización financiera que se pregona iba a producir un saneamiento de la economía nacional, posibilitando un desarrollo económico armónico. La verdad es que esa contracción financiera significó deprimir el mercado de consumo nacional, sumergir en el infraconsumo a vastos sectores populares y sustraer de la actividad productiva y de la capacidad de adquisición a numerosos habitantes.

La consecuencia está a la vista. Reducida la capacidad de consumo y el nivel adquisitivo de la población, el sector empresario sintió rápidamente el impacto, y tuvo que reducir su producción y echar gente a la calle. En consecuencia fueron menores los recursos que el fisco podía recaudar de la actividad productiva, y la con-

clusión final de este proceso está a la vista: paralización industrial, desesperación en vastos sectores populares del país que viven hasta hoy sin esperanza y sin fe y que han venido clamando a través de la entidad representativa de los trabajadores argentinos, que es la Confederación General del Trabajo, por la atención urgente de estas vitales necesidades.

¿Y por qué los trabajadores del país reclaman la mejora en el nivel de sus salarios, con aparente despreocupación por las causas mismas que han generado la situación creada? Porque la economía del trabajador es su salario. Ausente de toda participación en las grandes decisiones económicas y financieras del país, el trabajador no tiene otra posibilidad que expresarse a través del reclamo por mejores niveles de salarios.

Las razones fundamentales por las cuales nosotros apoyamos este proyecto son, como digo, de justicia social y de técnica económica. De justicia social porque no puede haber hombre o mujer que trabaje en el país, que no perciba el mínimo indispensable para una buena vida humana, para una vida de decoro, para que tenga asegurada la subsistencia elemental de sí mismo y de su familia. Y es también una razón de técnica económica, porque está demostrado que en ningún país se ha dado expansión o desarrollo sin algún margen de inflación. Se traen los ejemplos que se quieren traer de otros países, pero se ovida que los Estados Unidos se levantaron con el *New Deal*, que no fue otra cosa que la expansión provocada por el aumento del nivel adquisitivo de la población; que la Alemania de Erhard promovió igualmente como requisito indispensable y primero el levantamiento del nivel adquisitivo de la población; que la Italia de De Gasperi igualmente atacó como causa profunda el nivel salarial de los sectores populares, porque es fácilmente inteligible comprender que el levantamiento del poder adquisitivo de la población obra, con su capacidad de adquisición y de consumo, como factor generador de la actividad industrial y del desarrollo económico, porque en la medida en que el pueblo pueda comprar, podrá la empresa vender, y en la medida en que la empresa pueda vender podrá atender las obligaciones que tiene con el fisco, y la actividad económica toda recobrará su ritmo normal.

De todos modos, señor presidente, siempre será preferible un índice de inflación con poder adquisitivo y con medios de pago que el absurdo actual, significado por una inflación creciente sin liquidez, porque la inflación existe ya, con la diferencia de que hoy es una inflación de costos, producida por la falta de poder adquisitivo de la población, que lógicamente eleva el costo por unidad de producción. De modo tal que razones de justicia individual, razones de justicia social en lo macroeconómico,

que imponen producir una transferencia de la renta nacional al sector del trabajo, y razones técnico-económicas, que aconsejan esta medida como un impulso reactivador de la actividad industrial y de la economía general, fundamentan nuestra posición de apoyo al dictamen de la mayoría.

Pero quiero agregar en breves minutos —sé que mi tiempo está vencido— que esta medida que vamos a poner en ejecución, y que es una eficacísima medida de reactivación económica, a la vez que de justicia humana, puede significar paradójicamente un terrible descalabro económico y una burla y una estafa a los sectores populares, en la medida en que no vaya acompañada de otras decisiones jurídicas, económicas y financieras; en definitiva, en la medida en que no se encuadre en un plan económico general que urge, que debería estar ya en marcha, porque si bien puede esperarse la sanción del programa integral que el gobierno ha anunciado, no puede demorarse, en cambio, la adopción de medidas que establezcan rígidos controles sobre el crédito, sobre las inversiones y sobre la orientación del consumo.

Si de la reactivación industrial van a surgir nuevas fábricas de heladeras o de televisores, habremos producido nuevamente un gravísimo deterioro en la economía nacional. Si el crédito bancario sigue siendo como hasta ahora, como en la más cruda época liberal, prestado, sin orientación y sin sentido a comisionistas de bolsa, a sociedades financieras, pero nunca a la actividad eminentemente productiva, estaremos echando dinero en un saco roto y burlando las esperanzas del pueblo.

Estas son realidades fácilmente comprobables. El Banco Central de la República Argentina ha contribuido a inyectar considerables cantidades de dinero a la circulación; y los bancos todos del país, que cuentan hoy con grandes disponibilidades, están prestando sin control alguno del Banco Central y sin que los fondos inyectados a la actividad económica rindan en medida suficiente porque, como he dicho, se ha procedido con una mentalidad liberal, insensible y suicida. Así, industrias vitales para el país, como la metalúrgica, por ejemplo, están esperando todavía el necesario crédito bancario que le permita la suficiente expansión.

Me importa poner especial énfasis en esto que digo para alertar sobre las consecuencias pavorosas que puede significar la sanción de esta ley, que así como podrá ser buena si es acompañada por medidas complementarias eficaces, podrá ser fatídica si no se toma conciencia plena de la necesidad de una enérgica conducción por parte del Estado de todo el proceso económico, que debe llegar desde el control y congelación de las ganancias de las empresas hasta la aplicación eficaz de la ley de abastecimiento, que no termina de aplicar con decisión el Poder

Ejecutivo, el estudio y determinación de los costos y la congelación de los precios de los artículos de primera necesidad.

Por último, quiero decir que la sanción de esta ley no nos hará abandonar el campo de la estructura liberal y capitalista, lo que es el viejo régimen que el país viene padeciendo. Seguiremos en la vieja economía del salario, que no es en sí mismo injusto, conforme a la sana y buena doctrina cristiana, pero que debe ser superado por formas nuevas de asociación al impulso del proceso de renovación marcado por la creciente participación del sector del trabajo en la responsabilidad de la producción. Porque esa comunidad humana, que es la empresa, debe estar sujeta a reformas que sienten sobre bases nuevas el concepto de la propiedad, distinguiendo la propiedad de los bienes de uso de la propiedad de los bienes de producción, como la empresa, la que debe ser socializada para brindar perspectiva efectiva al sector del trabajo.

Digo que todo esto nos espera después de la sanción de esta ley si no queremos seguir arrasando al país en la muerte lenta, en la instancia agónica del régimen liberal, capitalista e individualista, felizmente superado por muchos de los países occidentales que malamente se traen como ejemplo, que debiéramos observarlos en la integridad de sus procesos para comprender de qué manera han conseguido romper los moldes del viejo régimen liberal para sentar las bases de la sociedad nueva, en la que el trabajo es el valor fundamental y primario, donde tiene su título a la participación, en la gestión y propiedad de la empresa, porque, en definitiva, el capital no es sino trabajo acumulado.

Afirmo que con la sanción de esta ley daremos un paso positivo adelante para poner en marcha este país postrado; pero también reitero lo fundamental que significa acompañar esta medida con otras disposiciones que establezcan una rígida conducción de todo el proceso económico, para luego ponernos, todos juntos —con la conciencia plena de que la democracia política morirá si no es integrada con la democracia económica y social—, a la tarea de las grandes reformas que el país urge, a la reforma de la estructura tributaria, a la reforma de la estructura empresarial, para llegar también a través de este Congreso de la Nación, en día no lejano, a la reforma de las estructuras institucionales y jurídicas fundamentales, comenzando por la reforma de la Carta Magna. Si bien ella ha cumplido ya un siglo con éxito y con beneficio, también debemos reconocer que está obrando hoy como chaleco de fuerza de la Nación, y urge también en este campo una modificación sustancial para hacer real la democracia política, la democracia económica y la democracia social. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Arturo Mor Roig.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Tróccoli.

Sr. Tróccoli. — Señor presidente: como en el curso del debate se han desconocido o subalternizado las proyecciones sociales y económicas del salario vital que estamos tratando, quiero referirme a estos dos aspectos de la cuestión.

En primer lugar, vaya la advertencia de que en un sistema económico orientado a la justicia social la directriz general en materia de política económica reside en que el trabajo humano constituye un costo fijo para la comunidad. En todo caso, la economía social está llamada a proveer que todos los miembros de la colectividad alcancen un nivel de vida conforme a la dignidad y a la jerarquización de la persona humana.

Esta simple consideración nos lleva a formular la premisa básica de nuestro pensamiento en el sentido de que el trabajo no es una mercancía que puede estar sujeta al libre juego de la oferta y la demanda, ni diferido al solo interés del sector empresario, de modo que el nivel de vida de los trabajadores dependa o esté determinado por el salario. Por el contrario, bajo el régimen de colaboración de clases, que nos estamos esforzando por instalar en el país, no obstante las interferencias y cargas tendenciosas que tenemos que sobrellevar, el salario debe resultar de la conjugación de los tres órdenes de intereses fundamentales que intervienen en su formación.

Por un lado, el de los trabajadores, que reclaman un salario apto para sufragar un decoroso nivel de vida; por el otro, el de los empresarios, que desean no pagar un salario más allá que el que determina la propia productividad del trabajo; y por último, y decisivamente, el interés general de la comunidad, que está interesada en que los salarios sean tales que permitan la continuación y el desarrollo de la producción, la reducción de los costos y el más completo empleo de los factores productivos. En definitiva, que el tenor de vida de los trabajadores constituya un factor determinante de la elevación del salario y no un elemento determinado, como lo pretenden algunos sectores.

Se ha sostenido también en este debate que la instalación del salario vital y móvil ha de generar un impacto inflacionario de límites insospechables y que ha de deteriorar definitivamente y en profundidad las bases económicas de nuestro desarrollo.

Nosotros hemos afirmado, en oportunidad de debatirse la reforma a la carta orgánica del Banco Central, que a partir del 19 de mayo de 1958 se había operado sin ningún orden de prelación en las inversiones, facilitando el crecimiento de sectores que no interesaban directamente a la productividad; que de esa forma se había operado un equipamiento industrial indiscriminado, sin medir la receptividad ulterior del

mercado y abusando de los canales crediticios externos y a corto plazo.

Advertimos entonces que el mantenimiento de un régimen de importación cada vez más creciente y que no se traducía en un incremento de la productividad global, así como la desconexión entre la política económica con la social, desatarían una violenta contracción económica.

La autoridad monetaria desentonces, en cumplimiento de las directivas que le fueron impartidas por el Fondo Monetario Internacional, operó de conformidad con las «reglas del juego» librecambista, provocando efectos deprimentes sobre los réditos monetarios, con el propósito deliberado de generar un proceso deflacionario; y así se provocó la exasperación del costo del dinero, la reducción de inversiones, que generó desocupación, y la disminución de los réditos reales y de la demanda de bienes.

No obstante, las rigideces en la estructura social y económica del país impidieron la reducción de los costos y del nivel general de los precios, y, por el contrario, coexistieron la inflación de precios simultáneamente con una depresión en los réditos individuales.

La pretensión de mantener la estabilidad de los cambios exteriores a costa de artificios monetarios agravó este proceso acumulativo deprimente, de manera que la devaluación operada por el ministro Pinedo fue una mera consecuencia y no una causa de esta inconducta monetaria.

Al momento de asumir este gobierno nos encontramos con un cuadro de relaciones económico-sociales que pueden sintetizarse en la presencia de una defectuosa distribución funcional del ingreso, en detrimento del factor trabajo, y correlativamente con la existencia de una capacidad ociosa de la estructura productiva, que razonablemente debía engendrar presiones inflacionarias irresistibles, y que, en definitiva, han culminado con un inusitado aumento del nivel general de los precios.

Frente a este cuadro y a las tensiones sociales que razonablemente debían desencadenarse, el gobierno ha instaurado una oportuna política coyuntural, orgánica y equilibrada, para que en grados sucesivos permita ir movilizandolos recursos humanos y materiales disponibles en el país y que actualmente están en gran parte ociosos o mal empleados.

De manera, entonces, que la instauración del salario vital está inserto en la estructura de esa política y tiene la verdadera significación de potenciar la demanda global en perfecta relación con la capacidad productora argentina, de suerte que en definitiva, no solamente no significará un impacto inflacionario, sino que, por el contrario, y en la medida que implique la movilización de recursos ociosos, será un verdadero reactivante económico, que permitirá el restablecimiento de un equilibrio funcional y con ello el clima social y económico necesario para promover el auténtico desarrollo argentino. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Sandler.

Sr. Sandler. — Señor presidente: voy a hacer uso de la palabra en los diez minutos que reglamentariamente me corresponden, para clarificar algunas opiniones que he vertido ayer y que intuyo no han sido claramente expresadas o no han sido bien comprendidas.

A través de todos los discursos que hasta este momento he escuchado, en su mayor parte, se advierte que la reflexión que traje ayer a este recinto con respecto a la economía alemana era acertada. Quiero aclarar que esa reflexión sobre este problema económico de una nación determinada no se hizo exclusivamente en razón de haber observado en forma superficial el aspecto positivo, vale decir, los éxitos que ese tipo de economía pueda haber producido.

Lo que más me interesaba destacar del llamado milagro alemán no era precisamente la época del año 1956 en adelante, sino la época del año 1948; vale decir, cuando se estaba gestando ese cambio económico. Cuando escucho en esta Cámara discursos como los que se pronunciaron ayer y hoy, tengo que decir que no son nuevos para mí. No los he escuchado antes de ahora; pero sí los he leído.

En estos breves diez minutos que me corresponden me permitiré molestar la atención de los señores diputados con la lectura de algunos recortes que he traído precisamente para demostrar esta afirmación.

Tengo aquí, por ejemplo, un fragmento con las expresiones del doctor Kreyssig, socialista alemán, y, desde luego, opuesto a las ideas económicas de la democracia cristiana alemana. Decía el 17 de junio de 1948 este miembro del socialismo alemán al ministro de Hacienda de aquel entonces: «Desde hace muchos, muchos años, no tenemos una economía normal, y hemos de ver que la reforma monetaria no realizará ningún milagro —esto lo decía ante la pretensión de Erhard de lograr la estabilidad monetaria—; la reforma monetaria no nos traerá ningún milagro en lo que se refiere a la reactivación normal de la economía y la producción... Los desheredados y desposeídos preguntarán por qué no se practica una política justa, o sea una política de control, a fin de que en los próximos meses tengan las gentes la producción que han venido elaborando desde 1945 —hablaba en 1948— sin ningún beneficio, sin conseguir apenas fruto alguno de su trabajo...

»Lo que aquí se abre paso es el deseo de los empresarios alemanes de hacer pasar al pueblo alemán por el baño de acero de los precios libres. Todo esto es absurdo y llevará a la catástrofe. Esto no puede ser.»

Esto era lo que decía el socialista alemán en aquella época...

Sr. Gualco. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Sandler. — Es tan breve el tiempo de que dispongo que no puedo permitírsela ahora, pero sí en el tratamiento en particular de la ley.

Sr. Gualco. — No se asuste, señor diputado.

Sr. Sandler. — No es por eso; si la Presidencia me concede tiempo, tendré mucho gusto en permitirle la interrupción al señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Reglamentariamente, sólo le corresponden al señor diputado diez minutos para su exposición.

Sr. Sandler. — Prosigo, entonces, señor presidente.

El diputado socialista alemán Schoettle, el 17 de junio de 1948, dijo también, con respecto a la política que ponía en marcha el gobierno —que era antidirigista, anticontrolista, antifijación de cualquier tipo de topes—; expresó, como digo, dirigiéndose al ministro de Hacienda: «Usted asigna a una gran parte de nuestra población un papel que está por debajo, muy por debajo, del mínimo necesario para vivir. De que usted creará en sus teorías económicas hasta el final, estoy seguro; pero también estoy seguro de que lo llevarán al absurdo.»

Hubo también otras manifestaciones en aquella oportunidad, que no puedo leer ahora por falta de tiempo. Pero lo curioso es que en el año 1959, once años después de las expresiones que he leído, el socialismo alemán declara que la libre elección del consumo y la libre elección del puesto de trabajo son decisivas; que la libre competencia y la libre iniciativa del empresario son importantes elementos de la política social demócrata —que en Alemania representa el socialismo—; que la economía forzada y totalitaria mata a la libertad. Por eso, el Partido Social Demócrata proclama el mercado libre donde quiera que impere la libre competencia.

Todo esto, que es el programa actual del socialismo alemán que tengo sobre mi banca, está también en la plataforma del socialismo austriaco y del socialismo belga.

Esta evolución que he señalado es la que a mí me interesa destacar. En aquel entonces, en 1948, se estaba produciendo un debate del mismo tenor que el aquí desarrollado. Se sostenía la necesidad de una justicia distributiva y se confiaba en que la emisión de moneda era la solución. Prosperó la tesis contraria, por suerte para Alemania, y de esa manera el país se recuperó.

Pero con nosotros puede ocurrir lo inverso. Al tenor de los discursos de la mayoría, con la única oposición de UDELPA, veo que va a prosperar la tesis perniciosa. El ejemplo alemán no es único; puedo dar dos o tres más. Ejemplo del desastre es el caso del Brasil, y parecería que los señores diputados están eligiendo el camino de este país, aunque los diputados brasileños fueron más sensibles y no se limitaron en dar un 10 o un 20 por ciento de aumento, sino que lo hicieron de 100 por ciento, confiando también en que el aumento no sería inflacionario y con el empleo de las detonantes palabras de siempre: si se promueve la producción, si se alienta

el crédito, si se moviliza la economía, no va a haber inflación, lo cual es un peregrina idea, señores diputados, se lanzó a la nación hermana a una situación catastrófica.

No se advierte que lo que se da con una mano se quita con la otra, que cuando se promueve la inflación se frena la economía y que todo lo que se dice para promoverla queda exclusivamente en palabras. Esto lo interpretó tan bien el socialismo alemán, que es la izquierda del pensamiento político de aquel país, que hizo fundamento de su programa la estabilidad monetaria y el mercado libre.

Para completar el panorama puedo ofrecer también los ejemplos de Francia y de Australia. No sé si los señores diputados saben que en esos países se adoptaron medidas de estabilización monetaria eliminando leyes del tipo de la que este Parlamento piensa imponer.

En Australia el salario vital y móvil rigió desde 1921 hasta 1957, en que advirtieron que deterioraba la economía perjudicando al trabajador y junto con él a los consumidores. Por esta razón los australianos, que no viven tan rezagados en experiencias mundiales, procedieron a derogar esa ley. Y así también lo hicieron los franceses.

Me pregunto, señores diputados, si cuando hago estas reflexiones del derecho o de la economía comparados no debemos abrir los ojos, conocer estas cosas y reflexionar sobre ellas. Están viviendo en un mundo idílico. He escuchado a los señores diputados de la mayoría con el mayor respeto, pero, francamente, creo que no tienen puestos los pies sobre la tierra.

Aquí van a ocurrir cosas tremendas. No está más en el Brasil quien promovió el aumento del 100 por ciento. Quiera Dios que no nos ocurra a nosotros lo mismo. Mantengamos la legalidad, pero no la legalidad en palabras, sino en la conducción social, en el ordenamiento económico y social, que es lo básico y lo primordial.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Muñiz.

Sr. Muñiz. — He pedido la palabra para rectificar algunas de las afirmaciones del diputado Sandler, y aclarar otras del mismo señor diputado, dichas en la reunión de ayer y especialmente en la de esta tarde.

En primer lugar, señalo que el diputado Sandler ha hecho algo que no se debe hacer. Cuando se apela a constancias documentales, el documento que las contiene debe ser leído íntegramente. El diputado Sandler ha leído parcialmente el programa del Partido Socialista alemán. Le afirmo al señor diputado Sandler —lo que puedo comprobar con el mismo documento que él tiene sobre su banca— que el Partido Socialista alemán no ha renunciado a sus grandes postulados económico-sociales, sino que los ha refirmado vigorosamente en oportunidad de sancionar su último programa.

El socialismo alemán sostiene hoy, como lo viene haciendo desde hace más de cien años,

la necesidad de la socialización total de los medios de producción y de cambio. El punto del programa que ha leído el diputado Sandler tiene un carácter circunstancial, de oportunidad histórica, y se refiere solamente a determinadas actividades menores. Tanto es cierta mi afirmación que, como lo dije ayer —y posiblemente no lo registre la versión taquigráfica porque mi interrupción se produjo en un momento en que había un poco de barullo—, el 40 por ciento de la renta alemana tiene su origen en empresas públicas, y si a éstas se le agregan empresas privadas financiadas y controladas por empresas públicas, me atrevo a concluir que más del 50 por ciento de la renta alemana se origina en la empresa pública. Son los casos de Austria y de Francia, para no recordar otros. En este último país —Francia— el 60 por ciento de la renta tiene su origen en las empresas públicas, que son muchas y muy importantes. Francia es el país que nos ofrece el ejemplo de grandes empresas públicas que integran la estructura fundamental de su economía. Acaso para asombro del señor diputado Sandler o de sus asesores o consejeros en esta materia, las empresas nacionalizadas francesas se caracterizan por su eficiencia y alta productividad. Vale decir, que trabajan en mejores condiciones técnico-económicas y ofreciendo superiores condiciones de vida a los obreros y empleados que la empresa privada.

Yo no he entendido muy bien qué nos ha querido demostrar el señor diputado Sandler con el ejemplo alemán. En esto también, en sus referencias a Alemania, ha sido incompleto en la información que proporcionó a la Honorable Cámara. Es exacto que el Partido Socialista alemán no comparte totalmente la obra realizada por los social-cristianos. Hay entre ambos partidos puntos de divergencias fundamentales, aunque también se computan felices coincidencias en aspectos importantes.

Si algo prueba el llamado caso alemán, es justamente lo contrario de lo que el señor diputado Sandler pretende. Después de la guerra se estableció en Alemania algo tanto o más importante que el salario vital, mínimo y móvil: se impuso la coestión obrera, medida que el señor diputado Sandler no se atrevería, estoy seguro, a votar en nuestro Parlamento por responder, en su concepción, a intereses ultra conservadores.

Sr. Sandler. — He presentado...

Sr. Muñiz. — Ahora me escucha, señor diputado, y pido al señor presidente que me haga escuchar.

En Alemania se estableció la coestión obrera porque los industriales llegaron a la conclusión de que sería imposible la reconstrucción alemana de posguerra si no se contaba con la cooperación de los obreros, no solamente en el taller, sino en la dirección de las empresas. El ensayo de coestión obrera fue tan feliz, de resultados tan extraordinarios, que socialistas y cristianos, así como hombres y mujeres de otros partidos,

coincidieron en el juicio de que la tarea de reconstrucción, para algunos milagrosa, pero que de milagro no tuvo nada, fue la consecuencia del duro trabajo de los obreros alemanes y de la inteligencia con que actuaron en la dirección de las empresas. Controlaron y orientaron la marcha de las empresas participando en la dirección de las mismas; fueron parte activa en la estructuración de los planes económicos; en una palabra, cargaron con todas las responsabilidades de la dirección económica y recogieron merecidas recompensas por sus aciertos en la dirección de las empresas alemanas.

Cuando se produjo la rehabilitación alemana, los industriales de aquel país, tan egoístas como los del resto del mundo, sin excluir a los nuestros, pretendieron derogar la ley de coacción, y los obreros, los trabajadores alemanes sin distinción de banderías políticas ni credos confesionales, anunciaron que declararían la huelga general revolucionaria si la ley era derogada. La ley fue mantenida y sigue en vigor.

El diputado Sandler ha olvidado, además, una cosa muy importante: que el llamado milagro alemán se operó fundamentalmente, por la circunstancia que acabo de señalar y, también, porque después de la guerra Alemania no tuvo presupuesto militar.

Como consecuencia de la rendición incondicional, se disolvió el ejército alemán. Si nosotros fuésemos capaces de hacer lo mismo, tenga la seguridad el diputado Sandler que con muchísima facilidad resolveríamos la mayoría de los graves problemas que nos afligen, y tendríamos una economía decisiva para terminar con el déficit de nuestro presupuesto.

Pero hay algo más. El diputado Sandler olvidó que Alemania contó con la presencia de capitales extranjeros, esos capitales que algunos diputados reclaman con tanto empeño para nuestro país como una especie de bendición celestial. A Alemania llegaron los capitales norteamericanos, pero como ningún capital, ni norteamericano ni de ningún otro país, ayuda graciosamente, por espíritu de beneficencia, sino con finalidades de lucro, el capital norteamericano que fue a Alemania ayudó a una pronta reconstrucción, pero se quedó con la parte del león. Las consecuencias de la interesada participación de los grandes capitales norteamericanos en Alemania, consistió en que se quedaron con la casi totalidad de las empresas de alguna significación de aquel país. Por eso, hoy hay empresas alemanas que de tales no tienen más que el nombre. Por ejemplo, la empresa Krupp, que es yanqui-alemana. Y, como inevitable consecuencia, los norteamericanos se metieron en toda la vida económica alemana para someterla a sus designios.

Son éstos algunos de los factores que el señor diputado Sandler ha olvidado y que es necesario recordar.

Pero hay todavía algo más. El milagro alemán está a punto de concluir, precisamente por no

haberse escuchado las soluciones propiciadas por el socialismo, que reclamó cambios estructurales de fondo, señalando llegada la oportunidad de entrar muy hondo en la realidad alemana e iniciar el proceso hacia la completa socialización de los medios de producción y de cambio. En estos momentos la economía alemana enfrenta serias dificultades que no son secuela de los buenos o malos propósitos de quienes dirigen la industria y el gobierno, sino la consecuencia directa de la quiebra del sistema, de una ruptura del equilibrio que ya no encuentra salida dentro de los esquemas del capitalismo.

La luz roja me anuncia que debo concluir. Lo haré pidiendo disculpas al señor presidente por el mal momento que le ocasioné en el día de ayer.

Pero antes debo recoger palabras del señor diputado Sandler pretendiendo atribuir a la bancada socialista argentina supuestas vinculaciones o coincidencias espirituales con el nazismo. Si hacía falta la demostración acabada de que el señor diputado Sandler es quien está precisamente en esa corriente, nos la ha ofrecido con su discurso de ayer y el complemento de hoy. El señor diputado Sandler podrá seguir denostando al socialismo alemán, al austriaco y, de paso, al argentino, pero nosotros comprobamos que en esta jornada histórica del Parlamento, en la que se debate la ley de salario vital mínimo y móvil, el señor diputado ha defendido a los empresarios contra los trabajadores argentinos. Nosotros, en cambio, seguimos fieles a los ideales de nuestro partido. Hoy como siempre estamos con los trabajadores, bregando por la revolución social a la que el señor diputado teme y quiere detener.

Sr. Peña y Lillo. — Consuélese el señor diputado Sandler recordando el fracaso de la República de Weimar, que llevó de la mano...

Sr. Presidente (Mor Roig). — No está en el uso de la palabra el señor diputado.

Sr. Sandler. — Como he sido mencionado, solicito la palabra para una breve aclaración.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Sandler.

Sr. Sandler. — Advierto, en primer lugar, que estoy muy lejos de ser ultraconservador. En segundo lugar, mis vinculaciones con el nazismo han sido exclusivamente de agresión. Siempre he estado contra ese sistema que, como bien señalara el señor diputado Peña y Lillo, fue quizá la consecuencia de la conducción económica alemana en 1923.

Además, quiero señalar que he hecho una cita parcial, porque los señores diputados se darán cuenta que no puedo leer un libro entero en esta reunión. Pero hay citas que no dejan de ser completas a pesar de ser parciales. Esta que tengo sobre mi banca, dice así: «Competencia, toda la posible. Planificación, siempre que sea necesaria.» Y otra más: «Toda concentración de potencia económica, incluso en manos del Estado, implica peligros. El mejor modo de servir

a la colectividad no es una burocracia central, sino la colaboración de todos los interesados con sentido de responsabilidad.»

—Varios señores diputados hablan simultáneamente, y suena la campana.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvase no interrumpir el señor diputado Lejarraga.

Sr. Sandler. — En tercer término, y para finalizar, aclaro que de ningún modo he venido a defender a los empresarios, sino que he venido a defender los intereses del pueblo todo, a ningún sector a costa de otro. He criticado a los empresarios cuando he dicho que conceden aumentos ilegítimos y no se preocupan de racionalizar sus empresas para lograr una mayor producción.

De manera que rectifico de plano las afirmaciones que se han hecho, y para demostrar lo que acabo de aclarar, diré que he presentado un proyecto sobre cogestión de empresas, creando los consejos de empresa a los cuales se refirió el señor diputado Löjeström. Cuán lejos está el señor diputado Muñiz de ver lo que yo estoy viendo. Si hay aquí un ultraconservador, un ultrarretrogrado, es precisamente quien está viviendo con los esquemas de 1900 y de 1918. De lo único que me jacto es de tener la vista buena y de mirar al frente, con espíritu moderno y con ideas de creación.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Gualco.

Sr. Gualco. — En el día de ayer pregunté al señor diputado Sandler si conocía que el ministro Erhard había establecido precios topes para el carbón y el acero, y el señor diputado Sandler me contestó que era para evitar el alza de precios de esos productos. Esa no es la verdad. El motivo por el cual se fijaron los precios topes se debía a que Alemania prosiguió en el cartel internacional europeo del carbón y del acero, que rompió Hitler, y que se reeditó en la posguerra como la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, fijándose en un acuerdo entre varios países cuotas y precios y procurando mantener un nivel de ocupación y de producción adecuados a los intereses europeos.

Debo aclarar que Erhard no estaba asustado por el alza de los precios, sino que fue un acuerdo entre varios países por el cual se fijaron esos precios.

Debido a que frecuentemente se menciona a Alemania Occidental, debemos tener en cuenta al hacer esas citas cuál es la situación de la Argentina con respecto a Alemania. Cuando un país traza un plan de desarrollo o un plan de estabilidad, evidentemente tiene que tener en cuenta su propia estructura. Lamentablemente, señor diputado Sandler, la estructura argentina en 1964 no es la de Alemania.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Señor diputado Gualco: sírvase dirigirse a la Presidencia.

Sr. Gualco. — Digo, señor presidente, que la estructura alemana no es igual a la de la Argentina. La situación argentina es similar a la ale-

mana, pero a la alemana de 1890, lo que importa decir que las soluciones válidas para la Alemania actual no lo son para la Argentina.

Digamos de una vez por todas, ya que se utiliza a Alemania con frecuencia como un ejemplo de estabilización previa a un plan de desarrollo, qué fue la reforma monetaria de 1948, proyectada por el actual primer ministro Erhard. En esa época había en Alemania una gran inflación; funcionaba el mercado negro; desaparecía la mercadería del lugar de venta y se creaba una distorsión total, produciéndose una inflación galopante. En ese momento Erhard tomó la decisión de realizar la reforma monetaria, que consistió en convertir todos los capitales —excepto algunos capitales cuestionados, que quedaron sujetos a una resolución posterior—, las hipotecas, las deudas; todos los valores quedaron reducidos en la proporción de diez a uno, excepto uno que se mantuvo en la proporción de diez a diez: el salario de los trabajadores. Hay que hablar de lo que fue esa reforma. En el momento en que se destruía el capital por vía de la reforma monetaria en Alemania, se daba al trabajo el verdadero valor, se le reconocía un valor de diez a diez, mientras se daba al capital un valor de diez a uno. Esa fue la reforma monetaria en Alemania. Quien desde hace tiempo está hablando en el país sobre estos temas, un señor que fue ministro de Aramburu y después de Frondizi, el ingeniero Alsogaray, encandilado con Erhard, cuando hizo su reforma monetaria, apañado por el Fondo Monetario Internacional, lo primero que hizo fue levantar los precios, los recargos cambiarios y provocar una devaluación monetaria que le costó a la clase trabajadora el 20 por ciento del salario real. Esa fue una reforma contra el pueblo y no fue idéntica a la reforma alemana. Ese fue el disfraz, el ropaje de los fariseos con que buscaron vestirse los seudoeconomistas argentinos. Tenemos que hablar de reformas como tales, para no hacer reformas al revés, usando palabras que no corresponden.

Con referencia a Alemania, a nosotros no nos han caído a carradas los dólares yanquis, como le cayeron a Alemania a través del plan Marshall. Nuestras industrias están dismanteladas. En Alemania también estaban dismanteladas, pero era una Alemania arrasada, donde a la fábrica Bayer —que estaba vinculada con intereses norteamericanos— le caían las bombas alrededor, y las fábricas se mantenían en pie mientras se destruían ciudades enteras. Y esto ocurría porque donde estaban estas fábricas los aviones yanquis seguían de largo.

Es decir que una cosa es hacer un país como queremos que sea el nuestro, levantándose con el propio esfuerzo, porque tenemos capacidad técnica, hombres de trabajo responsables y capitales en condiciones de hacerlo, y otra cosa es esperarlo todo de afuera, que lluevan dólares para traer soluciones iguales a las alemanas a nuestro país.

Se ha mencionado también a Francia. Y este país ha resurgido después de la guerra en base a sus planes, que ha llevado a cabo el Consejo Económico Social. Y ese ente que ha puesto los planes en marcha se ha basado en la estructura de la industria pesada de Francia. En este momento, en Francia, del 60 al 70 por ciento de las industrias siderúrgica, pesada y petrolera —que es totalmente estatal— está en manos del Estado. Si nos tomamos el trabajo de comprobar toda la inversión de ese plan indicativo francés —que no horroriza al neoliberalismo—, nos vamos a encontrar con que ese plan ha destinado en sus dos primeros planes quinquenales prácticamente el 100 por ciento a esas industrias, que en su casi totalidad —repito— están en manos del Estado.

Y termino con Australia. Se ha mencionado también a este país, y al hacerlo no se ha dicho aquí que los controles cambiarios y los controles de la economía que tiene en estos momentos no los tenemos nosotros desde ningún punto de vista. Estos no son conceptos personales ni de manuales de economía; surgen de los planes oficiales del Fondo Monetario Internacional, que tiene divididos a los países en cinco categorías. Y Australia está muy lejos de nosotros en materia de controles de cambio y de moneda. Por eso cuando hablamos de economía libre hay que ver dónde estamos ubicados. Si una institución como el Fondo Monetario Internacional nos pone entre los liberales, en la misma categoría de Alemania y muy lejos de Australia, hay que decirlo. ¿Dónde están, entonces, los controles, dónde está la economía controlada, si Alemania tiene los mismos resortes de control que nosotros?

Esto quería decirlo para romper tabúes, para no usar frases lindas, que crean ilusiones dentro de un Parlamento, sobre cosas que no son reales. Y quería también hablar de la bendita estabilidad monetaria previa al desarrollo, que ha fracasado en todos los países latinoamericanos y en todos los países subdesarrollados en tal forma que no se conoce un solo caso en el mundo de un plan de estabilización del Fondo Monetario Internacional, en la forma en que los proponía ayer el señor diputado Sandler, como solución para nosotros, que haya tenido éxito; y el fracaso del fondo es tan evidente, que el señor Jacobson había recurrido a un sistema sui generis de *stand by* hace unos años, para tratar de que el fondo sirva para algo. Pero a pesar de todo eso, ese sistema tampoco marchaba. Si nos tomamos el trabajo de leer los diarios —no ya las revistas especializadas— en sus crónicas sobre la última reunión del Fondo Monetario Internacional, advertiremos la tremenda preocupación por la inutilidad actual de ese organismo para solucionar los problemas de los países en desarrollo. Tanto así es, que se están proponiendo hoy soluciones que ayer hubieran horrorizado a los más tibios liberales. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Lejarraga.

Sr. Lejarraga. — No sé si decir que he de hacer una aclaración o una precisión.

Cuando me permití interrumpir al señor diputado Sandler —lo que no es muy corriente en mi modalidad personal— era porque él estaba haciendo una cita incompleta y, permítaseme —no hay en esto el menor agravio—, en cierto modo tendenciosa, de un texto del programa del socialismo alemán.

Es sabido que en la marcha del socialismo hacia la socialización de los medios de producción y de cambio, objetivo al que no ha renunciado el socialismo en ninguna parte, no hemos excluido la posibilidad de la existencia, en el complejo económico, de distintos tipos de economía. Puede haber entonces —y hay en verdad— una economía socializada, una economía pública, una economía cooperativa, y también hay un margen de economía privada o economía de mercado, en la que debe jugar la ley de la competencia. En ese programa del socialismo alemán están contemplados estos distintos aspectos de la economía.

Por otra parte es justificado que cuando se habla de estatización el socialismo se pone en guardia, porque una cosa —y acá está mi aclaración— es la estatización, y otra la socialización. Es como si fuéramos a confundir al Estado con la sociedad. Nosotros tenemos nuestras reservas o reparos legítimos por cierto, que no es el caso de puntualizar en este momento, sobre la simple estatización, aunque la admitimos muchas veces como un paso en el que hay que dar satisfacción a necesidades legítimas del orden general o social. Pero nadie puede confundir —y los socialistas no lo han confundido nunca— ese paso a la estatización con el paso definitivo a la socialización, que es un proceso en el que se ahonda en la entraña misma de la sociedad para hacer surgir de ahí los valores, los conceptos y las instituciones que han de modelar una economía socializada.

En la estatización es el Estado el que juega su papel decisivo; en un proceso de socialización, en cambio, son todos los factores de la vida social: los trabajadores, los técnicos, los productores, los consumidores y también el poder público, en su alta representación, controlando y coordinando los diversos factores en función de lo que podríamos denominar el interés general. Y demás está decir que ese proceso de socialización exige un proceso paralelo y concurrente de democratización del Estado y de la sociedad.

Por eso no es posible incurrir en una confusión que a esta altura del desarrollo de la economía y de la política del mundo me parece bastante grosera. Dentro de estos conceptos hemos sostenido, según oportunidad y posibilidades, la estatización de empresas o servicios, sin perjuicio de sustentar, en última instancia, la socialización. Es la propia experiencia del socialismo argentino.

El Partido Socialista Argentino surgió a fines del siglo pasado, y en sus banderas inscribió el principio y objetivo de la socialización. Sin embargo, ¿no han sido siempre, acaso, medidos y calculados hasta ahora sus programas de socialización? Porque las posibilidades de un programa integral de socialización, por la falta de maduración del movimiento obrero, de cultura política del pueblo, de desarrollo de entidades de aliento social, se nos han presentado prematuras y en esto hemos seguido la evolución general de la sociedad. Mientras tanto hemos alentado y sostenido las nacionalizaciones o estatizaciones, y con reservas algunas veces, porque nos hemos encontrado con un Estado poco eficiente, con un Estado burocrático, tratando de dar participación en estas estatizaciones a los factores sociales. De modo que todo ese proceso, en nosotros, se ha ido cumpliendo, repito, gradualmente dentro del progreso social y dentro de las posibilidades de capacitación política y técnica del pueblo y, sobre todo, de la clase trabajadora.

Dejo así expresada una aclaración o precisión que me parece era indispensable y que podría desarrollar más extensamente, pero que no creo corresponda en una simple interrupción.

Sr. Sandler. — Pido la palabra para una breve aclaración.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia advierte al señor diputado que de esa manera dejamos de observar el reglamento.

Sr. Sand'ar. — Es una aclaración muy breve.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se ha tratado de una contraargumentación, y, a juicio de la Presidencia, no ha habido alusión personal.

Sr. Arias. — Solicito que se lea el artículo 169 del reglamento.

Sr. Ferreira. — Perdemos más tiempo, señor presidente. Concédale la palabra al señor diputado Sandler.

Sr. Sandler. — Yo quería decir...

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia exhorta al señor diputado a postergar para alguna mejor oportunidad su aclaración, porque estamos marginando el reglamento.

Sr. Sand'ar. — Así lo haré, señor presidente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Ferreira.

Sr. Ferreira. — Nuestro bloque ha suscrito un dictamen en minoría que la Cámara conoce y que ayer fuera fundado brillantemente por el señor diputado Mársico; pero como se trasunta del curso del debate que no contará con la aprobación de los otros sectores, anuncio, en consecuencia, que en general votaremos el dictamen de la mayoría de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, porque compartimos la idea general de la fijación en estos momentos del salario mínimo vital, pero dejamos perfectamente establecido que en particular sostendremos nuestro propio proyecto, porque él comprende el problema en su doble aspecto esencial: el salarial y el

económico, que son inseparables, y que es lo que omite contemplar el dictamen de la mayoría.

Al fijar esta actitud explícita y definida, demostramos que no son válidos los prejuizamientos desvariados y las apreciaciones antojadizas —quizá motivados por el desasosiego y el temor que la situación en que se debate el gobierno y el país provocan en estos momentos a los señores diputados del bloque oficialista...

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvanse no interrumpir los señores diputados.

Sr. Ferreira. — ...que se han hecho sobre nuestra correcta y diáfana ubicación en este problema que debate la Cámara.

Si sostenemos que a la cuestión salarial debe acompañarla, inexcusablemente y en forma simultánea, la solución económica, es porque somos conscientes y responsables de que la República no podrá soportar la repercusión del aumento de jornales y sueidos si no se reactiva la economía y sanean las finanzas, reconstituyéndolas al nivel apto y suficiente para asimilar las consecuencias que aparejará la medida.

No queremos, señores diputados, que la sola ley de salario mínimo y móvil sea una bomba de tiempo que se coloque en el país —descuento que inconscientemente— para que haga trizas, a pocos meses vista, el orden social y económico y nuestra propia vida democrática.

No queremos que se comprometa el vital concepto de la seguridad nacional con sanciones inmaduras e improvisadas. Yo no sé, señores diputados, y lo digo sin ánimo polémico, si no se advierte en estos instantes que existe en la República un profundo proceso revulsivo y de cambio sustancial.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvanse no interrumpir al orador, señores diputados.

Sr. Ferreira. — No sé si no se advierte que ese proceso no se detiene, sino que sigue su marcha, a pesar de vernos aquí reunidos sancionando esta ley.

Sr. Mujica. — No la voten, entonces.

Sr. Ferreira. — Sí, señor diputado; la vamos a votar pero juntamente con las proposiciones de nuestro propio dictamen.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvanse no interrumpir los señores diputados.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Ferreira.

Sr. Ferreira. — Ese proceso, que no se detiene, amenaza superar las estructuras actuales, e, incluso, las institucionales vigentes, si los que representan y ejercitan las facultades propias de estas instituciones continúan sin notificarse de la tremenda realidad que está viviendo el país.

No sé, señores diputados, si la mayoría de los partidos políticos argentinos no percibe que aquí, en esta hora, el pueblo, protagonista de

las grandes e históricas jornadas, nos está mirando con un dejo de indiferencia, y quizás de displicencia, porque se siente defraudado a raíz de que no se acierta en las soluciones reclamadas y no se imprime a la Nación el impulso dinámico y creador del pleno desarrollo económico y social, que es el único sustento —entiéndase bien—, cierto y sólido, del salario suficiente.

Señores diputados: demos esta ley sobre salario mínimo, pero démosla bien, para lograr crecientes satisfacciones para el pueblo y no para crear una vez más efímeras esperanzas, que se transformarán, no lo dudo, en última instancia, en potente fuerza que arrasará las ideas, las estructuras mentales y las armazones anacrónicas e inoperantes, para aventarlas definitivamente y constituirse en fuerza realizadora del auténtico ser nacional.

Esta es la posición de nuestro bloque. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Fernández Núñez. — El país ha sufrido mucho por culpa de los agoreros.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a llamar para votar en general el proyecto en consideración.

Sr. Pugliese. — ¿Qué número hay en el recinto, señor presidente?

Sr. Presidente (Mor Roig). — En el recinto se hallan presentes 73 señores diputados. En la casa hay número.

—Se llama para votar.

—Obtenido el quórum:

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar en general el dictamen de la mayoría de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, sobre salario vital, mínimo y móvil.

—Practicada la votación:

Sr. Secretario (González). — Resulta afirmativa unánime.

Sr. Muñiz. — Ha resultado afirmativa por unanimidad, señor presidente.

Sr. Secretario (González). — Se ha aprobado por unanimidad.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Antes de entrar al debate en particular, para su mejor ordenamiento, la Presidencia someterá a votación los pedidos de inserción formulados durante la discusión en general.

Sr. Muñiz. — ¿Quedó constancia de que la votación ha sido afirmativa por unanimidad?

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sí, señor diputado. Así ha sido proclamado por Secretaría.

Sr. Elena. — Es bueno dejar constancia de eso.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por Secretaría se enunciarán las inserciones solicitadas por los señores diputados durante el transcurso del debate, y luego se votarán.

Sr. Secretario (Oliver). — Han solicitado inserciones los señores diputados Serú García, So-

lari y Luco. El señor diputado Serú García ha solicitado la inserción de un estudio referente a salarios propuesto por Luz y Fuerza.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar la inserción solicitada por el señor diputado Serú García.

—Resulta afirmativa (1).

Sr. Secretario (Oliver). — El señor diputado Juan A. Solari ha solicitado la inserción de una nota de la OIT.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar.

—Resulta afirmativa (2).

Sr. Secretario (Oliver). — El señor diputado Luco ha solicitado la inserción de una disidencia parcial al dictamen de la mayoría.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar.

—Resulta afirmativa (3).

Sr. Presidente (Mor Roig). — Las inserciones se publicarán en las reuniones en que fueron solicitadas.

En consideración en particular el artículo 1º.

Tiene la palabra el señor diputado Mársico.

Sr. Mársico. — De acuerdo con la posición fijada con claridad por el señor diputado Ferreira, nuestro bloque va a sostener en la discusión en particular, como capítulo segundo de las disposiciones transitorias, los artículos de contenido económico que informan el dictamen de nuestro sector, cuyo texto ordenado haré llegar a la Presidencia.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Si no se hacen observaciones al artículo 1º, se dará por aprobado.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 2º.

Por Secretaría se va a dar lectura de una disidencia parcial.

Sr. Secretario (Oliver). — En el artículo 2º, suprimir las palabras «en cada zona».

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Torreiro.

Sr. Torreiro. — Entre las disidencias depositadas en la mesa de la Presidencia figura la que sostenemos en común con otros bloques para suprimir las palabras «en cada zona», pues entendemos que hace a la justicia del régimen que estamos considerando que el salario mínimo vital se mantenga igual y uniforme para todas las zonas, excepto en aquellas en que por su reconocido alto costo de la vida superan a las demás regiones del país en este aspecto.

(1) Véase la inserción en la página 765 del Diario de Sesiones del 29 de mayo de 1964.

(2) Véase la inserción en el Apéndice.

(3) Véase el texto en la página 702 del Diario de Sesiones del 29 de mayo de 1964.

En la base, proponemos igualdad para el salario mínimo y vital. La modificación sólo la aceptamos en sentido progresivo, para compensar los mayores costos del sostenimiento de la vida del trabajador y su familia en determinadas zonas del país.

Queda fundamentada de esta manera la proposición de que se supriman del artículo 2º las palabras «en cada zona», que hacen posible la revisión o corrección por zona y para abajo de este salario vital y mínimo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿La comisión acepta la supresión propuesta?

Sr. Pena. — La comisión no acepta la supresión propuesta por el señor diputado Torreiro, en primer lugar porque es evidente que las distintas zonas del país tienen distintos costos de vida. Por otra parte, el fundamento de la igualdad no resiste el análisis, si tenemos en cuenta que la verdadera igualdad de las remuneraciones resultará de que éstas se adecuen a los distintos costos de vida de cada región.

Además, esta zonificación del salario mínimo vital está de acuerdo con todos los antecedentes internacionales que la comisión ha tenido a la vista en la elaboración de su proyecto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Martínez Raymonda.

Sr. Martínez Raymonda. — Es para solicitar una aclaración al señor miembro informante.

Comprendemos, como lo hemos expresado en nuestro informe de ayer, que hay zonas del país con distintas condiciones económico-sociales. Pero es fundamental determinar si el salario de emergencia que se va a fijar ahora por la ley, y luego por el consejo, va a ser el mínimo vital necesario para subsistir, porque en esta materia sí que no hay zonas. Por eso entendemos que las diferencias por zonas deben ser hacia arriba y no hacia abajo. Ese es el matiz fundamental que entendemos debe tenerse en cuenta.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — La comisión se ha manejado con los índices que ha tenido a su alcance, que son los de la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos, los cuales fijan los costos de vida para la Capital. En consecuencia, y respondiendo al principio de igualdad, al que antes me he referido, que fue el argumento fundamental del señor diputado Torreiro, para que esa igualdad se mantenga con respecto a los distintos costos de vida, el salario tendrá que oscilar. Si fijamos el salario para la zona de más bajo costo de vida, lo podemos aumentar; pero si lo fijamos con relación a la zona de la Capital, en algunas zonas tendremos que disminuir y en otras aumentar ese salario.

Creo que así respetamos el verdadero espíritu de igualdad, que es uno de los fundamentos del salario mínimo, vital y móvil, fijándolo con relación a cada una de las zonas de acuerdo con el costo de la vida.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pizarro.

Sr. Pizarro. — Este problema de las quitas zonales no es nuevo. El antecedente está en el artículo 14 bis, incorporado a la Constitución por la Convención de Santa Fe en 1957.

Preguntado el miembro informante sobre el sentido del texto de ese artículo, señaló que era clara la redacción, que establecía que por igual tarea no se admitían distinciones en razón de sexo, nacionalidad o de otra índole. Es decir que no podría haber discriminaciones, con perjuicio, mediante quitas zonales.

Ese ha sido el espíritu que me ha llevado a presentar en el día de ayer un proyecto de ley que reconoce como antecedente el dictamen de 1961 (página 3370 del Diario de Sesiones), firmado, entre otros, por los diputados Bogliano, Alvaro Monte y Melchor S. Posse, tendiente a suprimir las quitas zonales. Hay otro proyecto de resolución que lleva la firma del señor diputado Jofré, por el que se suprimen las quitas zonales para los obreros de las fábricas de cemento, y uno más, de ley, que figura en la página 3371 del Diario de Sesiones, con la firma de los diputados Facundo Roberto Suárez y Felipe Abdala, que, basado en el propio principio constitucional del artículo 14 bis, las suprimen.

Nosotros creemos que es de estricta justicia suprimir todo lo que sea quita zonal. Lo otro vendrá por añadidura. Cuando las zonas son inhóspitas, cuando hay alto costo de la vida o cuando haya otras razones, vendrán los adicionales. Pero aquí tenemos que hacer la modificación, que la comisión no acepta, por imposición misma de la Constitución y por abundantes antecedentes de la propia Cámara.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Muñiz.

Sr. Muñiz. — Comenzaré mi exposición haciendo una pregunta al señor diputado Pena para entender bien el sentido del artículo que estamos considerando.

De acuerdo con el dictamen de la mayoría, el salario vital, mínimo y móvil para la familia tipo es de 14.000 pesos. Quiere decir ello que, según el artículo 2º, en algunas zonas del país el salario vital, mínimo y móvil para la familia tipo podrá ser de 11.000 ó 12.000 pesos. Aclaremos eso para saber bien cómo se aplicará el artículo según el dictamen de la mayoría.

Pregunta: ¿habrá zonas del país donde el salario mínimo será de 11.000, 12.000 ó 13.000 pesos?

Sr. Pena. — Sí, señor diputado.

Sr. Muñiz. — Si es así, el artículo 2º no puede ser.

No me voy a manejar con argumentos de tipo teórico, que sobran, sino con dos antecedentes: uno, el inmediato que me proporciona el señor diputado Pena. En verdad, en virtud del artículo no hay salario vital mínimo y móvil. La ley queda destruida.

El otro antecedente está dado por el Estatuto del Peón, que estableció las remuneraciones por

zonas. Desde su sanción, nuestro partido estuvo en contra de esa norma. Saben todos los señores diputados que, en la práctica y a mérito de los salarios zonales, los trabajadores rurales reciben remuneraciones distintas según las zonas. Por esa vía de los salarios por zonas se han escamoteado las retribuciones justas, siendo fuente de las mayores injusticias. Tan es así, que las organizaciones de trabajadores rurales están reclamando, con toda razón, que terminen esas clasificaciones zonales porque sólo han servido para favorecer a los terratenientes, señores feudales de algunas provincias, que han logrado la aplicación de salarios que no conciben con el standard de vida que queremos asegurar a los trabajadores.

De aprobarse el artículo 29 aceptando el criterio de los salarios y sueldos por zonas destruiremos —digámoslo con franqueza— la ley que estamos tratando. No habrá salario vital, mínimo y móvil. La respuesta del señor diputado Pena ha sido, en tal sentido, categórica y definitiva.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Jofré.

Sr. Jofré. — Comparto la opinión de la comisión y creo que es injusto que se tengan que establecer diferencias zonales a causa de los diferentes niveles de vida del país. Creo también indispensable que exista un salario vital y móvil. Justamente, los términos de salario vital y móvil nos están diciendo que tienen que tenerse en cuenta dos condiciones: que sea vital, es decir, indispensable para asegurar las condiciones de vida de quien recibe el salario, y móvil, o sea, que tenga la movilidad necesaria para permitir que constantemente se aseguren esas condiciones de vida.

Esa seguridad que procuramos para el asalariado, no sólo debe darse en el tiempo, sino también en razón del lugar. Entendemos que el costo de la vida es muy distinto en las distintas regiones de nuestro extenso país. En tres millones de kilómetros cuadrados hay zonas y lugares donde el costo de la vida es inferior al de Buenos Aires. Todas las estadísticas que se han dado en esta Cámara ayer y hoy están referidas casi exclusivamente a la ciudad de Buenos Aires, donde el costo de la vida es mucho más elevado que el de algunas regiones del país. Y es indudable también que es más bajo que el de otros lugares como, por ejemplo, la Patagonia. En la Patagonia, por ejemplo, es más alto; en Mendoza es más bajo, y en La Rioja es más bajo. Quiere decir, entonces, señor presidente, que no podemos improvisar en esta materia, y a esto voy.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Ruego a los señores diputados no interrumpen al orador.

Sr. Jofré. — Nosotros tenemos que dejar que se realicen estudios serios y profundos sobre la materia para no improvisar y no causar un

daño innecesario a todos los sectores de la economía nacional. Me hace mucha gracia ver que algunos quieren defender al trabajador y, en realidad, no lo defienden sino que lo hunden, porque están matando la gallina de los huevos de oro. Para que el trabajador pueda gozar de buenas condiciones de trabajo es indispensable que exista quien le pueda dar ese trabajo. Si nosotros destruimos la industria, la agricultura y la ganadería, como ha ocurrido alguna vez en el país, estamos matando las fuentes de trabajo, y nuestro sector quiere que ellas se mantengan. Por eso no vamos a votar una ley que pueda ser perjudicial a los sectores de trabajo, a quienes hemos ayudado en todo sentido.

He presentado, señor presidente, el proyecto con respecto a los obreros del cemento, porque estaba ocurriendo que los obreros de este ramo en Mendoza, Salta y Córdoba, estaban ganando menos que los de la provincia de Buenos Aires, sin tener en cuenta que el costo de la vida en Mendoza y Córdoba, en el momento en que presenté el proyecto, era más elevado que el costo de la vida en Buenos Aires. Es por eso que, visitado por el sindicato de los obreros del cemento, presenté ese proyecto, que suscribiría nuevamente ahora.

Sr. Peña y Lillo. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Jofré. — Con mucho gusto, señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Peña y Lillo.

Sr. Peña y Lillo. — Quiero señalar, señor presidente, que la referencia que ha hecho el señor diputado Pizarro es extraña a una ley de salario mínimo, vital y móvil. Aquel proyecto a que ha aludido de los obreros del cemento se refiere en realidad a salario básico profesional, que es una cosa distinta.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Jofré.

Sr. Jofré. — Por otra parte, señor diputado, también se ha hecho referencia...

Sr. Presidente (Mor Roig). — Ruego al señor diputado dirigirse a la Presidencia.

Sr. Jofré. — En lo sucesivo así lo haré, señor presidente, como corresponde.

Decía que se ha dicho también aquí que la Constitución establece en su artículo 14 bis —y he sido uno de los que tuvieron el honor de participar de esa convención y votar ese artículo nuevo— que corresponde igual remuneración por igual tarea. Pero esto no se refiere a que un obrero de tal provincia gane igual que otro de otra provincia, sino que quiere decir que cuando se realice una misma tarea en un mismo lugar y en las mismas condiciones, debe retribuirse con igual remuneración. Ese es el espíritu del artículo.

Sr. Pizarro. — Acepto la aclaración.

Sr. García. — ¿Me permite una aclaración?

Sr. Jofré. — Sí, señor diputado.

Sr. García. — Me complace señalar que coincido en un todo con las expresiones del señor diputado Jofré, de donde surge que a veces un exceso de énfasis, de muy buena fe por cierto, en la defensa de instituciones tan serias como las que estamos tratando, puede hacerlas naufragar en la práctica por parte de los sectores que en este instante sostienen la reforma al artículo 2º del dictamen.

A todos los argumentos que ha dado el señor diputado Jofré hay que agregar otro que es fundamental, y que es la capacidad de pagos de salarios, que no puede ser uniforme y que no lo es, realmente, en todo el país. No es igual la capacidad de pagos de un establecimiento industrial en la provincia de La Rioja, por ejemplo, que la que tiene un establecimiento dedicado al mismo rubro en la ciudad de Buenos Aires.

A los argumentos que ha mencionado el señor diputado Jofré, que suscribo, habrá que agregar este otro, para que pensemos serenamente sobre este problema. Los institutos de este tipo, para poder realizarse con vigencia y seriedad en el país, deben también ser analizados en la misma forma.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Jofré, a quien la Presidencia ruega que en la medida de lo posible, y para un mejor orden del debate, no acepte interrupciones.

Sr. Jofré. — Agradezco al señor diputado García la interrupción, porque fija mejor mi pensamiento.

Sr. Arana. — Si me permite señor diputado...

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvase no interrumpir el señor diputado.

Sr. Arana. — Quería decir, señor presidente...

Sr. Presidente (Mor Roig). — Señor diputado Arana: el señor diputado Jofré no desea ser interrumpido.

Sr. Jofré. — Comparto la inquietud del señor diputado García.

Sr. Arana. — Quiero aclarar al señor diputado Jofré...

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por tercera vez la Presidencia significa al señor diputado Arana que no perturbe el buen orden del debate.

Sr. Arana. — Seré respetuoso, señor presidente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sigue en uso de la palabra el señor diputado Jofré.

Sr. Jofré. — Participo de la inquietud expuesta por el señor diputado García, y aún más. Tan necesario es el salario zonal que, si no se establece, en determinadas industrias o actividades se cometería una verdadera injusticia y traería inconvenientes de tijo económico.

Si establecemos un salario uniforme en todo el país, vamos a crear condiciones distintas en la productividad y en la producción de cada zona, porque si un producto cualquiera que se elabora en Buenos Aires tiene el mismo costo de mano de obra que un producto similar el-

borado en La Rioja con la misma incidencia de la mano de obra, en realidad estaríamos recargando a este último, que debe ser vendido en el mercado de Buenos Aires después de soportar gastos de transporte y de conservación que no pesan sobre el producto elaborado en Buenos Aires. Por eso es indispensable tener en cuenta no sólo esa circunstancia sino también el costo de la vida; y puede ser que si éste es más bajo en La Rioja, estemos favoreciendo a la industria riojana. De esta manera, estaríamos logrando algo que muchas veces olvidan los legisladores de provincia cuando vienen aquí a legislar, o sea tratar de favorecer al interior y no mirar simplemente al país como si sólo importaran los problemas de Buenos Aires. Si miramos hacia el interior y observamos sus condiciones de vida, que como bien ha señalado el señor diputado Solari son condiciones de vida inferior, vamos a hacer lo posible por dictar una legislación que no cierre el panorama y no nos eneguezca.

Por eso voy a votar por el dictamen de la comisión tal cual está redactado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Luco.

Sr. Luco. — Señor presidente: con el tema en discusión hay una lamentable confusión, o no se quiere entender una cosa que es clarísima a la luz de los términos constitucionales. Ha quedado perfectamente aclarado que estamos cumpliendo con esta ley un mandato constitucional establecido en el artículo 14 bis, y en castellano la redacción de ese artículo señala un mandato imperativo, que es perfectamente claro a la luz de lo que aquí también se ha establecido como concepto indiscutible respecto al salario vital mínimo. Dice la parte pertinente del artículo 14 bis de la Constitución que «el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil...». Esta disposición se refiere al trabajador de toda la Nación, indudablemente; no admite de ninguna manera que por vía de las quitas zonales el trabajador de una zona tenga un salario mínimo inferior al trabajador de otras zonas del país. Eso es claro y no puede ser discutido. No se puede hablar de este mandato constitucional y burlarlo después con estas quitas zonales, que lesionan, como dijo muy bien el señor diputado Muñiz, el proyecto que hemos votado en pleno acuerdo.

Ha dicho el señor diputado Jofré —cosa que no comparto— que hay zonas del país en las que el costo de la vida es más bajo que en la Capital Federal. No creo que eso sea cierto, pero aunque así fuera, no es eso lo que interesa determinar para el establecimiento del salario mínimo; podrá ser un ingrediente en la discusión si estuviéramos de acuerdo en que el

salario mínimo que estableceremos ahora fuera el adecuado, real y verdadero para el obrero argentino en este momento; pero está poco menos que aceptado por todos los sectores que dicho salario, en el monto que fijamos en 11, 14 ó 16 mil pesos, es un salario mínimo vital de emergencia, porque a nadie puede quedarle duda de que esa cifra no alcanza para la vida digna de una familia de acuerdo con las necesidades que tiene el hombre y con un confort mínimo.

De manera que no interesa determinar si el costo de la vida es mayor en una u otra zona, porque en ninguno de los casos ha de alcanzar.

Por otro lado, el mandato constitucional es tan claro y tan imperativo que entendemos no puede haber duda.

En una palabra, si se modifica el espíritu de la ley, se burla el mandato constitucional y burlaremos los principios de esta ley. Quiero que quede esto en claro y que también quede bien definida la responsabilidad de que se promete una cosa y se hace otra.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pérez Gallart.

Sr. Pérez Gallart. — Nada agregaré a las razones constitucionales a las que ya se ha referido el señor diputado Luco, pero quiero hacerme cargo de algunos argumentos que se han dado en el curso del debate en particular.

Es cierto lo que dijo el señor diputado del bloque de la Federación de Partidos de Centro, que hay zonas del país donde el costo de la vida es más elevado que en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, y otras donde es notoriamente inferior. Mencionó como una de las zonas donde es más elevado la región patagónica, una de cuyas provincias represento en esta Cámara, respecto de las cuales oportunamente propondré un agregado en las disposiciones transitorias.

Es cierto también que hay zonas donde la vida tiene un costo muy inferior, pero ello se debe a que en esas zonas la vida es mucho más elemental porque el nivel está muy por debajo del existente en la Capital y en el Gran Buenos Aires; es el nivel de vida a que se refería esta tarde el señor diputado Solari, cuando aludía a ese hachero que se alimentaba exclusivamente con mate y galleta.

Por supuesto que el costo de vida es inferior; pero no podemos pretender, cuando estamos otorgando un beneficio social necesario, indispensable, para la paz de la República, mantener esa situación en las abandonadas, en las olvidadas provincias del interior argentino. Debemos dar las mismas oportunidades para que el nivel de vida sea igual en las provincias que en esta tremenda concentración humana de la Capital y del Gran Buenos Aires.

Pero hay más, señor presidente. Si mantenemos esta situación, en que las remuneraciones son superiores en la Capital y el Gran Buenos Aires con respecto al interior, con ello estare-

mos fomentando la continuidad de la corriente migratoria que despuebla a las provincias, para venir a radicarse en las villas populosas del conurbano industrial, y ésa es otra de las cosas a que tenemos que poner fin desde este Congreso de la Nación.

Finalmente, quiero hacerme cargo de un argumento que me dio mucho que pensar y que empleó el señor diputado Jofré. Es cierto que al igualar el monto de las remuneraciones dificultamos las posibilidades competitivas de las empresas del interior. Es muy cierta y exacta esa afirmación del señor diputado Jofré. Yo no la pongo en duda, porque sé lo que ocurre con las pocas industrias radicadas en la Patagonia, industrias en las que los salarios no sólo son iguales, sino más elevados. No obstante, la solución para este problema no puede ni debe estar dada por esta ley. Esa solución debe estar contenida en el régimen de fomento y de promoción industrial, régimen que fuera derogado por el actual gobierno y puesto nuevamente en vigencia mediante un decreto que no da una respuesta adecuada a los reclamos de este sector. La Cámara deberá ocuparse a su debido tiempo de este problema, que en este momento no se halla en discusión, y entonces podremos si contemplar esa inquietud legítima del señor diputado por Mendoza, inquietud que es también la mía como representante de Santa Cruz.

Por estas razones, si en este punto mantene- mos el dictamen de la comisión, creo que desnaturalizamos profundamente, no sólo la institución del salario mínimo vital y móvil, sino que además estamos fomentando el mantenimiento de esta deformación económica de la República, esta concentración de grandes masas urbanas en torno de la Capital y este desdoblamiento paulatino de las provincias, además de ayudar a mantener un nivel de vida sumergido para los pueblos del interior.

Por estos motivos votaremos en contra del dictamen de la comisión, y apoyaremos la disidencia en particular sobre este punto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Serú García.

Sr. Fernández (R.). — Había pedido la palabra, señor presidente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — El señor diputado Raúl Fernández está anotado en la lista de oradores. Hay anotados seis señores diputados, además de dos segundas intervenciones.

Sr. Mujica. — Por eso son buenas las interrupciones.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Pero desordenan el debate.

Tiene la palabra el señor diputado Serú García.

Sr. Serú García. — A fin de cooperar en el trabajo de la Cámara voy a ser muy breve.

La modificación que junto con otros bloques hemos propuesto al artículo 2º se refiere a la exclusión de las palabras: «en cada zona», circunstancia que ha promovido este debate.

Yo quiero señalar que, de conformidad con la modificación que hemos propuesto, no sostenemos en absoluto que en definitiva vaya a regir en todo el territorio de la República el mismo y único salario vital móvil. Como lo prueban las modificaciones que también proponemos al artículo 99 y que se considerarán más tarde, nosotros sostenemos que el salario mínimo vital y móvil que rija en la República puede estar sujeto a aumentos zonales, según las particulares circunstancias económico-sociales de las distintas zonas del país. De tal suerte, se me ocurre que este debate se ha extendido más de lo conveniente y que podríamos llegar con los señores diputados que suscriben el dictamen de la mayoría a un acuerdo.

De conformidad con las modificaciones que proponemos, hay posibilidades para que el salario sea distinto según las distintas condiciones de las diferentes zonas del país. No proponemos, como creía el señor diputado Jofré, que rija un mismo y único salario en toda la República. Auspiciamos para el régimen normal de la ley los aumentos zonales, y de conformidad con la modificación que habremos de proponer al artículo 99, según la planilla que está radicada en la Secretaría de la Cámara.

Pero es evidente que para el punto de partida o para la puesta en marcha de la ley, como lo ha señalado con toda elocuencia el señor diputado Luco, en todo el territorio del país no puede regir otro salario de emergencia que el que sancione la Honorable Cámara en la tarde de hoy. Ya se ha dicho que prácticamente hay cierto asentimiento para considerarlo como un salario de emergencia, desde que el otro salario, el mínimo vital que no está establecido en el dictamen de la mayoría, ni en el nuestro, será el fruto de los estudios que habrá de realizar con posterioridad el instituto que habrá de crearse conforme con las disposiciones de la ley que estamos considerando. De tal forma que hay aquí dos problemas, uno inmediato y otro mediano. El inmediato se refiere al salario mínimo de emergencia que regirá en todo el país y que será sancionado esta tarde por la Honorable Cámara. En cuanto a las disposiciones permanentes de la ley, sostenemos la conveniencia de sustituir las llamadas quitas zonales por el sistema de los aumentos zonales, cuando las circunstancias económico-sociales de las distintas zonas del país así lo aconsejen, teniendo además bien presente las sensatas observaciones del señor diputado Pérez Gallart.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Raúl Fernández.

Sr. Fernández (R.). — Este tema del salario móvil fue discutido, como ya se ha dicho, exhaustivamente en el seno de la Convención Constituyente de Santa Fe, en el cual uno de nuestros representantes, el entonces diputado convencional Carlos Bravo, estableció con cla-

ridad el concepto de salario mínimo, vital y móvil, que me voy a permitir leer.

Decía el convencional Bravo: «El costo de la vida no es rígido ni estable; cambia según el tiempo y lugar, por lo que el salario vital mínimo debe variar de acuerdo con las modificaciones del costo de la vida, y como lo expresa la Oficina Internacional del Trabajo, debe "emplearse una escala móvil que permita ajustar los salarios a las modificaciones de los números índices del costo de vida", método que tiene por finalidad mantener el poder adquisitivo del salario.»

Este criterio del salario zonal también está estampado en el decreto 33.302/45, en su capítulo II, al tratar del salario básico; en el artículo 22, inciso g), en cuanto establece que «en ningún caso el salario básico podrá ser inferior al salario vital fijado para la respectiva zona»; en el capítulo III, en cuanto habla de comisiones de salarios en el artículo 25, dice que «el directorio del instituto establecerá las zonas en que se desenvuelve en forma aproximada cada industria, comercio o actividad, siguiendo el criterio de la base territorial más amplia»; en el artículo 26, que determina que «en cada zona funcionará para cada una de las distintas industrias, comercios o actividades afectadas, una comisión de salarios formada por un número igual de representantes de los empleadores y de los empleados y obreros de la industria, comercio o actividad correspondiente, con sus respectivos suplentes».

Este es el criterio que sostiene la mayoría de la comisión cuando en el artículo 29 dice que el salario vital mínimo es la remuneración que posibilita asegurar en cada zona al trabajador y su familia, etcétera. Esto no quiere decir que por ahora, como lo expresa la disposición transitoria del artículo 20, el salario de 14.000 pesos no se aplique a todo el país.

Es un salario para todo el país y se va a aplicar provisional y transitoriamente, hasta tanto el Consejo Nacional de Salario Vital, Mínimo y Móvil fije los salarios de acuerdo a las normas que contiene el proyecto en su parte general.

Sr. Serú García. — La comisión dijo otra cosa, señor diputado.

Sr. Fernández (R.). — Que quede bien en claro, señor presidente, que esta disposición transitoria rige para todo el país. Este salario de 14.000 pesos rige para toda la República, desde Jujuy a Tierra del Fuego. Así lo entiende el bloque de la Unión Cívica Radical del Pueblo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Caro.

Sr. Caro. — Soy solidario con la posición fijada por el presidente de nuestro bloque, y también creo que éste es un problema fundamental.

Me atrevo a compartir la opinión del señor diputado Muñiz en el sentido de que la redac-

ción propuesta por la comisión en el artículo 2º desnaturaliza totalmente el espíritu de la ley.

Este problema de las quitas zonales ha sido permanentemente el instrumento por el cual se han burlado las disposiciones de tipo legal o convencional que protegen al salario, como ha ocurrido en mi provincia, donde algunas de las malhadadas intervenciones federales que hemos padecido en estos últimos tiempos implantaron esas quitas.

Me atrevo a afirmar que en ninguna parte del país el costo de la vida es más bajo que en la Capital Federal, pues es sabido que en general el salario del obrero se aplica a la alimentación y vestuario, y a nadie se le escapa que los artículos de consumo de primera necesidad y de alimentación son elaborados en un 90 por ciento en la Capital Federal o en los grandes centros industriales del país. El costo de ellos para el hombre del interior, por lo tanto, se encuentra recargado no sólo por el transporte sino también por las sucesivas intermediaciones.

El señor diputado Solari nos ha pintado el cuadro patético que presenta el interior del país, visto un poco a vuelo de pájaro y hecho por un turista, desde luego inquieto y estudioso. Pero yo creo que el cuadro es aún más patético, porque los datos que nos ha leído de esa libreta deben pertenecer a un proveedor con alma de filántropo, ya que los precios que ha leído no guardan ni aproximadamente relación con los que yo he visto en mi provincia.

Se ha vuelto a implantar el sistema de explotación representado por las proveedurías, y por eso voy a invitar a los señores legisladores que tienen la mayor responsabilidad efectiva en la sanción de la ley, es decir, a los integrantes del radicalismo del pueblo, a que reconsideren esta situación, pues si los alienta realmente el propósito de proteger las condiciones mínimas de vida del trabajador argentino, deben tener en cuenta que la aplicación honrada de la ley no dependerá de la buena voluntad del legislador sino que sus resultados estarán determinados por los múltiples intereses que han de surgir a su alrededor.

Me atrevo a declarar que si la mayoría de la comisión no cambia de parecer y acepta la propuesta de nuestro bloque, vamos a dejar la puerta abierta para la arbitrariedad y la injusticia. De no aceptarse la modificación, desde ya pido que la votación sea nominal.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una moción de orden, tiene la palabra el señor diputado Muñiz.

Sr. Muñiz. — Solicito que la Cámara pase a un brevísimo cuarto intermedio, permaneciendo los señores diputados en sus bancas, a fin de que la comisión pueda recapacitar sobre el contenido del artículo 2º.

El texto del artículo no es claro. Cuando le pregunté al señor miembro informante de la comisión si de acuerdo con dicho artículo el salario

en unas provincias podría ser de 14.000 pesos y en otras de 12.000, me contestó afirmativamente. El señor diputado Fernández, en cambio, ha dicho palabras más alentadoras, expresando que la suma de 14.000 pesos será de aplicación en toda la República.

Se advierte una contradicción, acaso consecuencia de la fatiga que experimentan los señores diputados.

Por lo tanto, hago moción de pasar a un cuarto intermedio, de quince minutos, para que la comisión vuelva a conversar sobre este artículo y procure arbitrar una solución que nos complazca a todos.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar la moción de orden del señor diputado Muñiz.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Invito a la Honorable Cámara a pasar a un cuarto intermedio de quince minutos en las bancas.

—Se pasa a cuarto intermedio a las 16 y 10.

—A la hora 16 y 35:

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa la sesión.

La Presidencia informa que hasta este momento hay anotados para participar en el debate en particular sobre el artículo 2º, nueve señores diputados, aparte del señor miembro informante de la comisión.

Sr. Salado. — Deseo saber si estoy anotado, señor presidente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — No, señor diputado.

Sr. Salado. — Solicito, entonces, señor presidente, que se me incluya en la lista.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Con la inclusión del señor diputado Salado, son diez los oradores anotados: señores diputados Rouzaut, Peña y Lillo, Bobillo, Rozas, Rodríguez Vagaría, Sandler, Mercado, Torreiro —para una segunda intervención—, Martínez Raymonda —también para una segunda intervención— y Salado.

Tiene la palabra el señor diputado Rouzaut.

Sr. Rouzaut. — Señor presidente: voy a referirme exclusivamente al aspecto de la constitucionalidad del artículo 2º del proyecto de ley.

Quiénes hemos estado en la Convención Reformadora de 1957 —el que habla ha tenido el alto honor de ser miembro informante del proyecto de la comisión redactora— sabemos que cuando se discutió esta parte del artículo 14 bis, que se refiere al salario mínimo, vital y móvil participaron de la discusión —como ya lo dijera el diputado Fernández— el señor convencional Bravo, que se refirió a la fijación de la remuneración por el Instituto Nacional de las Remuneraciones y el convencional doctor Thedy, que se refirió a la fijación por medio de los contratos colectivos de trabajo.

En lo que respecta a aquella parte del artículo 14 bis que se refiere a la remuneración igual

por igual tarea, ello juega siempre en virtud de la igualdad constitucional a que se refiere el artículo 16, que presupone la existencia de categorías jurídicas.

La doctrina del derecho constitucional así como la que informa la jurisprudencia de la Corte Suprema nacional nos dice que si quisiéramos establecer una igualdad absoluta llegaríamos a la absoluta desigualdad, y que en función de la igualdad ante la ley, juegan las categorías jurídicas que razonablemente fija el legislador. Así se establece en *Fallos* de la Corte Suprema nacional, en el tomo 181, página 203.

Bien: el legislador hace ahora categorías jurídicas por zonas, y con todos los elementos que puedan integrarlos, se fijan los montos de los salarios, diferenciados en esas categorías jurídicas que se hacen. En consecuencia, creemos que el artículo 29 del proyecto de ley es perfectamente constitucional y que no viola ni el principio del artículo 16 ni el del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en las disposiciones a que me he referido.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Peña y Lillo.

Sr. Peña y Lillo. — La discusión que se ha formalizado a propósito de este artículo, señor presidente, me refirma en la idea que ayer sostenía al expresar que las disposiciones transitorias en virtud de las cuales se transforma un proyecto de salario mínimo, vital y móvil en un simple aumento de emergencia, trastornan totalmente la idea originaria.

El señor diputado Martínez Raymonda hizo una pregunta con talento. Preguntó si este salario vital mínimo a que alude el artículo 29 es un salario para poder sostener el mínimo de subsistencia. La pregunta explica las expresiones que hemos escuchado. Inmediatamente ha surgido en la mente de los demás señores diputados ese otro artículo transitorio que establece un salario de emergencia, que no es uno vital mínimo, sino un simple salario de emergencia, y que puede fijarse en 14.000 como podría fijarse en 18.000 ó 20.000 pesos.

El salario vital mínimo está en relación, no sólo con el costo de vida sino con otra categoría, que es el nivel de vida, que es una cosa distinta. El nivel de vida resulta del conjunto de bienes y de servicios que un individuo puede adquirir con su retribución promedio. El costo de vida es lo que cuesta en pesos adquirir bienes y servicios para cubrir las necesidades, es decir, es una cosa diferente. Por eso es que en materia de salario vital mínimo cabe esta diferencia que se establece en el artículo 29 respecto de las zonas, porque el nivel de vida en una zona puede ser distinto que el existente en otras.

El señor diputado Rouzaut me ha ahorrado tener que aclarar el principio de igualdad.

Una ley que no puede ser sospechada de conservadora, como la ley mejicana, define el salario vital mínimo como un salario que no tiene en cuenta el sexo, la edad, la eficacia, la profesión ni la ocupación. Es decir, que la incompatibilidad entre el proyecto del señor diputado Jofré y algunos otros proyectos que se referían

a los salarios básicos profesionales no existe, porque versan sobre cosas distintas.

Por último, es oportuno señalar también, ahora que se está definiendo el salario vital mínimo, algo muy importante. Hay que hacerle saber al señor secretario general de la Confederación General del Trabajo que cuando él excusa su silencio, su no exigencia durante muchos años de la vigencia del decreto 33.302, diciendo que el salario vital mínimo tiene razón de ser cuando hay desocupación, pero que no tiene razón de ser cuando hay plena ocupación, incurre en un tremendo error. Cuando hay plena ocupación el salario vital mínimo tiene razón de ser, porque hay que ajustarlo, hay que establecerlo en razón de esa euforia económica; hay que conectarlo entonces con el concepto de nivel de vida. Y cuando hay desocupación, el salario vital mínimo también tiene razón de ser, y es muy importante la cifra que se fije, porque si la desocupación se traduce en que una empresa, en vez de ocupar la plenitud de la mano de obra que es capaz de recibir, por ejemplo, cien obreros, ocupa sólo a cincuenta obreros, llegaría el caso de que por pretender un salario vital exagerado resulte que no puedan ingresar a trabajar otros obreros.

Es decir que con la tesis del secretario de la Confederación General del Trabajo, en los tiempos de desocupación se llegaría a que unos privilegiados cobrarían un alto salario y otros no cobrarían nada, tendrían que pedir limosna. Precisamente ése es el error de la conducción gremial, cuando no advierte que hay oportunidades en que debe facilitarse que haya sectores numéricos importantes que no lleguen a morir de hambre porque no perciben nada.

Es necesario, entonces, adaptar el salario a las posibilidades, con el fin de que todos puedan cobrar algo, que todos puedan comer algo.

Recalco una vez más que ese artículo transitorio, injertado al final de la ley, es el que trae todos los trastornos. Ese salario vital, mínimo y móvil de 14.000 pesos de que habla ese artículo, que al final del debate puede ser que lo hayamos llevado a 20 ó 22.000 pesos, no es un salario vital mínimo, y no lo es porque no tiene en cuenta algunas circunstancias específicas. Pregunta si ése es un salario vital mínimo cuando no tiene en cuenta el número de horas que trabajaría el beneficiario de ese salario. En base a esa disposición transitoria, podríamos llegar al resultado de que un obrero que trabaje doscientas horas al mes, cobre lo mismo que otro que trabaja ciento cincuenta o ciento setenta horas.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Bobillo.

Sr. Bobillo. — Señor presidente: no comparto la interpretación restrictiva que ha hecho el señor diputado Luco del texto constitucional; pero como ha sido muy bien aclarado por el señor diputado Rouzaut, voy a contestar algunos de los argumentos que se han hecho para fundamentar la supresión de la división en zonas para la aplicación del salario mínimo, vital y móvil.

Es distinto el instituto del «quite zonal» que existía en nuestro país, y que los hombres del radicalismo suprimieron hace ya más de ocho años en la provincia de Mendoza, porque éste no respondía a ningún principio de equidad, es decir, no tenía en cuenta el nivel de vida de la provincia, ni tampoco el real nivel del costo de la vida en la zona en la que se aplicaba. Vale decir que ese quite zonal no era de ninguna manera justo.

Por el contrario, el salario mínimo aplicado por zonas en la forma que está encarado en el proyecto en discusión, no va a responder al clásico canon dado aquí en una argumentación un poco sensiblera, sobre todo para las zonas más pobres del Norte del país...

Sr. Caro. — Hay más explotación, pero no es pobre el Norte argentino.

Sr. Bobillo. — ... porque no creo que el Consejo Nacional del Salario vaya a fijar para las distintas zonas del país el salario mínimo teniendo presente —y aquí le contesto, señor diputado Caro— los niveles de infraconsumo en que está sumida esa población, no de ahora, sino de hace más de veinte o treinta años.

Vale decir que de acuerdo con el proyecto el Consejo Nacional del Salario tendrá presente el costo de la vida en la zona en la que se va a aplicar, y los niveles necesarios de consumo desde el punto de vista dietético y calórico. De allí surgirá cuál es el salario mínimo para la subsistencia justa y razonable de la familia tipo. Es decir que no podemos partir del hecho del infraconsumo para fijar los salarios para esa zona, sino que se van a tener presentes todas esas razones para su determinación, con el fin de que los salarios respondan a la idea central de la ley y que están establecidos en el artículo 2º, que es posibilitar en cada zona al trabajador y su familia la alimentación, el vestido, la educación de los hijos, el acceso a la propiedad de la vivienda, el régimen de vacaciones, la asistencia sanitaria y, en definitiva, un nivel de vida de acuerdo con los costos en la zona de que se trate.

De esta manera creo que se clarifica un poco el problema. No podemos adecuar el salario a la zona pensando únicamente en los niveles actuales, sino que debemos llegar a algo que ha indicado ya el señor diputado García, que es la descentralización económica del país, puesto que si bien hay zonas que gozan de un mayor nivel de vida, debemos ir fomentando las posibilidades de aquellas otras sometidas al infraconsumo, para que puedan arribar sus habitantes a un nivel de vida decoroso y al que tienen derecho de aspirar.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Rozas.

Sr. Rozas. — La verdad es que al entrar a la discusión de este aspecto se han abierto ciertas circunstancias de confusión que espero sean aclaradas en el curso del debate. Puesto en esta tesitura, voy a pronunciar algunas palabras,

advirtiéndome desde ya que no estoy seguro de hallarme totalmente en lo cierto.

Estimo que la disposición del artículo 20, que fija un salario mínimo de 14.000 pesos, es transitoria, por lo que debe aplicarse hasta tanto no pueda funcionar el sistema permanente previsto por el artículo 9º. Como el funcionamiento de este sistema habrá de prolongarse en el tiempo, ya que es necesario acopiar material y elementos de juicio y de información con que no se cuenta, se ha creído conveniente fijar un salario uniforme y mínimo de 14.000 pesos en todo el país. En otros términos, el salario de 14.000 pesos será de duración transitoria y registrará en tanto no funcione el sistema permanente del artículo 9º, no siendo susceptible de variación por las circunstancias zonales, vale decir que se aplicará en todo el país.

Admito que sobre ese monto establecido por el artículo 20 se hagan deducciones por aplicación del artículo 11, que a mi entender tiene carácter permanente. Esta última norma, aplicable en todas las circunstancias, determina que por concepto de cargas de familia se impute un 30 por ciento del salario vital mínimo.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Miguel P. Del Pero.

Sr. Rozas. — Así consideradas las cosas, y recogiendo sobre el particular una sugestión de un compañero de sector, estimo que el artículo 13 es redundante, puesto que el artículo 11 ya da la solución al fijar el porcentaje del 30 por ciento para las asignaciones familiares.

Por estas razones votaremos el principio general de la adaptación del salario mínimo y vital por factores zonales; pero estimamos que el salario mínimo tiene que aplicarse durante el primer año con el criterio que acabo de señalar.

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Rodríguez Vagaría.

Sr. Rodríguez Vagaría. — El señor diputado preopinante ha dicho que se ha creado aquí una confusión y que en torno de esa confusión se ha originado este debate. Coincide así con lo que acaba de decir el señor diputado Peña y Lillo en cuanto atribuye a una pregunta del señor diputado Martínez Raymonda el origen de esta confusión, motivada, igualmente, por la requisitoria que hizo el señor diputado Muñiz al presidente de la comisión.

Después de hacer estas manifestaciones quiero decir que en realidad estamos confundiendo; estamos haciendo consideraciones que no corresponden en este momento, en torno del artículo 2º.

El principio de si va a ganar más o menos el trabajador que goce del beneficio del salario vital de 14.000 pesos es lo que ha motivado principalmente esta confusión, y ello tendrá que ser objeto de atención de la Cámara recién en el momento oportuno. Por ahora creo que de-

bemos reducirnos únicamente, liberados del prejuicio acerca de si ese salario se va a cumplir en la Capital, en La Quiaca o en Tierra del Fuego, a abocarnos al principio del artículo 2º que trata la Cámara, o sea si conviene o no el principio zonal.

A este tema no me voy a referir después de las palabras oportunas y claras de los señores diputados Rouzaut, Fernández y Peña y Lillo, que han definido el aspecto constitucional frente al cual no tenemos ningún reparo que formular.

El artículo 2º establece qué debe entenderse por salario vital mínimo y cuáles son los fines que se persiguen. En ese sentido, con acierto, el señor Bobillo lo precisó señalando a un señor diputado que aquí no debe confundirse tampoco con el principio de las quitas zonales que tanto preocupan a un señor diputado en cuanto a que configurarían principios de injusticia. Precisamente, con la institución del consejo, en cuanto ha de determinar el salario vital móvil, se evitará caer en ese principio de las quitas que se aplicaban y decidían desde Buenos Aires para el interior del país, teniendo presente el estado de infraconsumo de las poblaciones desvalidas y que no gozan de los privilegios de los grandes centros urbanos.

A nosotros no nos preocupa eso, y, por el contrario, creemos que el hombre necesita alimentar, educar y mantener a su familia en forma decorosa, y dejamos de lado argumentos de diferenciación que se pueden hacer basados en conceptos de falta de equidad o de posible desigualdad, que quedan superados en este artículo.

El salario vital móvil no pretende beneficiar con ninguna cantidad de más a la familia que vive en una zona determinada; es decir que no habrá un trabajador que obtenga una ganancia excesiva, toda vez que el salario fijado por el consejo atenderá las exigencias de las zonas y las necesidades de la familia del trabajador.

Insto amablemente a los señores diputados a que demos solución al problema planteado sobre este artículo, partiendo únicamente del principio de si debe mantenerse este artículo estipulando la obligación de que el salario vital y móvil se fije por zonas o no, pero completamente apartados del principio de los artículos 19 y 20 que establecen la cantidad en que momentáneamente se fija el salario vital.

Esas consideraciones las haremos en el momento oportuno, pero si nos concretamos ahora al problema en debate ganaremos en tiempo y en eficiencia.

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Mercado.

Sr. Mercado. — Considero que el cuarto intermedio se ha originado en una pequeña confusión, pues el artículo 2º, tal como ha sido proyectado por la mayoría de la comisión, ha tenido en cuenta esas tres palabras: «en cada

zona». Lo que ha movido a la comisión a establecerlas es que el salario vital, que se establece en el artículo 20 en 14.000 pesos, ha sido fijado conforme al standard de vida de la Capital y alrededores, donde se cuenta con elementos de confort que en otras zonas no existen.

No se ha querido una igualdad del salario vital en todo el país sino una equivalencia del mismo conforme a los rubros que hacen al complejo y que conforman el salario vital móvil.

Por ello adhiero al artículo 2º tal como lo proyecta la mayoría de la comisión.

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Torreiro.

Sr. Torreiro. — Señor Presidente: no habría inconveniente en mantener el texto original del artículo 2º, siempre y cuando se asegure que toda corrección del salario mínimo vital ha de ser hacia arriba y nunca se verá afectado por disminución o rebaja alguna, para lo cual se habría que relacionar esta postulación con el texto del artículo 9º donde se habla de reducciones o aumentos. Habría que eliminar la palabra «reducción» del artículo 9º, mantener intacto el artículo 2º y que la disposición transitoria del artículo 20, que fija una determinada retribución para la familia tipo, el 70 por ciento de cuyo importe resultaría la retribución mínima y vital básica, sea inamovible y hacer los ajustes zonales en lo sucesivo mediante los plus necesarios para contemplar los mayores costos de vida. Pero es necesario sostener y refirmar el concepto de que perseguimos con esto una verdadera promoción, una verdadera elevación de los niveles de vida del trabajador, una verdadera redención social.

Además, yo apelaría a antecedentes, que no podemos dejar de lado, y que se relacionan con la continuidad y la perseverancia en los principios. Tengo sobre mi banca, como antecedente de un proyecto de declaración que fue sancionado en las sesiones del 27 y 28 de septiembre de 1961, un proyecto de ley suscrito por los ex diputados Facundo Roberto Suárez y Felipe Abdala que con el permiso de la Presidencia y para no desperdiciar ninguna parte de su contenido, voy a leer: «Artículo 1º — Los convenios colectivos de trabajo que se realicen en la República no podrán contener cláusulas discriminatorias del monto de los salarios o los jornales en razón de zonas de trabajo, debiendo ser uniformes dentro de cada especialidad o jerarquía. Artículo 2º — En los convenios colectivos de trabajo en que se hubiesen determinado quitas zonales quedan automáticamente derogadas dichas disposiciones, no afectando esta derogación las demás partes del convenio. Artículo 3º — Las empresas que debieran abonar diferencias de salarios por la derogación establecida en el artículo 2º deberán normalizar su situación frente al personal a su cargo antes del 30 de noviembre de 1961.»

Ese proyecto de ley sirvió de base para el proyecto de declaración que definitivamente fue aprobado por 88 votos a favor y 12 en contra, sobre un total de 100 diputados presentes, y que expresaba: «La Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara: que vería con agrado que en la discusión de los convenios colectivos el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social interceda ante las partes signatarias a fin de suprimir definitivamente las cláusulas sobre "quitas zonales", atento al precepto constitucional que garantiza la igualdad del salario para igual esfuerzo. Que tal decisión tendría especial vigencia en los convenios colectivos para los trabajadores de la industria del cemento portland, en atención a la naturaleza, lugar y demás condiciones donde se realizan.»

Hemos visto que en el año 1961 señores diputados correligionarios de la primera minoría...

Sr. Caro. — ¿De qué partido, señor diputado?

Sr. Torreiro. — De la Unión Cívica Radical del Pueblo.

Sr. Presidente (Del Pero). — Ha vencido el término de 5 minutos de que disponía el señor diputado Torreiro para hacer uso de la palabra.

Sr. Torreiro. — Pido una breve prórroga para determinar mi pensamiento.

Sr. Fernández Núñez. — Hago indicación de que se le prorrogue el término.

Sr. Presidente (Del Pero). — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Del Pero). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Torreiro.

Sr. Torreiro. — Esto lo digo con la mejor intención y al solo efecto de que tengamos continuidad y perseverancia con los principios sostenidos, que valen permanente y universalmente. Todo esto implica un concepto social evidente, una intención de promoción social que en estos momentos parecería querer reducir la primera minoría; yo considero que sólo una pequeña confusión u olvido hará posible que caigan en un error que no contribuiría a su mayor prestigio, a una mejor continuidad de sus intenciones y proclividades.

Sr. Rodríguez Vagaría. — Hace 73 años que tenemos continuidad, señor diputado.

Sr. Torreiro. — Pedimos que también la tengan en otros aspectos.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Torreiro. — Doy término a mi exposición manifestando que mantendremos el texto original del artículo 2º del dictamen de la mayoría, siempre que se suprima la palabra «reducción» del artículo 9º, y sirva como base del salario vital y mínimo para todo el país el que se apruebe en el momento en que se trate el artículo correspondiente. Además, todo modificación deberá tender a elevar el salario

que se fije y nunca permitirá su reducción. De esta manera queremos exaltar los derechos sociales y elevar los niveles de vida, y pedimos, además, consecuencia, permanencia y uniformidad de criterio en todo momento.

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Martínez Raymonda.

Sr. Martínez Raymonda. — Señor presidente: las palabras del señor diputado Rodríguez Vagaría colocan, evidentemente, el problema en sus justos términos, tal como lo habían hecho antes otros señores diputados. Recogió esto hace unos breves instantes el señor diputado Torreiro.

La expresión «en cada zona» que figura en el artículo 2º es compatible con nuestro pensamiento y admito que no es allí donde reside el problema fundamental. Asegurar en cada zona los elementos básicos para el salario vital y mínimo, coincide con lo que sostenemos, pero hay una cantidad de razones de orden práctico, además de todas las de orden moral y económico que se han señalado, que debemos puntualizar.

El consejo —y esto va para lo futuro— debe determinar, en mi concepto, el salario vital mínimo a partir del cual solamente puede haber aumentos zonales.

El artículo 9º, que fatalmente tenemos que conectarlo con el 2º, dice que el consejo determinará anualmente, para cada zona, el salario vital mínimo. Hay un error. El consejo debe determinar anualmente el salario mínimo indispensable en las zonas de menores necesidades, para luego, por vía del reajuste del tercer párrafo, hacer solamente aumentos. ¿Qué consecuencias tiene esto? Como hay una relación con los artículos 11, 12 y 13 sobre las asignaciones familiares, y como todos juegan sobre el salario mínimo, con el sistema del artículo 9º de fijar para cada zona el vital y no el mínimo básico en todo el país, tendríamos asignaciones familiares diferentes, habría índices diferentes para el soltero y para la familia tipo. Establecer lo contrario importaría eliminar el peligro de estas confusiones y además tendría un efecto psicológico importante para el trabajador de tierra adentro. Si un hombre de La Rioja —como se lo he repetido hace unos instantes a algunos señores diputados— lee que el Congreso, o el consejo cuando esté funcionando, fija el salario mínimo en 14, 16 ó 20 mil pesos y a él le pagan el 20 por ciento menos, se sentirá defraudado. Si en cambio ve que han fijado un salario de 12.000, no le va a preocupar que el trabajador de Comodoro Rivadavia sobre 16.000. Ese es el sentido que tiene nuestra posición en este momento.

Admito que el artículo 2º pueda quedar redactado tal como figura en el dictamen de la comisión, pero es fundamental que en el artículo 9º se elimine el salario para cada zona y se vaya al porcentaje de aumento y no de reducción que tiene el tercer párrafo. Eso daría

sentido a lo que es nuestro concepto acerca de la base que fije el consejo: la base mínima de atención de las necesidades vitales, en el lugar donde menos necesidades de este orden existen.

En consecuencia, señor presidente, se ha dicho por algún señor diputado que se demore el planteamiento hasta que tratemos el artículo 9º. Pero están tan íntimamente ligados que si aceptamos una cosa sin tener seguridad en la otra estamos abandonando el principio fundamental que creemos indispensable no falte en esta ley.

Con estas palabras dejamos fundada nuestra posición. Si se entiende correlacionado con el artículo 9º vamos a votar el artículo 2º tal cual está; de lo contrario tendremos que ir a la posición de mantener la objeción al artículo 2º.

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Salado.

Sr. Salado. — Antes de dar las brevísimas razones que fundamentan nuestro voto en este artículo quisiera saber si la comisión acepta el criterio que acaba de enunciar el señor diputado Martínez Raymonda.

Sr. Tróccoli. — Cuando tratemos el artículo 9º lo vamos a discutir.

Sr. Salado. — Para no abundar en otras razones, como el principio de igualdad ante la ley y otras que se han referido a sensibilidad, y como todas ellas indican la existencia cierta de regiones en el país que están muy por debajo de los niveles normales de vida humana, yo me reservo mantener esas razones para cuando tratemos el artículo 9º, tal como lo promete la bancada de la primera minoría.

Mientras tanto, hago votos para que en el breve tiempo que falta para tratar el artículo 9º se mantenga el criterio, porque yo ya estoy curado de espanto después de tantos riesgos en esta vida política del país.

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Ocampo.

Sr. Ocampo. — Antes de hablar deseo preguntar a la Presidencia me informe si existe algún otro orador anotado.

Sr. Presidente (Del Pero). — Sí, señor diputado; quedan dos señores diputados anotados.

Sr. Ocampo. — Yo había pedido la palabra para hacer una moción de orden, que voy a dejar formulada desde ahora. Nuestro bloque mantiene su concepto de unidad, es decir que se deben suprimir de este artículo las palabras «en cada zona». El artículo 2º está dando la norma general sobre la cual debe actuar el futuro consejo que va a fijar el salario. Pero si desde ahora le damos normas al consejo para que aplique salarios zonales y no un salario mínimo vital uniforme, desvirtuamos el concepto de la ley.

Por eso, señor presidente, desde este momento dejo formulado el pedido de votación nominal para el artículo 2º que estamos considerando.

Sr. Presidente (Del Pero). — Tiene la palabra el señor diputado Amura.

Sr. Amura. — Voy a votar por el artículo 2º tal cual lo ha redactado la comisión en su mayoría y con la clara interpretación dada por el señor miembro informante de la misma, diputado Pena. Quiero que esto quede bien claro, porque la dialéctica de algunos señores diputados puede inducir a esta Cámara a votar por una cosa distinta de la que muchos señores diputados quieren votar.

Yo voy a votar este artículo tal cual está redactado porque deseo el éxito de esta ley, porque deseo que ella pueda aplicarse con eficacia en el país. El proyecto habla de 14.000 pesos en todo el país, en todas las provincias y en todas las dependencias estatales. Y yo apelo al sentido común de los diputados que representan a provincias, no diría pobres, sino que tienen presupuestos pobres. ¿En qué provincias puede soportar el erario esta asignación? En algunas provincias, en las que se han aumentado mil pesos a los empleados públicos, se ha producido prácticamente una conmoción y una imposibilidad real de pagar. Y estoy hablando de salarios de 5.000 pesos. Naturalmente que ese nivel de vida al que tenemos que atender y al que se han referido los señores diputados Jofré y Peña y Lillo al hablar de las condiciones esenciales del salario vital móvil, no es una responsabilidad nuestra. Lo que nosotros estamos haciendo con sentido realista y con sentido humano es —de acuerdo con ese pobre nivel de vida que tenemos que superar, no con esta ley de salario móvil, sino con otra serie de medidas que este Parlamento y los gobiernos provinciales tendremos que adoptar— dar las posibilidades mínimas para que ese trabajador pueda subsistir. Yo pregunto si en esas provincias donde el salario mínimo de las empresas del Estado es de 5.000 pesos, se lo lleva inmediatamente a 14.000 pesos, no estaríamos estableciendo un salario nominal y no real; si no estaríamos engañando a esa ciudadanía que nos ha votado y que espera y quiere que esta ley sea eficaz. Pido claridad y honestidad de pensamiento, señores diputados.

—Ocupa la Presidencia de la Honorable Cámara el señor presidente don Arturo Mor Roig.

Sr. Carreira. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Amura. — Con mucho gusto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Carreira.

Sr. Carreira. — Quería destacar que en el artículo 25 del despacho de la minoría se contempla esa preocupación que parece afligir al señor diputado Amura, en cuanto dice que «el Poder Ejecutivo nacional prestará asistencia financiera a las provincias, que por aplicación en su jurisdicción de las normas de la presente ley, las

requirieran, hasta tanto puedan adoptar las previsiones presupuestarias correspondientes».

Señalo ese aspecto al señor diputado, simplemente desde el punto de vista normativo, sin entrar al fondo del asunto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Amura.

Sr. Amura. — Me parece bien, señor diputado Carreira, esa observación. Pero entiendo que no deja de ser más que una expresión de deseos, de buenas intenciones. Yo acudo al criterio de los diputados de esas provincias, que con los escasos salarios que hoy pueden abonar a sus empleados públicos están ambulando por los ministerios tratando de buscar equilibrio en esos presupuestos para hacer frente a tales erogaciones, sin poder lograr sus propósitos. Yo preguntaría si hay un solo diputado que pueda decirme que la provincia que representa ha podido equilibrar su pobre presupuesto.

Ratifico mi deseo de que esta ley tenga éxito, pero me ubico en el campo de lo real y no en la utopía. Además, creo que con este criterio unitivo y centralista estamos lesionando la auténtica vivencia federalista, que está expresa en nuestra Constitución Nacional. Considero que con el procedimiento que sugiere la minoría podemos frustrar en algunas provincias la posibilidad de un auténtico desarrollo.

Con estas breves consideraciones, dejo aclarada mi posición y el sentido de mi voto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Balbi.

Sr. Balbi. — A riesgo de repetir algunos argumentos que han sido ya expuestos por distintos señores diputados, siento la necesidad de expresar mi pensamiento sobre este aspecto del problema de la ley que se está considerando.

A mi juicio, hay aquí una confusión general, y hasta creo, sincera y honestamente, que se ha partido de puntos conceptuales equivocados, por lo menos confusos. Esta es una ley de salario vital mínimo y móvil que se estructura, desde el comienzo hasta el final, con el concepto de la división zonal de la República; no es una ley, como parece que hubiesen interpretado algunos señores diputados, para fijar un monto básico uniforme para todo el país, y poder establecer de ahí en adelante un plus para acrecentar dicho monto básico. Ese es un tremendo error.

¿Se fija un salario vital mínimo y móvil ajustado a qué? A las exigencias primordiales de vida en los distintos ámbitos del país. ¿Cuáles son las circunstancias que delimitan y definen esas primordiales necesidades de vida? Son distintos factores de índole económico-social —socio-económicos, como se acostumbra decir— que gravitan y deciden fundamentalmente en el *quantum* mínimo necesario para que una familia tipo pueda vivir en un ambiente determinado, conforme con las exigencias de ese ambiente y conforme también con las posibilidades económicas de ese lugar.

Si nosotros queremos vincular el artículo 2º con otros artículos de esta extensa ley, vamos a entrar en un terreno de confusiones, y conviene clarificar esto. Si los señores diputados aceptan que es justo, equitativo y que no agravia a la Constitución del país la institucionalización del salario vital mínimo y móvil en concepto zonal, debe votarse este artículo tal como está; los demás artículos podrán ser objetados en su oportunidad, cuando se consideren, como lo dijo muy bien el señor diputado Rodríguez Vagaría.

Los que no crean que es justo, equitativo y constitucional votar el artículo con un concepto zonal, desde luego que están en el perfecto derecho de oponerse.

Nosotros estamos en el punto justo de la cuestión: fijar para cada zona del país cuál es el salario mínimo necesario para la atención de la vida del hombre y de una familia tipo en una convivencia de absoluta dignidad.

El salario mínimo no está referido a toda la latitud del país, que es por demás extenso y que tiene, por supuesto, distintas condiciones vitales; no está tampoco referido sin ninguna discriminación. Está referido —y la ley lo determina creo que en el artículo 9º— a las posibilidades económicas de la zona donde será aplicado. Entre los factores que debe considerar el Consejo Nacional del Salario Vital Mínimo y Móvil para fijarlo están la capacidad económica de las distintas zonas del país y las circunstancias que no determinen un aumento de los índices de desocupación.

Si tuviera que decidir mi voto por un íntimo anhelo de mi espíritu y por una propensión ideológica, desde luego muy encomiable, votaría un salario alto para todo el pueblo de la República; pero como tengo que ser realista y tratar de asegurar que la economía de las distintas zonas no se resienta, debo votar conscientemente y con un criterio realista un salario vital mínimo y móvil para cada zona del país y no para toda la República.

Ese es el concepto sobre el que adecuamos y fundamos nuestra posición en esta cuestión. No es el caso de determinar, como dijo algún señor diputado, un salario uniforme «mínimo-mínimo» para vivir en todo el país. Necesitamos establecer aquí hoy, positivamente, un salario para que se cumpla y no para que sea una cosa utópica, como ocurre con el estatuto del docente, por ejemplo; queremos una ley realizable, que se pueda cumplir de acuerdo con los recursos económico-financieros del país en todos sus ámbitos, tanto por parte de la Nación como de las provincias y de las municipalidades, como lo ha advertido el señor diputado Amura.

Debemos votar con ese concepto realista, para no ilusionar a la opinión pública y a la masa del pueblo trabajador, cuyos legítimos derechos queremos defender porque nosotros estamos colocados en una sola línea, la de siempre, la

línea de defensa principalmente del desposeído. Nosotros, como lo he dicho muchas veces, vamos en pos de la democracia social, que significa no sólo una mejor distribución de la justicia, sino un mejor reparto del ingreso nacional; con ese concepto sostenemos que hoy lo justo, lo razonable y lo positivo, en las actuales circunstancias de la vida del país, es votar el salario vital mínimo y móvil con un concepto zonal. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el miembro informante señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Señor presidente: evidentemente, se ha producido una confusión en la discusión de este artículo, en cuanto al mantenimiento o eliminación de la zonificación del salario.

La posición del sector de la Unión Cívica Radical del Pueblo revela continuidad con la posición mantenida en la materia en otras oportunidades, como lo señaló muy bien el señor diputado Raúl Fernández al recordar los términos en que se expidiera el miembro informante en la Convención Constituyente de Santa Fe, hoy diputado Carlos A. Bravo. Dijo entonces el doctor Bravo: «El costo de la vida no es rígido, ni estable; cambia según el tiempo y el lugar, por lo que el salario vital mínimo debe variar de acuerdo con las modificaciones del costo de vida, y como lo expresa la Oficina Internacional del Trabajo, debe aplicarse una escala móvil que permita ajustar los salarios a las modificaciones de los números índices del costo de la vida.»

Yo encuentro loable el propósito de promover el desarrollo económico del interior del país que parece inspirar a los señores diputados que quieren suprimir la palabra «zona» en el artículo 2º; pero advierto que por esa vía van a conseguir precisamente lo contrario de lo que persiguen, pues debe tenerse presente que si el nivel real de los salarios, que no debemos confundir con el nivel nominal, no se adecua al costo de la vida, se ahogará la actividad industrial todavía incipiente en algunas regiones del interior. Los costos de esas industrias serán iguales a los que registren las radicadas en zonas densamente pobladas, pero estarán alejadas del mercado consumidor, lo que lógicamente aumentará el precio a que podrán ser vendidos sus productos y, en consecuencia, no podrán entrar en competencia con las industrias colocadas muy cerca de los grandes mercados consumidores.

Sr. Ferreira. — ¿Acaso no congelan los precios?

Sr. Pena. — Eso no tiene nada que ver.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia ruega a los señores diputados se sirvan no interrumpir ni dialogar.

Sr. Pena. — Evidentemente, por esta vía, como creo que surge de lo ya dicho, llegaríamos a una finalidad no querida por los mismos diputados que sostienen la necesidad de suprimir el término «zona» en el artículo 2º.

Sr. Ferreira. — No se entiende nada.

Sr. Pena. — Evidentemente, ustedes pocas veces entienden en estos aspectos.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvanse no dialogar, señores diputados.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Otro aspecto que debemos señalar es que para mantener la igualdad del salario real —no del salario nominal— en las distintas zonas del país, debemos ajustarnos a los niveles del costo de la vida en cada zona, niveles que, pese a nuestros anhelos, sabemos que son distintos.

Por último, creo que no hay diferencia sustancial con el propósito de algunos sectores de la Cámara que han presentado un dictamen con modificaciones parciales, porque ellos parten de un salario mínimo único para todo el país, admitiendo aumentos y no reducciones. Eso significa que el Consejo Nacional del Salario Vital Mínimo y Móvil que se crea por esta ley tendría que fijar el salario mínimo vital de acuerdo con el costo de la vida de la zona de más bajo nivel del país, y ese mínimo sería objeto de aumentos zonales. Debe mantenerse también la posibilidad de la reducción, ya que respecto de esas zonas se carece de elementos estadísticos para la fijación de un salario mínimo vital, y en consecuencia será más fácil para el Consejo Nacional del Salario manejarse con los índices de la Dirección Nacional de Estadística y Censos y de otros organismos del gobierno nacional que los establecen para la zona de la Capital, que, por lo demás, son los únicos que en este momento ha podido tener en cuenta la comisión.

Esta discusión no ha sido vana.

Sr. Tarulli. — En este Congreso, nosotros estamos...

Sr. Presidente (Mor Roig). — Señor diputado Tarulli: no está en el uso de la palabra.

Sr. Tarulli. — Decía, señor presidente...

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia no le ha concedido la palabra al señor diputado.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Las objeciones de tipo constitucional y el problema relacionado con las famosas quitas zonales poco tienen que ver con la redacción de este artículo, como lo han señalado con toda nitidez los señores diputados Rouzaut y Bobillo.

En consecuencia, —y con esto termino mi exposición—, no queremos que esta ley fracase, y si no adecuáramos el salario mínimo vital y móvil a los costos de la vida...

Sr. Tarulli. — Esta es una ley para la Capital Federal...

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia le advierte por segunda vez al señor diputado Tarulli que no está en el uso de la palabra.

Sr. Pena. — ... para aplicarlo a las distintas zonas, no haríamos más que crear una ilusión

que desgraciadamente no podría concretarse. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Tarulli. — Esta ley se dicta...

Sr. Presidente (Mor Roig). — No está en el uso de la palabra el señor diputado Tarulli.

Corresponde votar el artículo 2º.

Tiene la palabra el señor diputado Luco, quien, por intervenir por segunda vez, dispone reglamentariamente de cinco minutos para hacer uso de la palabra.

Sr. Luco. — Simplemente, señor presidente, solicito votación nominal en el artículo 2º.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Ocampo.

Sr. Ocampo. — Pido que el artículo 2º sea votado nominalmente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia desea saber si está suficientemente apoyado el pedido de votación nominal.

— Resulta suficientemente apoyado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar nominalmente, en primer lugar, el artículo 2º tal cual está redactado, es decir, sin las modificaciones que han sido propuestas y que no ha aceptado la comisión.

Sr. Ocampo. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Ocampo.

Sr. Ocampo. — La Presidencia debe someter a votación el dictamen de la mayoría...

Sr. Presidente (Mor Roig). — Es lo que acaba de hacer la Presidencia.

Sr. Ocampo. — ...o si se aceptan las modificaciones.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La comisión no las ha aceptado, señor diputado.

Sr. Ocampo. — La Cámara tiene que pronunciarse en un sentido o en el otro.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Evidentemente, el señor diputado no ha seguido la exposición de la Presidencia, que ha manifestado que no habiendo aceptado la comisión las modificaciones propuestas, sometía a votación el artículo 2º del dictamen tal cual estaba redactado.

Sr. Lejarraga. — Pero la forma de votación...

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por favor, señor diputado, no desordenemos el debate.

Sr. Lejarraga. — Pido la palabra para referirme a la forma de votar, con el ánimo de buscar un procedimiento claro que evite confusiones.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia está procurando aclararla y su interrupción, lejos de contribuir a ello, significa complicarla un poco.

Sr. Lejarraga. — Eso lo podría decir la Presidencia luego de escucharme.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Pero el señor diputado no deja terminar la aclaración que la Presidencia desea formular, porque permanentemente la interrumpe y le impide esclarecer

conceptos al señor diputado miembro de su sector.

Tiene la palabra el señor diputado Lejarraga.

Sr. Lejarraga. — Lo que está en discusión es el párrafo referente a zonas —en cada zona— motivo de largo y laborioso debate. Creo que la Cámara en pleno desea votar el artículo 2º. Pero unos diputados están porque se mantenga en el mismo la expresión «en cada zona», y otros están en contra de la misma. Por eso pediría que la votación se hiciera por partes: primeramente sin la frase «en cada zona», y luego otra votación sobre la frase «en cada zona», que es lo que aquí se ha discutido.

Sr. Pérez Gallart. — Ya que el señor diputado evidentemente no leyó el reglamento, pido que se lea por Secretaría en lo relacionado con las votaciones.

Sr. Lejarraga. — Pido, además, que la votación sea nominal en la forma que dejo señalada.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Reglamentariamente no procede la votación en la forma que lo solicita el señor diputado. No es posible en este caso la votación por partes del artículo, señor diputado.

Se va a votar nominalmente, en primer término, el dictamen de la mayoría de la comisión, que no acepta la supresión propuesta.

Sr. Tarulli. — O sea que la cobija de nuevo no va a tapar a todo el país.

Sr. Ferreira. — Lo que debe aclararse es que quienes no están con la actual redacción, que mantiene la mayoría de la comisión, es decir, los que están por la supresión de la referencia a las zonas, deben votar por la negativa.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Así es, señor diputado.

Se va a practicar la votación nominal.

— Se practica la votación nominal.

Sr. Prosecretario (Pardo). — Sobre un quórum de 113 señores diputados, han votado 64 por la afirmativa y 49 por la negativa.

— Votan por la afirmativa los señores diputados: Abalo, Alfonsín, Almada, Amura, Arias, Arroyo, Avila, Baccay, Bachini, Baffico, Balbi, Balboa, Balestra, Belnicoff, Berhongaray, Bobillo, Cáceres, Contini, Cortelezzi, Del Pero, Domínguez, Elena, Fabrizio, Fernández (R.), Fernández Núñez, Ferrari, Fiol, Fischer, García, García Leyenda, Ghioldi, González Bergez, Grau, Gutiérrez, Herrera, Jofré, León, Maglietti, Maldonado, Mansilla, Massolo, Méndez Doyle, Mercado, Minsk, Mujica, Pena, Peña y Lillo, Perna-setti, Picado, Pugliese, Rasines, Rial, Rodríguez, Rodríguez Vagaría, Rosito, Rouzaut, Rozas, Schaposnik, Solari (J. A.), Torriglia, Tróccoli, Vaca Lobo, Vázquez Pol y Zanoni.

— Votan por la negativa los señores diputados: Achiary, Arana, Berini, Berrini, Bravo (H. F.), Caggiano, Calvó, Cárdenas, Caro,

Carreira, Centeno, Condoluci, Coral, Díaz O'Kelly, Domingorena, Fernández (J. M.), Ferreira, Fraga, Frega, Galeano, Gómez Machado, Harrington, Lejarraga, Lozano, Luco, Mársico, Martínez Raynonda, Monte, Muñagurria, Muñiz, Musacchio, Ocampo, Oreja, Palacios, Patlis, Peirini, Pérez, Pérez Gailart, Pessino, Pizarro, Reñé, Rodríguez del Rebollar, Sago, Salado, Scarpello, Serú García, Tarulli, Torreiro y Vedia.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 39.

Por Secretaría se dará lectura a las observaciones formuladas a este artículo.

Sr. Secretario (Oliver). — La comisión propone la sustitución del artículo 39 del dictamen por el siguiente: «El salario comprende a toda remuneración de servicios en dinero, especie, alimentos, uso de habitación, comisiones y viáticos, excepto en cuanto a este rubro, la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes. El salario vital mínimo estará integrado además por las asignaciones familiares.»

El señor diputado Juan Antonio Solari propone suprimir las palabras «asignaciones familiares» en la redacción original del dictamen.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — La nueva redacción que propone la comisión tiene por finalidad simplemente aclarar el artículo.

No escapará a los señores diputados que doctrinaria y legislativamente, de acuerdo con los antecedentes existentes en el país, las asignaciones familiares no integran el sueldo. Lo integran, sí, al solo efecto del salario vital mínimo, conforme al sistema adoptado por el proyecto que estamos considerando. En consecuencia, hemos pensado que esta redacción, que mejora la del proyecto original, servirá para clarificar esta cuestión y evitar inconvenientes de interpretación.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Salado.

Sr. Salado. — Nuestro bloque presenta a la consideración de la Cámara un nuevo texto para el artículo 39, que dice así: «El sueldo o salario a los efectos de su fijación legal comprende únicamente la retribución de servicios en dinero. Del mismo se podrán deducir en la proporción que establezca el organismo de aplicación, las prestaciones previstas en el artículo anterior que otorgue el empleador al trabajador, y siempre que éstas no desvirtúen el concepto de salario mínimo vital enunciado en dicho artículo. Cuando la remuneración esté integrada parcial o totalmente por comisiones, deberá asegurarse al trabajador la percepción del salario mínimo vital.»

Las razones que abonan esta presentación residen en la necesidad de que el concepto in-

tegrativo de salario esté dado por el efectivo que se entrega realmente al trabajador.

Por otra parte, es de técnica legislativa que el concepto genérico —en este caso es el dinero en efectivo— sea posteriormente desglosado en la discriminación de otros servicios que también integran el concepto de salario mínimo que ya hemos aprobado, a fin de que podamos establecer con precisión el significado del salario mínimo.

Todo esto tiene importancia especialmente cuando nos referimos a dos sectores del trabajo argentino completamente postergados que, en virtud de lo que dispone el artículo que propone la mayoría de la comisión, se verían perjudicados o, por lo menos, permanecerían en la situación en que se encuentran actualmente. Me refiero a los trabajadores rurales y a los del servicio doméstico.

Estimo que cuando se haga un pago de salarios a personas que reciben además habitación y alimento de un principal, será muy difícil determinar prima facie el salario real y efectivo que deberá recibir el trabajador rural o doméstico que, con toda seguridad, será disminuido en la práctica.

Por estas razones queremos que los conceptos que integran el salario familiar sean contemplados mediante una reglamentación, para no dar desde ya carta blanca a la patronal para que no cumpla esta ley. La situación social del trabajador rural a quien se le da escasa habitación, y del trabajador doméstico, a quien se le da habitación segundona, no se verá mejorada y se mantendrá en la actual situación y aun empeorará día a día —puesto que no se cumplen ni siquiera las leyes generales sobre estos servicios—, si no se arbitra una técnica legislativa adecuada.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Schaposnik.

Sr. Schaposnik. — Es para proponer un agregado: «habilitaciones» después de la palabra «comisiones», como integrando el concepto de salarios. Además, sugiero que el artículo se vote en dos partes: primero, hasta la palabra «comprobantes», porque de acuerdo al criterio que seguimos manteniendo, las asignaciones familiares no integran el concepto de salario; y después, hasta el final del artículo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Bobillo.

Sr. Bobillo. — Señor presidente: es solamente para fijar un criterio interpretativo.

En algunas provincias, como Mendoza, en que la semana de labor es de 44 horas, existe una ley provincial que otorga al trabajador jornalizado una retribución del 9,1 por ciento sobre el total de sus remuneraciones, como compensación por lo que se llama «el sábado inglés». Entiendo que este tipo de remuneración debe considerarse incluido dentro de las previsiones del artículo 39.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Serú García.

Sr. Serú García. — Coincido con la interpretación que acaba de hacer el señor diputado Bobillo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿Acepta la comisión las modificaciones propuestas por los señores diputados Salado y Schaposnik?

Sr. Pena. — Señor presidente: la comisión no acepta la modificación propuesta por el señor diputado Salado, que ha sido tenida en cuenta al elaborar su dictamen. En cambio, acepta la modificación propuesta por el señor diputado Schaposnik en cuanto a la incorporación del término «habilitaciones» sugerida por el señor diputado, después de la palabra «comisiones», no obstante considerar que muy pocas veces el salario de un trabajador que goza del salario vital mínimo será beneficiado por habilitaciones. Pero como contribuye a aclarar los elementos que integran el salario, lo va a aceptar.

Sr. Presidente (Mor Roig). — De acuerdo al pedido formulado por el diputado Schaposnik, se va a votar por partes el artículo.

Se va a llamar para votar.

—Se llama para votar

Sr. Presidente (Mor Roig). — Mientras se continúa llamando, se va a leer por Secretaría el artículo 3º con su redacción definitiva.

Sr. Secretario (Oliver). — La redacción definitiva del artículo 3º sería la siguiente: «El salario comprende a toda remuneración de servicios en dinero, especie, alimentos, uso de habitación, comisiones, habilitaciones y viáticos, excepto, en cuanto a este rubro, la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes.» En la votación por partes, la primera parte sería hasta aquí. Después viene el otro párrafo que dice: «El salario vital mínimo estará integrado además por las asignaciones familiares.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar la primera parte del artículo 3º.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar la segunda parte del artículo 3º.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 4º.

Se va a dar lectura por Secretaría de la nueva redacción propuesta por la comisión.

Sr. Secretario (Oliver). — La nueva redacción que propone la comisión dice así: «El salario vital mínimo revestirá el carácter de orden público y será irrenunciable. Por causa alguna podrán abonarse sueldos o salarios inferiores a los que se fijan de conformidad con la presente ley, ni podrán los mismos ser disminuidos por contratos individuales o convenciones colectivas, siendo nula toda disposición o cláusula salarial en contrario.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — La comisión ha suprimido el último párrafo del artículo 4º en atención a algunas reclamaciones y sugerencias que le han llegado después que había elaborado su dictamen.

En la práctica, los conceptos de productividad e incentivación, es decir, los premios o primas que se pagan por dichos conceptos, se han desvirtuado tanto en la actividad oficial como en la privada, y en algunos casos su liquidación es una forma común y corriente de pago de salarios. Para obviar ese inconveniente, hemos considerado necesaria esa supresión. En cambio, proponemos agregar en el artículo 9º, entre las facultades del consejo, la determinación de las remuneraciones que por su efectivo carácter de primas o premios por incentivación, productividad u otro concepto no deban considerarse como parte integrante del salario vital mínimo.

Hemos querido evitar un sistema rígido en cuanto a la eliminación del salario vital mínimo de las primas o premios por productividad o incentivación, en razón, como decía, de la desvirtuación de la institución a que he hecho referencia, ya que esas primas o premios han pasado prácticamente a formar parte del salario, porque los montos de productividad son tan bajos que en realidad los percibe todo el personal.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Schaposnik.

Sr. Schaposnik. — Propongo la modificación de la primera parte del artículo en discusión, en la siguiente forma: «Las disposiciones sobre salario vital mínimo revestirán el carácter de orden público y serán irrenunciables.»

Son las disposiciones las que adquieren el carácter de orden público, y no el salario vital mínimo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Pena. — Estoy consultando con otros miembros de la comisión.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Fiol.

Sr. Fiol. — Era para acotar, lo mismo que el señor diputado Schaposnik, que las disposiciones de esta ley revisten —y no revestirán— carácter de orden público y son irrenunciables.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Domingorena.

Sr. Domingorena. — Considero más correcta la redacción que propone el señor diputado, en el sentido de que debe señalarse que las disposiciones de esta ley revisten carácter de orden público.

Lo que no alcanzo a comprender es a qué se debe que señalemos —a renglón seguido— que son irrenunciables. Si las disposiciones son de orden público, son irrenunciables. No sé qué motivos ha tenido la comisión para hacer este agregado, que me parece que es una redundancia.

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿Acepta la comisión las modificaciones propuestas por los señores diputados Schaposnik y Fiol, y la supresión que propone el señor diputado Domingorena?

Sr. Pena. — La comisión acepta la modificación propuesta por el señor diputado Schaposnik, en cuanto se cambia la primera parte del artículo refiriéndose a las disposiciones sobre salario vital mínimo, y también la supresión de los términos «y será irrenunciable», que en esta redacción sólo tenían un sentido afirmativo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿La modificación propuesta por el señor diputado Schaposnik acoge la sugestión del señor diputado Fiol?

Sr. Fiol. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pizarro.

Sr. Pizarro. — Para pedir a los miembros de la comisión que vieran la posibilidad de cambiar la expresión «por causa alguna podrán abonarse...». Me parece mejor redacción decir: «Por ninguna causa podrán abonarse...».

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿Acepta la comisión la modificación propuesta por el señor diputado Pizarro?

Sr. Pena. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Torreiro.

Sr. Torreiro. — Para referirme a la supresión que propone la comisión al último párrafo del artículo 4º, que se refiere a las remuneraciones convenidas en razón de la mayor productividad, incentivaciones, etcétera.

De acuerdo con lo manifestado por el señor miembro informante, de que en la práctica habría sido ilusorio o desvirtuado este tipo de remuneraciones, si no entendí mal, se trasladaría este párrafo, con variantes, al artículo 9º, para que el consejo verificara en cada caso si corresponde o no ser consideradas en ese carácter.

Esa misma razón, de que en la práctica ha sido desvirtuada esta manera de retribución convenida contractualmente, creo que aconseja mantener el párrafo tal cual lo redactó originalmente la comisión, para que quede individualizado el carácter de remuneración contractual al margen del mínimo vital y móvil.

De manera tal que sugiero que la comisión advierta que para evitar traslados de las actuales remuneraciones al salario mínimo, vital y móvil y para que en lo sucesivo no se haga jugar este tipo de remuneraciones con sentido confuso, se mantenga la distinción, aclarando perfectamente que no forma parte del salario mínimo, vital y móvil —tal cual lo decía el despacho original— este tipo de remuneración, ya sea por incentivación, mayor productividad, etcétera.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Carreira.

Sr. Carreira. — Deseo pedir a la comisión que mantenga el dictamen tal como está redactado.

La traslación de este párrafo al artículo 9º no va a aclarar el asunto, en cambio, su supresión deja abiertas las puertas al sistema del stajanovismo en materia de salarios. Rogaría a la comisión que mantenga la redacción, porque es más clara y más precisa y no podrá traer las preocupaciones que el señor diputado Pena anunció.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Pena. — Señor presidente: la comisión mantiene el criterio sustentado con respecto a la supresión del último párrafo del artículo 4º, en virtud de las razones que he dado y por considerar que el Consejo Nacional de Salario, al estar facultado por el artículo 9º para determinar en cada caso las remuneraciones o conceptos que no deben integrar el salario mínimo vital y móvil, tendrá la suficiente elasticidad para ajustarse mejor a una realidad ya conocida.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por Secretaría se dará lectura del artículo 4º con la redacción aceptada por la comisión.

Sr. Secretario (Oliver). — El artículo 4º quedaría así redactado: «Las disposiciones sobre salario vital mínimo revisten el carácter de orden público. Por ninguna causa podrán abonarse sueldos o salarios inferiores a los que se fijan de conformidad con la presente ley, ni podrán los mismos ser disminuidos por contratos individuales o convenciones colectivas, siendo nula toda disposición o cláusula salarial en contrario.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a llamar para votar el artículo 4º.

—Se llama para votar.

Sr. Mujica. — Solicito a la Presidencia exhortar a los señores diputados a que no abandonen el recinto, ya que la Cámara pierde mucho tiempo con estas esperas.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia exhorta a los señores diputados en el sentido sugerido por el señor diputado Mujica.

Se va a votar el artículo 4º con la redacción aceptada por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Martínez Raymonda. — Para ser coherentes con la posición sustentada, proponemos como agregado al artículo 4º el párrafo que ha sido suprimido por la comisión, y pedimos que se vote sin discusión.

Sr. Alfonsín. — Con la votación practicada el artículo ha quedado aprobado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La votación reciente ha aprobado la primera parte del artículo 4º, y el señor diputado Martínez Raymonda solicita que se mantenga la segunda parte del artículo y que se vote su proposición.

Se va a votar si se mantiene la segunda parte del artículo 4º.

— Resulta negativa.

— Sin observaciones, se aprueba el artículo 5º.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 6º.

Por Secretaría se enunciarán las modificaciones propuestas.

Sr. Secretario (Oliver). — En el artículo 6º hay una disidencia parcial que establece que el presidente del consejo debe ser designado por éste de entre los representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La comisión no propone reformas.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Serú García.

Sr. Serú García. — Voy a proponer que se incluya en este artículo una modificación en cuanto a la designación del presidente, la que por otra parte ya se ha leído por Secretaría.

El fundamento es muy breve y sencillo. La jerarquía institucional del organismo que se va a crear, de acuerdo con el proyecto de ley que estamos considerando, obliga, a nuestro juicio, a dejar en libertad de acción a los miembros del consejo a los fines de la elección de su presidente. Además, debemos tener en cuenta que de todas maneras no habrá de ser una elección con la amplitud que podría suponerse por cuanto estaría restringida a los dos representantes del Ministerio de Trabajo. Pero, por lo menos, permitiremos que los miembros del consejo puedan optar entre uno u otro, y que el presidente no sea impuesto a través de una elección efectuada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Sr. Bobillo. — Pero eso no ocurre en ningún organismo autárquico, señor diputado.

Sr. Caro. — Depende de lo que diga la ley, señor diputado.

Sr. Serú García. — De todos modos, contestando la interrupción que me hace el señor diputado Bobillo, deseo decir que no creo que sea definitiva la circunstancia de que en algunos organismos autárquicos no se haya seguido este temperamento.

El organismo que vamos a crear tiene mucha importancia, y además la Cámara tendrá que admitir que en el seno de dicho instituto se van a enfrentar casi permanentemente por lo menos dos importantísimos sectores de la actividad nacional y en alguna medida la elección de presidente por parte de sus integrantes significará una garantía más de ecuanimidad, de ponderación y de imparcialidad. Esta garantía no se ofrece en la misma amplitud y con los mismos alcances si el presidente es señalado, designado o impuesto por el Poder Ejecutivo.

Creo que por respeto al organismo que estamos creando debemos acordar esta mínima posibilidad en el sentido de que los miembros del

consejo elijan su titular entre los dos representantes del Ministerio de Trabajo.

Sr. Elena. — Esa es la opinión del señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia desearía aclarar que la modificación leída por Secretaría no es la que propone la comisión, que es una disidencia parcial.

Sr. Serú García. — Quiero hacer una aclaración, señor presidente.

Mis palabras han tenido por objeto fundamentar la disidencia parcial que se ha leído por Secretaría.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Fiol.

Sr. Fiol. — Voy a proponer un agregado al artículo en discusión: que se incluya la palabra «renuncia» como una de las causales de reemplazo de los titulares. Es decir, que el final del párrafo primero quedaría redactado en los siguientes términos: «... todos con sus respectivos suplentes, que reemplazarán a los titulares en caso de renuncia, ausencia, licencia, enfermedad o fallecimiento».

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Salado.

Sr. Salado. — Señor presidente: muy brevemente voy a fundar una discrepancia parcial de mi bloque en cuanto a la composición del Consejo de Salario Mínimo que hemos aprobado.

De acuerdo con lo proyectado por la mayoría los representantes gubernamentales serían cuatro: dos por el Ministerio de Trabajo y dos por el de Economía. Nuestro bloque propone que de esos dos representantes del Ministerio de Economía quede solamente uno, con el fin de que el otro cargo sea cubierto por un representante del Consejo Nacional de Desarrollo.

Así lo proponemos, porque la fijación del salario mínimo, al fin y al cabo, y en definitiva, va a influir en toda la política salarial y en todos los aspectos que hacen a nuestro desarrollo, sostenimiento y mejoramiento del sistema económico nacional.

También brevemente quiero fundar otra discrepancia parcial. Entre las causales de reemplazo de los miembros del consejo queremos que se agregue la de cesación, porque puede ocurrir que un miembro que represente a entidades gremiales o empresarias no responda a la confianza que las instituciones le prestaron, en cuyo caso las mismas podrían quitarle esa representación.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Pena. — La comisión acepta el agregado propuesto por el señor diputado Fiol, como así la modificación sugerida por el señor diputado Serú García. Los últimos términos del artículo dirían: «El presidente del consejo debe ser designado de entre los representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.»

La comisión no acepta la sugerencia del señor diputado Salado, pues el Consejo Nacional de

Desarrollo es una institución que depende del Ministerio de Economía y no tiene, digamos, categoría institucional. Supongo que el señor ministro de Economía cuando proponga sus representantes ante el Consejo Nacional de Salario tendrá en cuenta, incluso, la sugerencia del señor diputado Salado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Después de la palabra «renuncia», propuesta por el señor diputado Fiol, y aceptada por la comisión, el señor diputado Salado propone agregar la palabra «cesación».

Sr. Pena. — De acuerdo con los términos del señor diputado Salado se trataría de una revocación, más que de una cesación.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Balbi.

Sr. Balbi. — Refiriéndome exclusivamente a la forma literal del artículo, consulto a la comisión si no sería mejor expresar que los suplentes reemplazarán a los titulares por su orden en caso de vacancia, sin determinar específicamente cuáles son las causas de esa vacancia.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Luco.

Sr. Luco. — Desearía que la comisión aclarara el significado que da a la última parte del artículo, cuando se dice que el organismo funcionará como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Sr. Pena. — Porque es a través del Ministerio de Trabajo que el organismo mantendrá sus relaciones con el Poder Ejecutivo, que es unipersonal en nuestro país.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Fiol.

Sr. Fiol. — Voy a proponer otro agregado, al final del artículo. Consistiría en agregar las palabras «titular o suplente» después de «funcionario», para prever el caso de ausencia del presidente. De esta manera siempre presidiría el consejo el representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Héctor F. Bravo.

Sr. Bravo (H. F.). — Estamos tratando simultáneamente varias cosas distintas. Yo lo deploro, pero así se ha presentado la discusión.

Se ha propuesto reemplazar los términos «ausencia, licencia, enfermedad o fallecimiento» por el de «vacancia». Entiendo que este cambio no sería acertado, por cuanto la última expresión hace referencia a una ausencia definitiva y no a los casos de ausencia transitoria que también contempla este artículo. Por lo tanto, considero que debe mantenerse la redacción propuesta por la comisión.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Balestra.

Sr. Balestra. — Precisamente para referirme a lo que acaba de decir el señor diputado Bravo y proponer un término más amplio.

El criterio genérico sería el de vacancia, pero como la licencia no puede estar comprendida en la vacancia, propongo que se diga «en caso de licencia o de vacancia».

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — La comisión ha adelantado por mi intermedio la aceptación de la incorporación al artículo del término «renuncia», sugerido por el señor diputado Fiol, y la suplantación de la última frase por el agregado propuesto por el señor diputado Serú García. Considero que las otras incorporaciones pedidas no satisfacen a la comisión y por lo tanto no serán aceptadas.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por Secretaría se va a dar lectura a la redacción definitiva del artículo 6º.

Sr. Secretario (Oliver). — Quedaría redactado de la siguiente manera, con las modificaciones aceptadas por la comisión: «El consejo estará integrado por cuatro representantes estatales, dos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y dos por el Ministerio de Economía, cuatro de los trabajadores y cuatro de los empleadores, todos con sus respectivos suplentes, que reemplazarán a los titulares en caso de renuncia, ausencia, licencia, enfermedad o fallecimiento. Funcionará como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El presidente del consejo debe ser designado por éste entre los representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.»

Sr. Fiol. — En caso de no estar el presidente, ¿quién lo reemplaza?

Sr. Pena. — Señor presidente: creo que, en el afán de mejorar la redacción del proyecto, algunos diputados están entrando en un terreno que debería quedar librado a las disposiciones reglamentarias. Si continuamos así, vamos a reglamentar hoy mismo la ley, sin la serenidad suficiente que se necesita para ello.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 6º del dictamen de la comisión, con la nueva redacción leída por Secretaría.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 7º.

Por Secretaría se dará cuenta de las modificaciones propuestas.

Sr. Secretario (Oliver). — El artículo 7º, según la disidencia parcial presentada por algunos señores diputados, diría: «La representación de los trabajadores en el consejo debe ser designada a propuesta de la Confederación General del Trabajo.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Salado.

Sr. Salado. — En esta oportunidad quiero fundamentar brevemente las razones que tiene nuestro bloque para discrepar parcialmente con el dictamen de la mayoría y, además, proponer

un agregado, que en este momento hago llegar a la mesa de la Presidencia.

En cuanto a la representación de los trabajadores en el Consejo Nacional del Salario, a los efectos de que esté unificada la personería que de hecho se da desde hace mucho tiempo en el país y para que no haya posibilidades de desmembramiento de sus integrantes, nuestro bloque considera que las designaciones deben ser hechas por la Confederación General del Trabajo. Proponemos esto plenamente conscientes de que no hay ninguna otra institución laboral de carácter central que agrupe en su seno a la inmensa mayoría de los trabajadores del país. La Confederación General del Trabajo es la única institución organizada cuya personería gremial está reconocida para todos los efectos en nuestro país. Podríamos, además, mencionar en la historia laboral del país cuál es la participación de los trabajadores seriamente representados por los responsables de la conducción gremial de la central obrera. Razones de economía práctica, a fin de lograr textos concretos de mayor facilidad de aplicación, nos impulsan a decir que la representación obrera en el seno del consejo debe estar dada por la Confederación General del Trabajo. Orgánicamente, legalmente, estatutariamente, la representación de los trabajadores del país está en ese organismo central.

Por ello proponemos una modificación al dictamen de la mayoría, y si bien es cierto que se podrían formular algunas objeciones, entiendo que eso no toca a las organizaciones de obreros argentinos, sino a otras instituciones, como las de los empresarios, cuya personería no está unificada.

Por lo tanto, reitero la posición del bloque demócrata cristiano de otorgar a quien corresponde, por la naturaleza de las cosas, por las razones legales que están en consideración y que por su evidencia no es necesario expresar ni explicar con demasiada largueza en razones y en tiempo, que ésa es la única representación que corresponde en este organismo de salarios, porque si alguien debe tener la defensa de los derechos de los trabajadores es quien los representa organizadamente, que es la Confederación General del Trabajo.

Quiero referirme también a este agregado que nosotros proponemos. Primeramente, queremos que la última parte de este artículo sea suprimida del texto de la ley, porque esa parte del artículo que se refiere a las designaciones de oficio que podría hacer el Poder Ejecutivo en caso de ausencia o renuncia de algunos de sus miembros a concurrir a las sesiones va a ser prácticamente un instrumento dilatorio de las decisiones que deba tomar este organismo. Lo digo, señor presidente, porque aquí podría haber muchos remisos en cumplir con la ley. Y nosotros, los legisladores, somos los que estamos obligados a velar por la continuidad de los organismos que creamos por ley.

Y esto debe ser así, señor presidente, porque si alguno se resiste a concurrir a las sesiones o si alguna de las entidades consideradas, de acuerdo con lo que dice el artículo, como más representativas, simplemente se negara a formular la propuesta, las designaciones se harían de oficio por el Poder Ejecutivo, y es obvio que así sea. Nosotros entendemos que las posibilidades de mantenimiento y de continuidad de este organismo son nulas con esta disposición, y, por lo tanto, pedimos su supresión.

Vamos a proponer un texto concreto en reemplazo de esta supresión, y lo hacemos con un criterio un poco reglamentarista, quizá con un afán de darle seguridad jurídica a nuestras instituciones. Queremos —y así hacemos llegar el texto a la Presidencia— que quede bien claro que nosotros proponemos que el consejo funcionará con quórum de la mitad más uno de sus miembros y podrá tomar decisiones válidas con mayoría simple de votos. Deberá constituirse y comenzar a funcionar dentro del plazo que establece la ley, aun cuando alguna o algunas de sus representaciones no estuviera designada o se negara a integrarlo. Igual procedimiento se seguirá si, una vez constituido, alguno o algunos de sus miembros se retiraran del organismo sin que se designe reemplazantes.

Si alguna o algunas de las representaciones en el consejo obstruyeran su normal funcionamiento impidiendo la formación del quórum legal, el organismo podrá tomar resoluciones válidas por mayoría simple de votos de sus miembros presentes. La reglamentación tipificará los actos de obstrucción a que se alude en este artículo. En caso de empate en las votaciones, el presidente tendrá doble voto.

Con esto, señor presidente, queremos asegurar la posibilidad de funcionamiento de los organismos que nosotros creamos. Así brevemente dejo expresadas las razones de nuestra discrepancia y enunciado el texto que reemplaza al que pedimos suprimir.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Muñiz.

Sr. Muñiz. — El artículo séptimo dice que «los miembros del consejo serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de los ministros de Trabajo y Seguridad Social y Economía, de la o las organizaciones sindicales con personería gremial más representativa y de la o las entidades empresarias más representativas».

Estamos ante un error evidente de la comisión. El dictamen deja librado a la apreciación subjetiva del poder administrador, el Poder Ejecutivo, la determinación de cuál o cuáles son las entidades más representativas del movimiento obrero, facultad que puede llevar a que se cometan serios traspiés, sobre todo cuando no se dan los elementos necesarios para tipificar —diré así— a las entidades más representativas.

El dictamen debe recoger la realidad argentina, la que consiste, sencillamente, en que los trabajadores han organizado sus gremios y éstos se han confederado en una central madre: la Confederación General del Trabajo. La Confederación General del Trabajo ha nacido por obra de la voluntad y decisión de los trabajadores, y posteriormente, disposiciones legales que están en el recuerdo de todos, han reconocido a la CGT personería para tratar con el gobierno a virtud, precisamente, de ser la representante de los trabajadores argentinos.

No me explico, en consecuencia, por qué el dictamen trae la novedad, que comporta una desautorización a la Confederación General del Trabajo, de dar intervención al ministro de Trabajo y Seguridad Social para que sea éste quien elija, de entre las entidades más representativas del movimiento obrero, a los trabajadores que han de integrar el consejo. Eso no puede ser, salvo que nos proponamos introducir un elemento de desorden. La CGT tiene personería; se la ha reconocido el gobierno y la reconocemos todos. Y aunque no mediase reconocimiento legal, estamos ante un hecho, ante una realidad.

En el mundo entero los gremios de trabajadores están confederados en centrales obreras, y en la Argentina también. Son las centrales obreras las que mantienen las relaciones oficiales con el gobierno y las que designan los representantes de los trabajadores en las entidades en que tienen puestos.

Por otra parte, advierto que la disposición del artículo 7º reconoce antecedentes de una muy mala experiencia. Se han producido problemas muy serios cuando ha habido que designar representantes gremiales ante organismos internacionales compuestos por trabajadores, representantes gubernamentales y empresarios, como, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, Poderes Ejecutivos de épocas anteriores han manejado discrecionalmente, a piacere, la atribución para elegir los representantes obreros de entre los sindicatos de mayor representatividad o de mayor autenticidad, volcando sus simpatías por los que en el momento les interesaba políticamente, o por los que sustentaban una posición determinada, pero muy lejos de tener en cuenta a los sindicatos realmente representativos del movimiento obrero. Esto fue en su hora —y debe estar en la memoria de muchos— fuente de muy serios conflictos que provocaron verdadero desagrado y molestias en el movimiento obrero.

Por las razones muy brevemente expuestas, insisto en que la comisión acepte la sugestión contemplada en el dictamen de la minoría en el sentido de seguir reconociendo a la Confederación General del Trabajo como la única central obrera representativa de los intereses de los trabajadores argentinos.

Es verdad que hay otras centrales obreras. No lo ignoro; las conozco a todas. Pero están muy lejos de tener la representatividad de una parte apreciable de los trabajadores de nuestro

país. Son centrales obreras integradas por hombres que merecen mi mayor respeto y consideración; algunos de ellos viejos luchadores que siguen con la responsabilidad de dirigirlos. Pero es una realidad que nadie desconoce; reitero, que no representan a un número importante de obreros y empleados argentinos. En cambio, la CGT sí.

Sr. Mujica. — ¿Y la proporcionalidad?

Sr. Muñiz. — ¿Qué tiene que ver la proporcionalidad en este momento de mi exposición? No alcanzo a comprender el propósito de la pregunta. Dejemos la proporcionalidad para más adelante. La proporcionalidad ya existe en el ordenamiento interno de la CGT, pues el sistema electoral vigente asegura que los trabajadores estén representados por ese método en la CGT.

Descuento, señor diputado Mujica, que sostendrá usted el criterio de la proporcionalidad cuando llegue la hora de aplicarlo al sufragio universal.

Por lo expuesto, y reiterando que la proporcionalidad no tiene nada que hacer en orden al artículo en debate, pero que sí es necesario que en una ley tan importante como la que considera la Honorable Cámara se reconozca la personería de la CGT para que sea ésta quien designe los representantes obreros y no el ministro de Trabajo —que entre los que desempeñaron la cartera hemos tenido algunos muy poco recomendables, con los debidos respetos para el actual, que por ahora parece que anda bien y esperamos que siga mejor—, termino afirmando que los representantes de los trabajadores deben ser elegidos por éstos, es decir, por la CGT.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Luco.

Sr. Luco. — La disidencia parcial que acaba de ser fundada y a la que, naturalmente, adhiero, tiene un sentido que ya explicaron los señores diputados Salado y Muñiz.

Para no abundar en detalles, quiero llamar a la reflexión a los miembros de la comisión y, especialmente, a la bancada del radicalismo del pueblo, que advierto que no tiene intenciones de reformar el artículo, que debe tener la coherencia en sostener la misma posición que adoptó cuando se consideró la ley de abastecimiento.

El Consejo Nacional de Abastecimiento, creado por el voto de la mayoría del radicalismo del pueblo, se integró con representantes —decía la ley— de la CGT. No existió en ese caso este juego dual, curioso y sospechoso «de la entidad o entidades más representativas».

De manera que para no abundar en detalles les solicito que tengan memoria y coherencia, y que en esta ocasión procedan igual que entonces. No hay ninguna duda de que la CGT tiene existencia reconocida, que actúa en el ámbito nacional, que tiene relaciones formales con el gobierno y, en consecuencia, no se ve, salvo que

haya intenciones no confesadas, adónde conduce esta dualidad que el artículo contiene.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pérez Gallart.

Sr. Pérez Gallart. — El proyecto del Poder Ejecutivo se refería concretamente, en cuanto a la integración de este organismo, a la central obrera más representativa.

Si bien no seguía un criterio idéntico al de la ley nacional de abastecimiento, que mencionó el señor diputado Luco, ya que no nombraba a la Confederación General del Trabajo, quedaba fuera de toda duda que al referirse a la central obrera más representativa no podía aludir a otro organismo que no fuera la CGT. Ya han señalado bien los señores diputados preopinantes que ésa es una realidad indiscutible.

Prácticamente, la única central obrera con vigencia, con representatividad, es la CGT; pero en este dictamen se introduce un criterio de pluralidad que no sé si atiende a la proporcionalidad a que se refería recién un señor diputado, o a la divisibilidad a la que he tenido ocasión de referirme anteriormente aquí, porque no hay duda que entre la fecha en que se sancionó la ley de abastecimiento y esta en que estamos discutiendo el proyecto de salario mínimo vital y móvil, han ocurrido algunos acontecimientos.

En aquel momento existía una relación cordial entre el gobierno y las organizaciones del trabajo; no se había puesto en marcha el plan de lucha en su segunda etapa, mientras que hoy las cosas han cambiado. Por ello, crear factores que permitan la disociación y la división de la clase trabajadora puede ser tal vez la única salida imaginada por algunas personas que no tienen sensibilidad para resolver los problemas, ni decisión para reprimir las consecuencias emergentes de que esos problemas no se resuelven.

Sr. Bobillo. — Lo que sobra, precisamente, a este gobierno es sensibilidad y decisión.

Sr. Pérez Gallart. — No sé si esta intencionalidad deberá calificarse con una palabra que estuvo muy en boga en otra época; no sé si será o no maquiavelismo, pero de todas maneras es conveniente que las intenciones se muestren con claridad.

Este sistema pluralista consistente en dar representación a una ó más organizaciones que sean, a criterio de la autoridad de aplicación, las más representativas, puede llevar a que aparezcan centrales que sean simplemente un sello de goma y que no persigan otra finalidad que la de apoyar a una determinada política oficial. Ya se han hecho denuncias en este sentido, y yo me he referido al tema en una ocasión anterior, adelantando que voy a volver a hacerlo en una ocasión próxima, por lo que en este momento dejo simplemente planteado el problema.

Aquí debemos hablar de manera inequívoca: hay una sola central obrera representativa y las demás serán obra muy respetable, como decía el señor diputado Muñiz, pero responden a de-

terminadas corrientes o tendencias políticas que no consultan el pensamiento y las tendencias de los trabajadores.

Por estos motivos, nuestro bloque apoya la sanción de este artículo con la modificación contenida en la disidencia suscrita por el señor diputado Monte juntamente con otros señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Cantoni.

Sr. Cantoni. — Para la Confederación de Partidos Provinciales en este artículo debe seguirse el mismo concepto que se aplicara en la ley nacional de abastecimiento, por cuanto creemos que es peligroso dividir al movimiento obrero argentino. Por estas razones, votaremos en favor de la disidencia parcial presentada al dictamen de mayoría.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Jofré.

Sr. Jofré. — Al escuchar algunas de las exposiciones hechas me da la sensación de que se piensa que esta ley será algo así como una especie de satélite que estará libre por los espacios siderales y que no estará vinculado a la Tierra y a la legislación vigente.

En nuestro país hay un cuerpo de legislación constituido por leyes que están intercomunicadas y en relación de interdependencia. De modo que si en la ley que vamos a sancionar se incluye una disposición, ella estará vinculada con otras disposiciones legales en vigencia. Así, es evidente que este artículo 7º se halla vinculado con la ley de asociaciones profesionales, ya que esta última reglamenta muy detenidamente sobre cuáles son las asociaciones representativas del movimiento sindical argentino. Esa ley admite varios tipos de organizaciones, y tanto es así que establece que se reconocerá personería gremial a las asociaciones más representativas de cada gremio que reúnan determinadas características y cumplen ciertas condiciones.

Cuando nosotros hablamos en este proyecto de las «organizaciones sindicales con personería gremial más representativas» no estamos refiriéndonos, lógicamente, a asociaciones que puedan aparecer en la Luna; estamos hablando de las asociaciones más representativas que tienen personería gremial de acuerdo con la ley de asociaciones profesionales.

De manera que con esto nosotros no cometemos ninguna injusticia, ni atacamos a nadie, pese a que hasta el Congreso ha sido atacado, y se han ocupado dependencias del Senado en el día de ayer. Pero, de todas maneras, creo que es un error designar aquí a la CGT para que sea la que tenga la representación. Eso sería poner en esta ley un nombre y un apellido, y las leyes no se hacen para ningún sector del país ni para ninguna asociación por más importante y por más cantidad de miembros que tenga. Nosotros debemos legislar en forma absolutamente objetiva, debemos legislar para el presente y para el futuro. De manera que de-

bemos tener en cuenta que si hoy la CGT es un organismo tan poderoso que puede llegar a paralizar el país cuando se le ocurre, podría ser que en el día de mañana no lo sea tanto y que exista otra organización que pueda traer sus representantes.

Por otro lado, puede suceder —y lo que voy a decir ha de ser grato a algunos señores diputados— que la CGT tenga el gesto de decir que no quiere participar en este organismo, como ha pasado con la ley nacional de abastecimiento. Al crearse el Consejo Nacional de Abastecimiento se le ofreció el cargo al que se le había dado nombre y apellido, pero la CGT se dio el gusto de decir que no quería participar.

Por tanto no podemos nosotros hacer una invitación a una entidad, por importante que sea, y a la que yo respeto mucho, porque en algunas cosas es digna de la mayor consideración, aunque en otras es digna de condenación porque no actúa con la serenidad con que debe desenvolverse representando tan importantes intereses como son los obreros. Creo que sería un gravísimo error modificar el texto del artículo que ha sido tan bien y tan previsoriamente redactado.

Por estas razones, vamos a votar por el artículo tal cual ha sido despachado. (*¡Muy bien!*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Raúl Fernández.

Sr. Fernández (R.). — Señor presidente: el artículo 7º ha sido redactado por la comisión consultando los buenos antecedentes; antecedentes que han olvidado los señores diputados integrantes del bloque justicialista, y a los que tendría que hacer una acusación de falta de coherencia y debilidad de memoria, porque en el decreto ley 33.302/45, al cual hemos hecho referencia hace un momento, se establece precisamente lo mismo que ahora se determina en el artículo 7º.

Sr. Caro. — No lo redactamos nosotros, señor diputado.

Sr. Fernández (R.). — El decreto tiene la filiación política a la que pertenecen los señores diputados. Tiene continuidad histórica, como muy bien me acota el señor diputado García.

El artículo 9º del capítulo II del directorio dice que él estará compuesto por el presidente y doce directores titulares, de los cuales seis serán representantes de los empleadores y seis de los empleados y obreros designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de las asociaciones gremiales más representativas de las actividades industriales, comerciales y agropecuarias con personería gremial legalmente reconocida.

Los radicales del pueblo no nos movemos por ningún resentimiento. No hacemos cuestiones chicas; siempre tratamos de levantar la puntería. No tenemos gestos inamistosos para con la CGT. No nos movemos por mezquindades. Por eso no debe verse en la redacción de este artículo ningún propósito persecutorio a la CGT,

entidad que respetamos pese a que ella, o algunos de sus sectores, no nos respetan.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Schaposnik.

Sr. Schaposnik. — Voy a repetir parte de los conceptos vertidos por el señor diputado Jofré...

Sr. Caro. — Trabajadores del mundo, uníos.

Sr. Schaposnik. — Señor diputado Caro: yo no le pido razón de sus amistades, que las ha tenido y muchas.

Sr. Caro. — Y las tengo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Ruego al señor diputado Schaposnik se dirija a la Presidencia.

Sr. Schaposnik. — Y las tendrá.

Nosotros no somos autores de la legislación que en estos momentos organiza a los sindicatos en nuestro país. La ley de asociaciones profesionales emplea la misma terminología que usa en este momento el proyecto de ley que estamos considerando. El artículo 26 de la ley 14.455 dice que las federaciones y confederaciones más representativas tendrán derecho a gozar de personería gremial en las condiciones del artículo 18 de esa ley; el artículo 27 dice que el carácter de federación o confederación más representativa estará dado por el número y la significación representativa de los sindicatos o federaciones a ellas adheridos. El artículo 28 señala que las federaciones y confederaciones con personería gremial podrán ejercer los derechos que la presente ley acuerda a las asociaciones de primer grado con personería gremial, con las delimitaciones que en relación con los respectivos sindicatos y federaciones establezcan los estatutos de las mismas. Y el artículo 29 se refiere a las asociaciones de primer grado, porque la personería puede ser quitada a un organismo cuando deja de ser el más representativo, y establece en qué forma puede dejar de ser más representativo.

No estamos sancionando una ley para un momento determinado, sino que aspiramos que sea para siempre. No podemos determinar en la ley que proyectamos cómo se gana o cómo se pierde la personería gremial, pues ello es función de la ley permanente que organiza la vida sindical.

De tal manera que el texto del artículo 7º guarda concordancia, y es el artículo 27 de la ley de asociaciones profesionales el que determina cuál es la entidad más representativa. No es el Poder Ejecutivo quien arbitrariamente lo dispone, sino que es la propia ley la que lo determina.

Por otra parte, y a fin de que guarde concordancia con lo dispuesto en la ley 14.445, que establece una duración máxima para los representantes sindicales de dos años, no pudiendo ser reelegidos, propongo que se modifique el término de duración del mandato a que se refiere el proyecto que debatimos, pues los tres años que allí se consignan son superiores al término que se establece en la ley 14.455.

Al exceder la duración del mandato, podría también exceder la confianza que le merece el representante ante un cambio de orientación en los organismos gremiales.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Domingorena.

Sr. Domingorena. — La discusión centrada en torno a la disposición del artículo 7º de la ley que estamos tratando pone en evidencia el avance que se pretende hacer sobre la central obrera.

Varios señores diputados. — No es exacto.

Sr. Domingorena. — Ruego a los señores diputados que antes de decirme que no es cierto lo que he manifestado, escuchen mi exposición, como yo lo he hecho con las de los demás legisladores.

Sostengo que el Poder Ejecutivo o el gobierno se va corriendo paulatinamente, y casi diría yo, en los últimos días en forma acelerada, de la disposición que tuvo cuando asumió el poder de mantener relaciones con la central obrera, con la CGT, y que estas modificaciones en el trato se van dando en la medida en que la central obrera discute su derecho frente al poder público. Llama la atención que se pretenda dar explicaciones respecto de la redacción del artículo 7º, que margina en forma notoria a la central obrera, y llama mucho más la atención si analizamos los cambios que se van operando en el gobierno a medida que el enfrentamiento entre la central obrera y aquél acusa ya seguramente características muy notorias.

El 13 de abril envía el Poder Ejecutivo al Congreso el anteproyecto de salario mínimo vital y móvil, que en su artículo 7º establece: «los miembros que integran el Consejo serán designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta de los ministros de Trabajo y Seguridad Social, Economía y de Obras y Servicios Públicos; de la central de trabajadores con personería gremial más representativa y de la o las entidades gremiales más representativas».

Con el correr de los días, ya pronto el Congreso a sancionar esta ley, se nota una variante digna de señalarse con toda claridad y vigor, porque seguramente trasunta una modificación en los planes del gobierno con respecto a las organizaciones obreras. Este artículo que estamos tratando ya elude la designación de organizaciones sindicales centrales y se refiere a una pluralidad de organizaciones sindicales. Ya no se usa el término que traía el proyecto del Poder Ejecutivo, que era específicamente «central de trabajadores con personería gremial». De manera que, tal cual está redactado ese artículo 7º, podría darse el caso —se va a dar— de que se refiera a organizaciones sindicales con personería y no a organizaciones sindicales centrales. Entonces ya estamos en plena anarquía con respecto a las instituciones gremiales. Esto es de una claridad meridiana.

Me llama la atención que se pretenda relacionar esta disposición del artículo 7º con las disposiciones de la ley de asociaciones profe-

sionales, y que el representante del socialismo democrático señale la coincidencia de la redacción de este artículo con lo establecido en esa ley. La ley de asociaciones profesionales habla de sindicatos más representativos, porque regla precisamente los sectores mayoritarios y otorga personería jurídica a aquellos que acusan una mayor representatividad. Con esta disposición la ley persigue evitar la anarquía en los sindicatos: establecida la mayoría de un sindicato, la ley le reconoce la personería jurídica con la finalidad de evitar la anarquía del movimiento obrero, de tener sindicatos bien constituidos, y de esa manera una central obrera representativa y única, que sea la expresión de la masa trabajadora.

De manera que nada tiene que ver la ley de asociaciones profesionales cuando establece estas cosas en su contexto, comparado con el artículo 7º que estamos analizando. Se trata allá, de otorgar la personería jurídica a los sectores más representativos, y acá a la designación de los representantes de esos organismos sindicales en esta entidad. De tal manera que esto es muy claro y no necesita de mayor argumentación para ponerlo de manifiesto.

¿Qué persigue el gobierno, o el sector mayoritario, al reformar la disposición que tenía el mensaje del Poder Ejecutivo respecto a las organizaciones sindicales centrales? ¿Será una casualidad la omisión de la palabra «central» o «centrales» —discrepo con el plural, porque creo que tenemos que aspirar a consolidar una sola organización central— o será que ahora vamos a ir a la representatividad de los sindicatos, que es una cosa muy distinta de la representación de fuerzas centrales, aunque haya dos, tres o cuatro? ¿Qué se persigue con esto? Se persigue, sin ninguna duda —y lo reiteramos hoy—, anarquizar el movimiento obrero.

Hace tiempo ya que el señor diputado Pérez Gallart, de nuestro bloque, presentó un proyecto de interpelación al señor ministro de Trabajo para que estableciera en el seno de este cuerpo cuál era la política que iba a seguir el gobierno respecto a las organizaciones gremiales. Todavía no se ha fijado la fecha de esa interpelación, pero si avanzamos con esta ley, tal como viene redactada, mucho me temo que la interpelación pueda darse en este recinto cuando ya la Cámara haya resuelto el problema de la marginación de la institución que trataba legalmente de preservar la unidad gremial por una vía tangencial como la que estamos analizando. Esto nos llama poderosamente la atención. Tenemos nuestra sospecha de que el gobierno era tolerante con las organizaciones obreras en la medida en que las organizaciones obreras resultaban tolerantes con el gobierno. Vale decir que estábamos en una relación de tipo contractual que respetaríamos en la medida en que la contraparte se aviniera a nuestras pretensiones, pero que estábamos dispuestos a violar o a desconocer cuando las organizaciones obreras dis-

cutieran al poder público sus derechos. Y esto es lo tremendo que está ocurriendo.

Señalo con estas palabras la disconformidad y la alarma del sector de la Unión Cívica Radical Intransigente, que fue capaz de mantener relaciones con los sindicatos y con las organizaciones obreras, por cierto, cuando éstas levantaron su voz de protesta y enfrentaron a nuestro partido político en función de gobierno, pero que ahora estamos notando que el sector mayoritario...

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Domingorena. — ... el partido político que hizo en su campaña, precisamente, la prédica de respetar las organizaciones obreras...

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvanse los señores diputados no interrumpir al orador.

Sr. Domingorena. — ... está violando las disposiciones de la plataforma y de la prédica que realizó durante toda su campaña, donde blasonaron que iban a ser celosos defensores de una central única de trabajadores, mientras que por este artículo está anarquizando el movimiento sindical y están rompiendo la columna vertebral de una organización gremial que queremos ver consolidada para poder mantener relaciones directas y efectivas en beneficio del país. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Serú García.

Sr. Serú García. — Señor presidente: debo iniciar mi breve participación en este debate felicitando al diputado Domingorena por la claridad con que ha planteado el problema que la Cámara está tratando en estos instantes. Los argumentos que se habían vertido con anterioridad es evidente que en la medida que pretendían afirmarse en disposiciones legales análogas o conceptos de tipo doctrinario no se acomodaban a la realidad de la situación que pretende contemplarse con la modificación que los sectores justicialista, de la Unión Cívica Radical Intransigente, demócrata progresista, socialista argentino y demócrata cristiano propician con respecto al artículo 79, en el sentido de establecer con meridiana claridad que la representación de los trabajadores en el organismo a crearse por la ley que estamos considerando debe estar a cargo de la Confederación General del Trabajo.

En efecto, señor presidente, ya se ha dicho que la relación que pudiera existir con la ley de asociaciones profesionales en absoluto obsta a la modificación que nosotros propiciamos y, muy por el contrario —como bien se ha señalado—, cuando dicha ley hace referencia a las organizaciones más representativas, la hace precisamente con el objeto de determinar a quiénes se debe otorgar la personería gremial.

En nuestro caso no puede haber duda alguna en estos instantes, en mayo de 1964, fecha en que sancionaremos esta ley, que la organización obrera más representativa, con personería gremial y con carácter de central única de trabajadores, es la Confederación General del Trabajo. Si so pretexto de argumentaciones de tipo doctrinario o de otra naturaleza nosotros desconocemos la vigencia o la representatividad de la Confederación General del Trabajo, daremos pie para que esta ley aparezca sospechada de transformarse a breve plazo en instrumento de maniobras intervencionistas del Poder Ejecutivo en el movimiento obrero argentino. Y esto no lo toleraremos, señor presidente.

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Serú García. — La circunstancia por la que atraviesa la República en estos momentos es índice más que significativo para que la prudencia del sector mayoritario, para que la sensibilidad del sector mayoritario, lo hubiera llevado...

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Serú García. — ... a deponer prejuicios de tipo doctrinario o formalistas y a aceptar en seguida la proposición que los bloques a que me he referido han formulado a la Cámara en el sentido de modificar el artículo 79.

Es más, señor presidente: yo tenía mis dudas acerca de la procedencia de esta modificación, y desde luego que esas dudas nacían de mi condición de abogado, porque los argumentos de tipo formalista, doctrinario y legales que se han esgrimido tienen fuerza de convicción. Pero la tenaz oposición que el sector de la mayoría está haciendo a la inclusión de nuestra modificación me demuestra que tenemos la razón, pues lo meramente formal tendría que ceder ante lo substancial, y la representación en el consejo creado por esta ley debe pertenecer entonces específicamente a la Confederación General del Trabajo, porque si no, pienso que aquí hay gato encerrado, señor presidente.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Elena. — Eso corre por su cuenta.

Sr. Serú García. — Nosotros hemos dado un crédito de confianza al Poder Ejecutivo, y lo hemos demostrado a través de nuestra actuación en estas bancas legislativas. Yo sé que se esperaban de nosotros actitudes combatientes muy distintas; pero nos hemos mordido la lengua antes de hacer lugar a las provocaciones baratas, y hemos mantenido una línea de cooperación institucional y de respeto al Poder Ejecutivo. Pero los últimos acontecimientos de estos días, y hasta diría de las últimas horas, nos hacen pensar que es necesario fijar una clara posición

en el problema que estamos tocando. Mantémosle aún esa confianza, pero ya no es tanta como para deponer nuestra actitud y aceptar que en este artículo no se establezca con claridad que es la Confederación General del Trabajo la que debe integrar el consejo creado por la ley que estamos considerando.

Es distinta la situación de 1945, cuando se dictó el decreto 33.302, que el señor diputado Fernández ha tenido la amabilidad, la generosidad y el sentido de justicia de considerarlo como un alto y plausible precedente.

Sr. Elena. — Hable del plan Conintes, de presos políticos...

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvase no interrumpir el señor diputado Elena al orador que está en el uso de la palabra.

Sr. Serú García. — Señor diputado Elena: la sesión ya ha empezado; no es la ocasión habitual para que usted haga uso de la palabra...

Sr. Elena. — No lo he escuchado al señor diputado.

Sr. Serú García. — Decía, señor presidente, que agradezco al señor diputado Fernández la mención que ha hecho en lo que sentimentalmente puede tocar a este bloque, pero hay una diferencia. La diferencia consiste en que el ambiente político-social de diciembre de 1945 aconsejaba una absoluta confianza en el gobierno que en ese momento ejercía el poder público. De tal suerte que no se podía tener dudas sobre la recta aplicación del precepto legal establecido en el decreto ley 33.302. Pero yo confieso que, sin restar aún toda la confianza que hemos otorgado al actual Poder Ejecutivo, entendemos que es una precaución que debemos tomar al establecer con toda claridad en la ley que la Confederación General del Trabajo es el organismo, la central única de los trabajadores, que debe integrar el consejo que se crea en el proyecto de ley en consideración.

Sr. Presidente (Mor Roig) — Tiene la palabra el señor diputado León.

Sr. León. — Señor presidente: la verdad es que no estaba en mi ánimo participar de este debate. Pero, como la gran mayoría de la Cámara, hemos sido sorprendidos por haberse injertado en esta discusión, que yo creo que es importante para el país y para amplios sectores argentinos, una actitud netamente política que nosotros no podemos admitir en silencio.

Se ha pretendido colocar al Poder Ejecutivo en una actitud de especulación frente a una circunstancia accidental en nuestras relaciones con la Confederación General del Trabajo. Pero lo sorprendente es que se sospecha porque así actuaron anteriormente otros sectores políticos argentinos. Este partido tiene derecho, hasta ahora, a no ser sospechado, porque —podemos decirlo con total tranquilidad— no sé si... porque hace poco tiempo que andamos en esto, pero la verdad es que es el único partido argentino que en medio de la confusión general está cumpliendo la programática partidaria.

Sr. Domingorena. — En esto, no.

Sr. León. — En esto y en todo.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Señor diputado Arana no está en el uso de la palabra. La Presidencia le reitera nuevamente que no perturbe el buen orden del debate.

Sr. León. — Hemos escuchado serenamente palabras dichas con anterioridad a las humildes del que está hablando, y el hecho de querer hilyanar una ley que sea útil para el país ha llevado a otros sectores a criticarnos y a pretender encasillarnos en una posición que tiene origen en otros sectores políticos que gobernaron con anterioridad, como lo ha dicho el señor diputado Fernández. Pero lo que nosotros no podemos silenciar, y yo creo que habrá un noventa y cinco por ciento del pueblo argentino que estará de acuerdo con nosotros, porque lo otro es sólo fanatismo e intolerancia, es que este partido político en ningún instante hasta ahora ha pretendido romper una posición de respeto hacia la Confederación General del Trabajo.

Este es el partido que está atendiendo un proceso de acción gremial con una estrategia nueva y casi subversiva, o simplemente subversiva, y es el único partido que no ha movilizó militarmente a ningún obrero de la República, como lo movilizaron los peronistas y la UCRI en este país por haber hecho mucho menos. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Luco. — Los sectores del privilegio...

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvanse no interrumpir los señores diputados.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado León.

Sr. León. — Este es el partido que no tiene un solo diputado que haya votado una ley represiva; éste es el partido que no tiene miembros complicados en la aprobación de leyes represivas en el pasado, a diferencia de otros que después vienen al propio Parlamento a pedir la derogación de las leyes represivas que ellos votaron o consintieron. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*) Este es el partido argentino al que se quiere sospechar de intervención por otros que han vivido en la continua intervención. Este es el partido...

Sr. Serú García. — De la Junta Consultiva.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvase no interrumpir al orador el señor diputado Serú García.

Sr. León. — Este es el partido que vino a abrir las puertas de las cárceles a los presos políticos; éste es el partido argentino que no complica su actitud política...

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Señor diputado Lozano: sírvase no interrumpir.

Sr. León. — Este es el partido que frente a toda esta estrategia —que en medio de la presión de los sectores de la reacción nacional y de la inquietud de los sectores que ven cómo una minoría parcializada de los obreros del país no comprende que para nosotros la voz de mando de la historia es unir definitivamente a los argentinos para construir sobre las cenizas del pasado un porvenir mejor para todos— tiene un presidente de la República y un ministro del Interior que niegan el estado de sitio, con el que otros han gobernado permanentemente, o el estado de guerra interno en que se vivió muchos años en este país. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Este es el partido político que puso en la Constitución del 57 el artículo 14 bis que está creando...

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Mor Roig) — Señor diputado Lozano: por tercera vez lo exhorto a no interrumpir al orador.

Sr. León. — Artículo 14 bis de la Constitución, que está posibilitando la nueva estructura social del país. Con buena voluntad y con sana intención hemos colocado ese artículo 14 bis, y con la colaboración de los argentinos queremos realizar un proceso de democratización social al servicio del equilibrio y la felicidad del hogar de los sectores nacionales.

Yo podría hablar —así como cualquiera de nosotros— largas horas sobre estas cosas que son caras al partido. Lo hago ahora con todo respeto y, para terminar, quiero decir que rompí el silencio que mantenía en este debate porque nuestro bloque no puede aceptar que —con falta de seriedad, o de respeto, jugando a otra idea— se pretenda distorsionar una realidad marcada por este gobierno. Deseo decir que nuestro gobierno, con todos los defectos que se le quieran cargar, es la gran expresión argentina para la solidaridad de todos. En un proceso guiado por una estrategia subversiva no ha detenido a un solo obrero y ha hecho jugar a la justicia. No ha intervenido un solo sindicato, contrariamente a lo que hicieron los correligionarios del señor diputado Serú García en otra época, cuando intervinieron gremios al servicio del único que gobernaba el país.

Estas cosas teníamos que decir las nosotros porque las vivimos. Yo quisiera que votáramos esta ley al servicio de cosas más importantes que las derivadas del engranaje político. Nosotros estamos dispuestos a cualquier tipo de debate, cuando juegue la historia hecha con buena fe y cuando jueguen los grandes sentimientos argentinos unidos a través de nuestro espíritu, para construir un mundo que no sea el del estado de sitio, el mundo de las intervenciones, de las sospechas y del permanente es-

tado de guerra interno; queremos el mundo del que habló Illia: el de la Constitución y la ley argentinas. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos prolongados.*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Gómez Machado.

Sr. Gómez Machado. — Señor presidente: después de las palabras del señor diputado León estoy más convencido que nunca de que se pretende torcer el sentido de la ley de asociaciones profesionales o, por lo menos, de que se pretende injertar a través de otra ley la desvirtuación de la central obrera única.

Me llamó la atención que coincidieran en sus argumentaciones los señores diputados Jofré y Fernández.

Sr. Jofré. — Me siento muy satisfecho de haber coincidido con motivo de una ley de interés nacional. Es la única forma en que voy a coincidir también con otros señores diputados.

Sr. Gómez Machado. — Me llamó la atención —repito— tal coincidencia, cuando ambos dijeron, evidentemente debido a una forma de traición subconsciente, que no estaban legislando para ahora sino para el futuro.

Sr. Mujica. — No vamos a legislar para el pasado.

Sr. Gómez Machado. — ¿Qué significa esta traición subconsciente a que yo aludo? El señor diputado Schaposnik hizo referencia a la ley de asociaciones profesionales sin advertir que el articulado que mencionó se refería a la representatividad para constituir la central obrera única; es decir que las leyes que se dicten después no se pueden referir a la manera de constituir la central obrera única, sino a la central obrera única, a la Confederación General del Trabajo. Por eso, el diputado Fernández y el diputado Jofré hablaron coincidentemente del futuro.

¿Es que acaso se pretende modificar la ley de asociaciones profesionales? ¿Es que acaso en el panorama político actual no coincide este pensamiento con el de la bancada radical del pueblo en el anterior período parlamentario, cuando se negó a votar la ley de asociaciones profesionales y, en obstrucción evidente, se retiró del recinto? ¿Es que no tiene lógica en el proceso histórico inmediato de estos señores representantes que afirman algo en su plataforma, pero que no se animan a decir la verdad al pueblo?

Sr. Elena. — Nos sobra valentía y autoridad moral para poderlo hacer, señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvanse no interrumpir al orador los señores diputados.

Sr. Gómez Machado. — Yo creo en la honradez de los señores diputados, pero advierto, con sorpresa y con temor...

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia ruega a los señores diputados que no interrumpen al orador.

Sr. Jofré. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado? Se la solicito amablemente.

Sr. Gómez Machado. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Jofré.

Sr. Jofré. — Muchas gracias.

Ante el señor diputado que se extraña de que yo coincida con el presidente de un partido democrático, ¿no será que yo también tenga que extrañarme porque el señor diputado coincide en este momento con el sector peronista, al que en alguna oportunidad combatió, y piense que a lo mejor se está gestando un nuevo pacto que firmará el señor Frondizi y cuya firma después negará? (*Risas y aplausos.*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Gómez Machado.

Sr. Gómez Machado. — ¿No será, señor presidente, que esta coincidencia nuestra en la defensa de la ley de asociaciones profesionales que nosotros elaboramos y votamos, es contrapartida de la coincidencia del sector conservador con el radicalismo del pueblo de enfrentamiento a la ley de asociaciones profesionales? Esta es nuestra respuesta.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Gómez Machado. — Yo que lealmente creo en la honradez y en la buena fe de todos los diputados, me permito tomarle la palabra al entusiasta diputado León para pedirle que a fin de evitar cualquier suspicacia o mala interpretación, acepte, en nombre del bloque de la mayoría, el reemplazo de la frase en cuestión, como se hizo en la ley de abastecimiento, lisa y llanamente por el nombre de la Confederación General del Trabajo. Esa sería la demostración más cabal de la lealtad de ese partido político con los principios que expuso en su plataforma, y demostraría también sensibilidad de mayoría que conduce este debate sin que queden suspicacias en el ambiente, además de que, políticamente, tendría repercusión popular.

Pero, advierto por sobre todo el peligro. Al margen de la honradez y de la buena fe, creo que éste es un hecho político y no jurídico, y que está puesto en esta ley intencionadamente; pero, para evitar mi mal pensamiento, invito al bloque de la mayoría a aceptar la modificación sugerida por los sectores de la minoría, y así evitaremos cualquier duda y cualquier sospecha.

Sr. Fiol. — La suspicacia corre por cuenta de los que son suspicaces.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Muñiz para una segunda intervención, correspondiéndole el término reglamentario de cinco minutos.

Sr. Muñiz. — Voy a decir muy pocas palabras dentro de los cinco minutos que me concede el reglamento. Procuraré que sean serenas y objetivas, pronunciadas desde la posición principista del socialismo argentino, es decir, sin la menor preocupación por gobernantes y por go-

biernos porque en la sanción de las leyes los gobiernos y los gobernantes no nos interesan. Lo que nos importa es que la ley recoja un criterio orientador.

Antes de entrar en materia necesito aclararle al señor diputado Jofré, con el que no coincido ni coincidiré jamás en estos asuntos... (*Risas*) que los sindicatos fantasmas a los que me referí no eran lunares sino terrestres. Especialmente bajo la presidencia del general Agustín P. Justo proliferaron aquí, en tierra argentina y no en la luna, para digitar delegaciones obreras a los congresos internacionales.

Con respecto a la pregunta que me formuló el señor diputado Mujica en relación con la proporcionalidad, quiero decirle, porque me parece que mi respuesta no fue del todo completa, que la proporcionalidad que a él preocupa, y a mí también, está expresamente establecida en los textos legales que ha organizado la Confederación General del Trabajo. El congreso de la CGT se integra, en efecto, con delegados elegidos en número proporcional de afiliados de cada sindicato, y el comité central confederal, organismo de significación en la dirección de la central obrera, se compone por el mismo procedimiento. Queda claro, pues, que la proporcionalidad que nosotros queremos para las elecciones nacionales, provinciales y municipales ya es una realidad en la CGT y nos debe servir como un antecedente valioso.

En cuanto a las manifestaciones del señor diputado León, diré que el socialismo argentino, sin atender jamás a circunstancias de momento político ni al color o bandera del gobierno o de los gobernantes, sino por razones principistas, ha combatido tenaz y duramente las movilizaciones militares de trabajadores, las leyes represivas, el estado de guerra interno y toda medida de cualquier naturaleza destinada a perturbar o a reprimir el movimiento obrero, al que deseamos organizado absolutamente libre, como los propios trabajadores lo quieran de acuerdo con los derechos y garantías establecidos en nuestro sistema constitucional.

En ese sentido, como no somos gobierno ni antigobierno confieso con lealtad, como lo hacemos siempre, que hasta este momento no regateamos nuestra complacencia para con el actual Poder Ejecutivo por la conducta comprensiva, prudente y serena con que se comporta en la lucha promovida por los trabajadores contra la voracidad empresaria. Anhele de todo corazón —deseo ferviente de mi partido— que no haya cambio de actitudes en el Poder Ejecutivo, sino que el gobierno se mantenga en su posición respetando y haciendo respetar la acción de los trabajadores libres.

Señor presidente: se ha hecho referencia a la ley de asociaciones profesionales...

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia señala al señor diputado Muñiz que ha expirado el plazo de cinco minutos de que disponía.

Sr. Muñiz. — Solicito que se me concedan dos minutos más para concluir.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Reglamentariamente no corresponde la prórroga, señor diputado.

Sr. Muñiz. — Pero hay asentimiento general, de modo que prosigo. (*Risas.*)

Se ha hecho referencia a la ley de asociaciones profesionales —ley que nosotros defendemos aunque la consideramos perfectible—, en la que hay un artículo que hace expresa referencia a las federaciones y confederaciones. Vale decir, que en la propia ley está la razón o la base de sustentación de la CGT.

Aunque tenía algunas otras cosas que decir, concluyo expresando que abrigo una gran preocupación, preocupación que, expuesta con toda claridad, recoge el temor de que con la mejor buena fe del mundo, con el más noble de los propósitos, ocurra que de votarse el artículo 7º tal como está redactado, se introduzca un factor de división en el movimiento obrero, lo cual será realmente deplorable.

Todos tenemos que bregar por la unidad del movimiento obrero argentino para que en una sola central convivan en paz y armonía las mujeres y hombres de los distintos credos políticos, confesionales, filosóficos o de las más diversas concepciones de vida. Férra unidad del movimiento obrero para que sea fuerte, vigoroso y orgánico, inspirado en los principios que animan la lucha de clase de los trabajadores, de tal manera que el pueblo laborioso se sienta representado e interpretado por una sola y única central obrera, la que los socialistas argentinos queremos, como he anticipado, unida, solidaria y fuerte. La queremos así para la labor revolucionaria, transformadora, orientada a poner punto final a una sociedad como la presente, injusta, de irritantes privilegios y en la que en las horas que corren asistimos al espectáculo de los obreros alzados en lucha por la paz, el pan y la libertad, mientras la voracidad de los empresarios pide para las mujeres y los hombres que hacen la grandeza de la patria, represión policial, cárcel y paredón.

No, señor presidente; eso no puede ser! Tengamos mucho tino, máximo cuidado para no aprobar un artículo que será perjudicial. Vuelvo a repetir que la división del movimiento obrero podrá ser fatal para la clase trabajadora y, consecuentemente, para la República, porque la República es expresión de sus mujeres y de sus hombres de trabajo. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor Pizarro.

Sr. Pizarro. — La consideración de este artículo tal cual ha sido redactado por la comisión, nos ha llevado al problema de la unidad o de la pluralidad sindical, problema de principios práctico-experimentales, que no admite una única solución que valga para todos los tiempos y lugares.

Es cierto que yo no tengo sospechas sobre intenciones divisionistas del movimiento obrero, pero tengo grandes temores de que la redacción del artículo, tal cual está, pueda alentar la división del movimiento obrero. Por eso somos una de las varias minorías que propone un cambio de redacción en el articulado. Pienso que la división del movimiento obrero sería en este momento más funesta y más peligrosa que nunca frente a un capitalismo monolítico que lucha por mantener sus privilegios y sabe que ello le será más fácil atomizando el movimiento libre de los obreros argentinos.

Por eso creo que es necesario hacerse cargo de la preocupación que yo tengo y que han tenido los diputados Domingorena, Luco y otros. Es indispensable lograr el cambio de redacción en la forma que lo proponemos.

Voy a apelar, señor presidente, a un procedimiento, que no será estrictamente reglamentario, pero que se vincula con la lealtad legislativa que nos debemos todos.

He escuchado hace poco una magnífica improvisación del señor diputado Balbi, quien se ha colocado en una auténtica posición de avanzada. Yo lo sé un hombre sincero; sé que lo escuchan sus compañeros. Le pediría al señor diputado Balbi que interponga sus buenos oficios y su elocuencia para que sus compañeros de sector acepten lo que le piden las otras minorías por el bien del movimiento unido de los trabajadores argentinos.

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Peña y Lillo.

Sr. Peña y Lillo. — Como miembro de la Comisión de Legislación del Trabajo quiero cumplir con un deber inexcusable. Deseo expresar a esta Honorable Cámara que al acompañar a mis colegas de comisión en la redacción de este artículo no ha habido ninguna intención política subalterna como la que aquí se nos está atribuyendo hace rato. Y quiero decir algo más: que no es necesario este pedido de influencias que ha hecho el señor diputado preopinante, porque ya en un cambio de ideas con el señor presidente de la comisión acabábamos de convenir en un cambio para volver a la redacción del Poder Ejecutivo.

Sr. Pizarro. — Lo hubieran dicho antes.

Sr. Mujica. — Es que hay una gran propensión a hablar.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Díaz O'Kelly.

Sr. Díaz O'Kelly. — Deseo aclarar que cuando se debatió la ley de abastecimiento en la comisión se planteó, en pequeña escala, este mismo problema, y allí coincidieron todos los señores diputados —no recuerdo en este momento que ninguno haya puesto objeción— en que dado que el único organismo que agremiaba a todas las entidades obreras era la CGT, evidentemente era la más representativa y su nombre debía incluirse en la ley. Y en la eventualidad de que en

cualquier momento se generara una nueva organización sindical que fuera mayoritaria, sería ésta la única que representaría en el Consejo de Abastecimiento a las organizaciones obreras. En aquella oportunidad ningún partido, ni ningún sector político objetó que integrara esa representación la CGT, y así se aprobó.

No tenía intención de intervenir en este debate, pero ante el tono que el señor diputado León le dio, quiero también darle un ligero sesgo político y llamar a la reflexión al señor diputado, pidiéndole que no asuma ese tono admonitorio. Triste sería que ese lamentable espectáculo que el mismo señor diputado dio ayer con su imprudencia frente a un diputado de un país extranjero, se repitiera indefinidamente por cometer imprudencias de este tipo.

El señor diputado León habló de un partido que cumplió un montón de cosas, pero, ese partido que no tuvo necesidad de ejercer ninguna forma de violencia, porque no fue gobierno nunca. Y dice tal vez bien. Este partido insiste en decir lo que es; pero lo que olvida decir es que nunca fue gobierno ni aun ahora es gobierno. Ese partido es el partido del vacío de poder.

—Varios señores diputados hablan a la vez, y suena la campana.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvanse no interrumpir los señores diputados.

Sr. Díaz O' Kelly. — Y cuando algunos partidos tratábamos de gobernar sin plan Conintes, auspiciaron el golpe, quisieron derrocar las estructuras institucionales. Es cierto que no han realizado ningún tipo de detenciones, que no han utilizado las fuerzas armadas; pero también es cierto que no tienen fuerza ni para detener y encarcelar. Es cierto que están cumpliendo un programa, pero también es cierto que han postrado un país.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Está en discusión el proyecto sobre salario mínimo vital y móvil, señor diputado.

Sr. Díaz O' Kelly. — Es exacto, señor presidente, pero también es cierto que el mismo tema se discutía cuando el señor diputado León insolentemente nos ofendía.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Serú García.

Sr. Serú García. — Desde luego, yo también estoy tentado de contestarle al señor diputado León la incursión provocativa que hizo en el terreno político. Yo no creía que un miembro del sector mayoritario de la Cámara tuviese derecho a hacer imputaciones y traer recuerdos que pudieran malograr el clima necesario para encontrar coincidencias en la sanción de una ley tan importante como la que estamos tratando.

Sr. Elena. — Las imputaciones salieron de esas bancas.

Sr. Serú García. — Yo dije en mi intervención anterior que, en más de una ocasión, hemos tenido que mordernos la lengua antes que contestar las provocaciones, porque en ningún

caso haríamos el juego a los sectores o a los diputados que nos provocan para llevarnos a planteamientos de tipo político con el afán de exhibir al movimiento político que representamos como proclive a soluciones de fuerza, caóticas, totalitarias y antidemocráticas.

Pero teníamos razón cuando planteamos este problema de la necesidad de que en la ley se diga con claridad que la representación de los trabajadores argentinos en el instituto que por ella se crea debe estar a cargo de la Confederación General del Trabajo.

Teníamos razón, y poco a poco la va reconociendo el sector de la Unión Cívica Radical del Pueblo, si es que se confirma lo que ha adelantado el señor diputado Peña y Lillo, al señalar que, evidentemente, la redacción de la ley era defectuosa, lo que dio lugar a que algunos mal pensados adjudicaran esos defectos a algún propósito subalterno y otros creyeran que era un simple e impensado error.

Lo cierto es que era absolutamente necesario ponerlo de relieve, para que el sector de la Unión Cívica Radical del Pueblo corrigiera el error en que había incurrido al formular el dictamen de la mayoría. Ese error no provenía del Poder Ejecutivo, y, por lo tanto, el señor diputado León no necesitaba escudarse detrás del nombre del presidente de la República o del señor ministro del Interior para cubrir las modificaciones que había hecho en la comisión el bloque a que pertenece. El proyecto del Poder Ejecutivo establecía con toda claridad que la representación de los trabajadores la tendrá la central de los trabajadores. «La central», en singular. En cambio, en el dictamen se establece que los representantes serán designados a propuesta «de la o de las» organizaciones sindicales con personería gremial más representativa, es decir, en plural. Lo cual significa que se estaba abriendo el camino para una posible división de la Confederación General del Trabajo. A esto es a lo que le hemos salido al paso con nuestra intervención en este debate.

Aun admitiendo que hemos alcanzado una primera victoria en el esclarecimiento del problema al haberse allanado el sector radical del pueblo a que se establezca que debe ser la central obrera más representativa la que proponga los representantes al consejo, pregunto qué inconvenientes hay...

Sr. Peña y Lillo. — He hablado como integrante de la comisión, y no en representación del sector radical.

Sr. Serú García. — El señor diputado dijo que había consultado con el presidente de la comisión, que pertenece a la Unión Cívica Radical del Pueblo.

Sr. Pena. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado Serú García?

Sr. Serú García. — Sí, señor diputado.

Sr. Pena. — Para que no haya confusión, quiero aclarar que lo que se ha decidido en una rápida consulta con los demás miembros de la

comisión, es incorporar después de la palabra «sindicales» la expresión «centrales», porque algunas de las observaciones formuladas en el curso del debate, que no fue intención de la comisión provocarlo de ninguna manera, advirtieron a la misma que por esta vía podría anarquizarse a los gremios, dando representación a organizaciones que no tuvieran representación de carácter nacional. Por lo tanto, la comisión aceptará, en definitiva, la incorporación de la palabra «centrales» para que esa organización o esas organizaciones que puedan tener representación en el Consejo Nacional de Salarios representen a los trabajadores de todo el país.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Serú García.

Sr. Serú García. — Señor presidente: si no he entendido mal, la comisión, en mayoría, mantiene el criterio de que los miembros en el consejo sean designados a propuesta de las organizaciones centrales, en plural. Allí está el germen de la división del movimiento obrero argentino. Y nosotros insistimos en sostener el principio que guió al Poder Ejecutivo nacional, es decir, singularizar en la central de trabajadores más representativa con personería gremial e inclusive agregamos —y éste es el criterio definitivo— que la única central de trabajadores más representativa, con personería gremial, es la Confederación General del Trabajo.

Desde el momento en que el sector de la mayoría, no ya el Poder Ejecutivo, ni el ministro del Interior, sino el bloque de la Unión Cívica Radical del Pueblo de la Cámara de Diputados de la Nación insiste en soslayar el problema y pretende introducir esta cuña que dará lugar a la división del movimiento obrero argentino, me ratifico en mis expresiones anteriores en el sentido de que esa posición del bloque de la primera minoría es sospechosa. Nosotros mantendremos la redacción del artículo diciendo clara y categóricamente que la representatividad debe estar a cargo de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina.

Sr. Elena. — No sea injusto el señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado García.

Sr. García. — Señor presidente: bien sabe la Cámara que mi espíritu no es proclive a este tipo de debates, en cuya fecundidad no creo; pero no he sido yo, ni este sector, quien lo desencadenó. Nos agreden en el juego y al juego vamos a entrar, porque a veces es necesario decir algunas cosas, evadiéndose un poco de este ritmo calmo en que queremos estar para conciliar al país argentino.

Yo señalo que hay en el país una multiforme conspiración de sectores para hacer perder la calma y la serenidad a nuestro gobierno, que enfrenta, por cierto, problemas difíciles. En esta conspiración algunos entran por resentimientos congénitos y otros porque hemos golpeado en lugares neurálgicos de sus oscuros intereses antinacionales. Otros lo hacen por inadverten-

cia de la realidad que está en juego en este momento en el país.

Yo pregunto, por ejemplo, para demostrar este aserto, si es posible que la Cámara, que estaba trabajando seriamente en un proyecto de magnitud social decisiva para el país, haya sido provocada por la acción de señores legisladores que vienen de la convención de su partido, donde quizá han estado rumiando la frustración de una nueva división partidaria. ¿Por qué planteamos inopinadamente esta sospecha absurda y cruel, cuando, en una rápida consulta de la comisión respectiva en la que nuestro sector tiene mayoría, pudo subsanar cualquier discrepancia, sin dar pie a segundas intenciones, tal como ha ocurrido.

Yo pregunto si hay derecho a que estos señores que salen de la frustración de su tercer cisma partidario, en tono insinuante, se planteen una serie de interrogantes, expresando que les llama la atención nuestra actitud. A mí me llaman la atención estas exhortaciones a la solidaridad obrera y la sensibilidad hacia los sectores del trabajo por parte de algunos señores diputados, y en especial de un señor diputado —lamento tener que decirlo— que no vaciló en avalar con sus actitudes en esta Cámara toda una política represiva del movimiento gremial argentino, y que en otro orden de cosas echó simientes de disgregación con la modificación de un artículo de la ley de educación pública argentina. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. García. — A mí me duele más que a nadie usar este lenguaje, pero hemos sido agredidos, y yo no admito que vengan a desgarrarse las vestiduras quienes vivieron permanentemente durante cuatro años en la inconducta pública adhiriendo a un gobierno que no realizó ninguna de las postulaciones que había prometido a la ciudadanía.

A mí me resulta extraño este asustarse del señor diputado Serú García por la pretendida interferencia en el gobierno obrero por parte del Poder Ejecutivo y de nuestro partido. ¿Es posible que olvidemos —y no queremos volver al pasado, pero se nos lleva a él— que cuando ellos fueron realidad en el gobierno tenían a la CGT como una rama del partido peronista? ¿Cómo es posible utilizar, entonces, ese tono de admonición moral, cuando aquí nadie quiere acusar a nadie, porque entendemos que debe excusarse a todos por nuestra actuación en los últimos años de la vida argentina!

Sr. Serú García. — Ustedes quieren dividir.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvase no interrumpir el señor diputado Serú García.

Sr. García. — Nosotros queremos, porque está en toda nuestra trayectoria conceptual, una CGT al servicio de los altos intereses del pueblo trabajador, en una unidad que venga de la espontaneidad entrañable del movimiento obrero.

Nos oponemos nosotros a todo lo que sea desunir. Pero ¿de dónde proviene el peligro de división intrínseca y más o menos profunda del movimiento obrero? ¿Es que acaso los correligionarios de los señores diputados justicialistas no colocaron a la central obrera al borde de la ruptura cuando pretendieron embarcarla antes del 7 de julio en el frente popular y antinacional que respaldaba a la candidatura más impopular que hasta ese momento registraba el país, la del señor Vicente Solano Lima? (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

¿Por qué se usa, entonces, ese tono por parte de quienes parecen avalar la perturbación organizada en este recinto por parte de los sectores de la frustración, del resentimiento y de la nueva división partidaria? ¿Por qué se usa ese tono en un momento en que la Cámara estaba seriamente tratando un proyecto que responde a las necesidades vitales de nuestros hombres de trabajo? ¿Y por qué sin darse cuenta entran en ello hombres que tienen las manos limpias y la frente alta, como los del socialismo argentino, a quienes reconozco muy especialmente? ¿Por qué se promueve, entonces, este tipo de debate?

Sr. Sago. — Para que se sancione una buena ley, señor diputado; para eso le llamamos a la reflexión.

Sr. García. — Si cuando se trataba la ley el señor diputado estaba ausente de la banca.

Sr. Sago. — Ustedes están ausentes del país.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvanse no dialogar los señores diputados.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado García.

Sr. García. — No soy partidario de este tono ni de este tipo de debate, pero algunas cosas he debido decir, aunque con pesar de espíritu, sobre todo aquellas referidas a un amigo dilecto, el señor diputado Domingorena, que creo que es imposible que continúe actuando en esa tesitura. Las he tenido que decir porque se ha mencionado con injusticia en el tema por parte del justicialismo, haciendo recordar un pasado que yo he querido olvidar, porque a pesar de mis cinco, diez o no sé cuántos carcelazos, que se me impusieron cuando hacíamos estas reflexiones en la calle...

—Hablan varios señores diputados a la vez.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvanse los señores diputados no interrumpir al orador.

—Hablan varios señores diputados simultáneamente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia ha tenido que advertir tres veces al señor diputado Serú García que no interrumpiese al orador, y el mismo número de veces al señor diputado Lozano.

Sr. Lozano. — Seré advertido cinco veces antes de...

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia llama al orden al señor diputado Lozano.

Sr. Serú García. — ¿Cómo es posible esto?

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado García.

Sr. García. — Mis palabras están enderezadas a un solo fin: a señalar que, a pesar de estos choques y de este juego en que entran hombres que prometieron la convivencia parlamentaria para que no fracasaran las estructuras de la democracia, a quienes observo dejar cada vez más de lado esa afirmación a medida que se acerca el proceso electoral, en el que seguramente los partidos del resentimiento podrán acercarse a los que están en esta postura fácil; decía que, a pesar de todo esto, superando los esquemas de la agresión provocada, como ha sido la que se introdujo esta tarde en el recinto, no hemos de perder la calma, ni la serenidad profunda, ni la responsabilidad que mostramos desde el gobierno.

—Hablan varios señores diputados a la vez, y suena la campana.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado García.

Sr. García. — Pero no nos desviarán. Somos fuertes por muchas cosas, muchas, incluso en las que no creen los señores diputados; pero fundamentalmente no vamos a perder la serenidad, porque tenemos una suprema fortaleza: la que proviene de nuestra conducta, que no pueden exhibir muchos de los sectores que nos han agredido hoy en esta Cámara. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una segunda intervención tiene la palabra el señor diputado Luco. Reglamentariamente le corresponden cinco minutos.

Sr. Luco. — Señor presidente: los diputados León y García han hablado con tremenda pasión...

Sr. Fiol. — Pasión de argentinos.

Sr. Luco. — ...con emoción —no con serenidad, como dijeron—, emoción y pasión a la que tienen todo derecho. Confieso que casi he llegado a emocionarme yo también. Lo cierto es que, a pesar de la grandeza del Partido Radical, que exhibieron y que reconozco, se olvidaron de sus miserias, que, como todos los partidos políticos, también las tiene.

Fueron ellos quienes han hurgado demasiado en el pasado. Nuestra posición es la de olvidar el pasado en lo posible y construir un futuro; pero para este futuro que queremos y en el que podemos coincidir todavía, el artículo en discusión es peligroso. Lo crean o no los señores diputados, haya estado o no en el ánimo de los miembros de la comisión, su redacción abre la posibilidad de la división del movimiento obrero argentino. Estamos totalmente convencidos de que si este artículo se vota tal como está en el dictamen de la mayoría, dada la tensión en que vivimos, proliferarán en poquísimos tiempo los sindicatos paralelos y se perderá todo el esfuerzo de los sectores gre-

miales que, aun a costa de sacrificios, han pactado y construido la CGT única. Esta desaparecerá, y no creo que para el futuro argentino que todos deseamos ello pueda ser beneficioso.

Una CGT unida va a contribuir, tanto con este gobierno como con cualquier otro que quiera resolver los problemas nacionales, al diálogo directo y al rápido remedio de los obstáculos que pueda encontrar el país en su marcha. No comprendo la alarma de los señores diputados ante el simple pedido de que se incluya en el artículo directamente el nombre de la CGT, que ellos mismos reconocen como única entidad obrera representativa, para aclarar y para dar un verdadero, auténtico y real sentido a la redacción de este artículo.

La redacción que voy a proponer, solicitando que se tome nota de ella por Secretaría, es la redacción definitiva que pedimos sea aprobada por la comisión y votada favorablemente por el cuerpo. Proponemos que se suprima la expresión siguiente contenida en nuestra proposición anterior: «La representación de los trabajadores en el Consejo debe ser designada a propuesta de la Confederación General del Trabajo», y que a continuación de las palabras «ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Economía», se diga directamente «de la CGT», continuando el párrafo tal como está. Además, el último párrafo debe comenzar diciendo: «Si alguno de los sectores mencionados», y continuar con la frase final del artículo. Esta redacción da el exacto sentido del espíritu en que hemos coincidido.

Por último, declaro que después de las expresiones vertidas en este debate por el bloque de la primera minoría, desgraciadamente me queda la sospecha de que se está gestando una maniobra para la división del movimiento obrero argentino. Y si en algún despacho gubernativo o en algún comité partidario se está gestando esta maniobra, les pido que nos acompañen para eludirla y evitarla.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Domingorena para una segunda intervención, correspondiéndole, en consecuencia, cinco minutos para su exposición.

Sr. Domingorena. — El señor diputado García ha dicho: «Nos han llamado a un juego, y al juego vamos.» Mis palabras no van a ir al juego al que el señor diputado quiere llevarme, porque creo que estamos legislando, y que no es precisamente con ex abruptos y con una vehemencia, que no justifico en un entrañable amigo, como vamos a resolver un problema de legislación.

Seguramente en su afán por enturbiar las aguas del debate, el señor diputado ha incurrido en la vida interna de nuestro partido; además —y esto es lo grave—, ha dicho que la modificación a una ley de enseñanza provocó la disgregación argentina. No sé si todo ese sector suscribe las palabras del señor diputado García,

porque noté algunos aplausos y muchas reticencias.

Además, el Poder Ejecutivo, a través de su ministro de Educación, ha reiterado el propósito de defender la enseñanza privada en el país...

Sr. Lejarraga. — Controlada.

Sr. Domingorena. — ...y mucho me temo que los aires cordobeses hayan enrarecido el ambiente de este recinto, precisamente a través de las palabras del diputado por Córdoba, señor García, para cobrarse deudas que entiendo están muy superadas en el país.

Bastaría con decir amablemente al señor diputado García que si su sector está en contra de la modificación del artículo 28 de la ley universitaria, como dicho sector es gobierno, esperaríamos la modificación que se proyecte y el debate correspondiente, para que en verdad tengamos confianza de que lo que ha dicho el señor diputado García no corre a título personal y no importa trasladar un poco el clima de Córdoba al escenario nacional.

Sr. Fiol. — Eso se hará a su tiempo, señor diputado.

Sr. Domingorena. — Vuelvo al tema, señor presidente.

Yo no tengo dudas ya acerca de la finalidad perseguida por el sector mayoritario con respecto a la redacción de este artículo. El señor diputado Luco ha sido muy generoso cuando dijo que dudaba de la intención. Yo confieso que hubiese querido estar también en esa duda; pero con la aclaración formulada recientemente y al hablarse en plural de organizaciones sindicales centrales, no me queda ya ninguna clase de dudas de que el partido gobernante va directamente a la división de la central obrera. Esto es decir, en síntesis, que la enmienda es mucho más peligrosa que el soneto. Teníamos sospecha de que se intentaba dividir la central obrera; ahora, con la aclaración e insistencia en plural de «las centrales obreras», ya nadie puede tener dudas de la finalidad del gobierno. Es más; cuando se señala o se advierte esta irregularidad en la ley, que tiende a modificar por vía tangencial la ley de asociaciones profesionales...

Sr. Pena. — No la modifica.

Sr. Domingorena. — ...de alguna manera estamos en la subversión. Y mientras este partido dice públicamente que está por el cambio de estructuras dentro de la Constitución y de la ley, los que no estuvieron al servicio de la Constitución y de la ley —el partido que representa, precisamente, y en nombre del cual habló el señor diputado García— ocuparon estas bancas y las abandonaron proclamando enfáticamente en el recinto que eran partidarios de la subversión y del golpe.

Ningún hombre nuestro podrá ser señalado como que está al servicio de algún tipo de cambio estructural que no sea el que emana de la Constitución y de la ley, que hemos jurado respetar, a la que nos debemos, porque estamos

persuadidos de que dentro de los carriles legales vamos a imponer las transformaciones políticas y económicas que el país precisa.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Ha expirado el término de que disponía reglamentariamente, señor diputado Domingorena.

Sr. Domingorena. — Concluyo, señor presidente.

Nosotros no iremos al juego de la provocación. Dicho esto, mantendremos nuestra serenidad en el debate. Me alarma la redacción del artículo, y creo que es un anticipo de lo que puede ocurrir con el estatuto de los partidos políticos, cuyo artículo 19 ya está insinuando un determinado tipo de proscripciones. No me manejo con presunciones, sino con hechos que han sido brindados precisamente por la bancada mayoritaria.

Termino diciendo que si es cierto que no estamos buscando la división de la central obrera y si es cierto que estamos tratando de vertebrar movimientos sindicales bien constituidos, con representatividad auténtica, sean un poco más generosos en la concesión los señores diputados: no hablemos en plural, y con los hechos habrán aventado las sospechas o las dudas de los que confesamos que estamos un poco prevenidos en estas cosas por tantos antecedentes raros que vamos encontrando a través de todo el camino recorrido.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Minsk.

Sr. Minsk. — Señor presidente: se termina de reiterar por vía parabólica la expresión «juego» e implícitamente el envite, con la expresión un poco criolla de tironeo para llevarlo a cabo.

El señor diputado Domingorena, en quien reconozco un extraordinario jugador parlamentario, habrá de perdonarme si yo a mi vez no acepto el envite y no me sumo a la beligerancia.

Sr. Domingorena. — Me alegro, señor diputado.

Sr. Minsk. — Como algo nos caracteriza, y es la franqueza, hago un deber mío, señor diputado Domingorena, con perdón de la Presidencia, en decir que suscribo totalmente lo que ha dicho el señor diputado García referido a ese desdichado artículo 28 de triste recordación.

Sr. Domingorena. — Está en su derecho. Ahora espero la palabra del presidente del bloque, después de la suya.

Sr. Minsk. — Acepto, en cambio, la invitación del señor diputado Horacio García cuando termina su discurso pidiendo calma y tranquilidad. Y en el ejercicio de ese envite aceptado, el que habla, que no puede ser sospechado de capitalista, si capitalista es aquel que suma los efectivos de las cuentas bancarias y de las empresas que administrara, puede admitir en cambio que así se le titule cuando se trate de evidenciar esta hermosa colección de afectos y amistades que en esta Honorable Cámara se jacta de tener.

Y es por ello que con calma y tranquilidad me dirijo a mi estimado amigo, el diputado

Díaz O'Kelly para pedir a su hombría de bien, que hasta ahora no puede ser puesta en duda, que recuerde cómo infortunadamente en la pasión que él también tuvo en su gran vehemencia —que yo he respetado— dio un calificativo a un señor diputado también amigo que, deplorablemente, estaba ausente en ese momento y que todavía no ha regresado a este recinto.

El pedido de palabra ha sido, concretamente, para solicitarle a mi distinguido amigo el diputado Díaz O'Kelly que en el ejercicio de su calidad personal retire la palabra «insolente» que tal vez no recuerde pero que, desgraciadamente, pronunció y que deja una marca no muy grata para la bancada radical del pueblo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado Díaz O'Kelly.

Sr. Díaz O'Kelly. — Recojo con mucho gusto las palabras del diputado Minsk. Aclaro que no sabía que el diputado León no estaba presente en el recinto.

Aclaro con toda lealtad, también, que cuando dije «insolente» no lo dije llevado por la pasión, sino conscientemente. Pero también declaro que si en alguna forma el hecho de que yo retire la palabra contribuye a restablecer el orden, la retiro con mucho gusto partiendo de la premisa de que si el diputado León estuviese presente en el recinto, retiraría también los exabruptos con los cuales se dirigió a nuestro grupo parlamentario.

Y ampliando el concepto, debo dirigirme a otro hombre, con permiso de la Presidencia, al cual conozco desde hace poco tiempo en este recinto: el diputado García. Dijo el diputado García, estimo que llevado también por la pasión, dos cosas que a los hombres que integramos la bancada de la UCRI nos duelen profundamente. Expresó genéricamente, acusando a estos veinte hombres de la UCRI, que había inconducta pública en nosotros. Y posteriormente, también en una forma genérica, para mí absolutamente —digamos— descomedida, en el mejor sentido de la palabra, se refirió a los hombres que suscriben una disidencia, pidiendo la inclusión del nombre de la CGT en el dictamen. Dijo concreta y expresamente que respetaba a algunos bloques, mencionando al socialismo argentino, porque tenía las manos limpias. No sé si con esto el señor diputado García insinúa en alguna forma, con cualquier índice de certeza, que entre esto veinte hombres hay alguno que tiene las manos sucias. Si así lo sugiere, planteo la cuestión en estos términos y recurro a su hidalguía para que con toda claridad nos acuse, y si no es así rogamos a su caballerosidad que retire ese insulto que, evidentemente, para los que hemos hecho de cuatro años de vida pública, cuatro años de pensión, cuatro años de sacrificio, es sumamente lamentable y por sobre todas las cosas absolutamente intolerable.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado García.

Sr. García. — Comenzaré por decir, señor presidente, que un cumplido caballero como es el señor diputado Díaz O'Kelly bien merece esta explicación. Anticipo que cualquier expresión que pudiera haber sido interpretada por el señor diputado como menoscabante o agravian- te para él o individualmente para los hombres de su sector, puede desde ya considerarla como retirada.

Cuando hablé de inconducta pública —no recuerdo si ése es el término exacto que empleé— quise hacer referencia a que el señor diputado perfiló su militancia en un partido —y éste es un juicio político objetivo y personal que podrá ser o no exacto para el señor diputado— que prometió algo al país en el llano y que luego realizó otra cosa desde el gobierno. Y el término «manos limpias» no está referido a ninguna actividad delictuosa de tipo individual o de sector político, sino a que lamentablemente no fue juego limpio lo que hicieron con el país. Este es el sentido de mis palabras.

Quiero hacer referencia ahora a expresiones del señor diputado Domingorena. En cuanto a su referencia al golpe, acusó a nuestro partido con no absoluta lealtad, porque si bien es cierto que pudieron haberlo aprobado individualmente algunos de nuestros hombres, sabe bien el señor diputado que el partido como tal a través de sus organismos representativos —los cuales he integrado en aquella época— nunca se definió por esta línea política. Esta aclaración era indispensable si vamos a actuar con lealtad.

Sr. Domingorena. — Si actúa con lealtad no puede hacer imputaciones como las que ha hecho respecto de nuestro sector.

Sr. García. — Finalmente, pretendió insinuar un interrogatorio a este sector por el alcance de mis palabras referido al famoso y remanido artículo 28. Nosotros somos un partido que cree en la continuidad histórica, creencia de la que no participan, por lo visto, otros sectores de la vida argentina. Por eso enjuiciamos aquel artículo 28 con términos que están protocolizados en forma pública, de lo cual dan testimonio los Diarios de Sesiones de la época.

Sr. Domingorena. — Pero ahora no se animan a sostenerla.

Sr. García. — Posición que sustentamos y con la cual fuimos solidarios en aquel momento. Las proyecciones de esa reforma, disgregantes o no de la comunidad, las veremos con el transcurso del tiempo. El devenir histórico dirá si el nuestro fue un juicio equivocado.

Finalmente, debo decir que no sé cuál es el pensamiento de mi partido, porque no se ha planteado ese problema en cuanto al artículo 28, sobre enseñanza privada. Pero si me piden mi opinión personal, yo la daré. Entiendo que no se deben abrir más frentes de desencuentro en el país, como lo hacen y lo provocan en este mismo recinto hombres de otros sectores que están en la agresión a que aludía recién. Cualquiera sea la ortodoxia —y en alguna medida anticipo juicio también sobre otros problemas que podemos tener, por ejemplo, en la Comisión de Legislación General, que preside el señor diputado Pizarro—, no hemos de abrir nuevos frentes de desencuentro argentino. Esto es lo que personalmente puedo decir como respuesta al interrogante insinuado por el señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Señores diputados: la Presidencia advierte que el debate está derivando hacia temas muy ajenos al que está en consideración de la Honorable Cámara. Con el buen propósito de procurar reencauzarlo, y en uso de las facultades reglamentarias que le otorga el artículo 158, invita a la Honorable Cámara a pasar a un cuarto intermedio de quince minutos.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 20 y 40.

—A la hora 21 y 20:

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa la sesión.

Para una moción de orden, tiene la palabra el señor diputado Muniagurria.

Sr. Muniagurria. — Señor presidente: la fatiga de la Cámara, explicable después de la prolongada sesión del día de hoy, y lo avanzado de la hora, han determinado que cambiáramos impresiones con los representantes de los distintos bloques, y como resultado de esa consulta se me ha encomendado que solicite a la Cámara que pasemos a cuarto intermedio hasta el día miércoles próximo a las 15, a fin de continuar el tratamiento de la cuestión en debate. Hago moción en ese sentido.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar la moción de orden formulada por el señor diputado Muniagurria.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta el día miércoles 3 de junio a las 15.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 21 y 25.